

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR OCCIDENTE
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ABOGADO Y NOTARIO



TESIS

**“VIOLACION A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y GARANTIA CONSTITUCIONAL DE
HABEAS DATA, POR LOS PORTALES ELECTRONICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES”**

POR:

FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUAREZ BARRIOS

Previo a conferírsele el grado académico de:
LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de:
ABOGADO Y NOTARIO

Mazatenango, Suchitepéquez, Noviembre 2013

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR OCCIDENTE
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ABOGADO Y NOTARIO



TESIS
“VIOLACION A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE
HABEAS DATA, POR LOS PORTALES ELECTRONICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES”

Presentada a las autoridades de la Carrera de
Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario,
del Centro Universitario del Sur Occidente –CUNSUROC-
de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-

POR:
FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUAREZ BARRIOS

Previo a conferírsele el grado académico de:
LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de:
ABOGADO Y NOTARIO

Mazatenango, Suchitepéquez, Noviembre 2013

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR OCCIDENTE

AUTORIDADES

Dr. Carlos Estuardo Gálvez Barrios	Rector
Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo	Secretario General

Miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario del Sur Occidente

Lic. José Alberto Chuga Escobar	Presidente
---------------------------------	------------

Representantes Docentes

Dra. Alba Ruth Maldonado de Chávez	Secretario
Ing. Agr. Luis Alfredo Tobar Piril	Vocal

Representante Graduados del CUNSUROC

Licda. Mildred Gricelda Hidalgo Mazariegos	Vocal
--	-------

Representantes Estudiantiles

Br. Cristian Ernesto Castillo Sandoval	Vocal
P.E.M Carlos Enrique Jalel de los Santos	Vocal

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Coordinador Académico

Dr. Luis Gregorio San Juan Estrada

Coordinador de las Carreras de Pedagogía

Msc. Nery Edgar Saquimux Canastuj

Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Alimentos

Msc. Gladys Floriselda Calderón Castilla

Coordinador de la Carrera de Agronomía Tropical

Msc. Erick Alexander España Miranda

Coordinador del Área Social Humanista

Lic. José Felipe Martínez Domínguez

Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas

Msc. Rafael Armando Fonseca Ralda

Encargado de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario

Lic. Henry Estuardo Ayala Dardón

Coordinador de la Carrera de Trabajo Social

Dr. Ralfi Obdulio Pappa Santos

Encargado de la Carrera de Gestión Ambiental Local

Msc. Celso González Morales.

CARRERAS PLAN FIN DE SEMANA CUNSUROC

Encargado de las Carreras de Pedagogía

Lic. Manuel Antonio Gamboa Gutiérrez

Encargado Carrera Técnico Periodista Profesional, y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Licda. Paola Marisol Rabanales

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

FASE PRIVADA

Lic. Carlos Enrique Bino Ponce	Derecho Notarial
Lic. Julio Roberto Ramírez Silva	Derecho Mercantil
Lic. Sergio Madrazo Mazariegos	Derecho Civil

FASE PÚBLICA

Lic. Henry Estuardo Ayala Dardón	Derecho Penal
Lic. Landelino Ranferi de Leon de Leon	Derecho del Trabajo
Lic. Jorge Amilcar Castillo Escobar	Derecho Administrativo

ASESOR DE TESIS

Lic. Adolfo René Ruíz Almengor

REVISOR DE TESIS

Lic. Henry Estuardo Ayala Dardón

PADRINOS DE GRADUACIÓN

- Licda. Emelina Barrios López de Juárez
- Lic. Nery Edgar Juárez Rosoto
- Lic. José Alberto López Ziller



AU.TES CD 01-2013

COORDINACION DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ABOGADO Y NOTARIO. CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

1. A sus antecedentes el memorial que antecede y fórmese el expediente respectivo.
2. Con fundamento en el artículo 7 del Normativo de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del centro Universitario del Sur-Occidente, se asigna como trabajo de tesis a la estudiante FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUÁREZ BARRIOS, titulado preliminarmente "VIOLACIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA Y AL PRINCIPIO ESPECIAL DE DISPOSICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE ALGUNOS MINISTERIOS DE ESTADO"
3. En virtud de lo anterior, se nombra como su asesor al Licenciado ADOLFO RENÉ RUÍZ ALMENGOR.
4. Notifíquese y extiéndase certificación de la presente.

Atentamente,

~~"ID Y ENSEÑAD A TODOS"~~

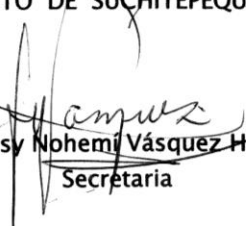
Lic. Eduardo Arturo Escobar Rubio
Encargado de la carrera

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Sur Occidente
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ABOGADO Y NOTARIO



LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ABOGADO Y NOTARIO, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,-USAC, CERTIFICA: HABER TENIDO A LA VISTA LA RESOLUCIÓN PROFERIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1-2013, DE FECHA TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, LA CUAL, LITERALMENTE DICE: "COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO, CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE. MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.// Con fundamento en el artículo 7 del Normativo de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del centro Universitario del Sur-Occidente, se designa como ASESOR del trabajo de tesis de la Bachiller FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUÁREZ BARRIOS, titulado preliminarmente "VIOLACIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA Y AL PRINCIPIO ESPECIAL DE DISPOSICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE ALGUNOS MINISTERIOS DE ESTADO, al Licenciado ADOLFO RENÉ RUÍZ ALMENGOR, consecuentemente, se solicita a la estudiante que conjuntamente con su asesor elaboren el diseño de investigación y lo sometan a consideración de esta Coordinación para su aprobación correspondiente, previo a la elaboración del trabajo designado; debiendo el asesor nombrado oportunamente, rendir su dictamen al finalizar la labor encomendada. // Atentamente, // 'ID Y ENSEÑAD A TODOS' // (fs. ilegible. Lic. Eduardo Arturo Escobar Rubio // Encargado de la Carrera)".

Y PARA LOS USOS QUE AL INTERESADO CONVENGAN, SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND MEMBRETADA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE, EN LA CIUDAD DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.


TAE. Ily Nohemí Vásquez Herrera
Secretaria


Vo. Bo. Lic. Eduardo Arturo Escobar Rubio
Encargado de la Carrera



NOMAS CD 01-2013

COORDINACION DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ABOGADO Y NOTARIO. CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR OCCIDENTE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

Con fundamento en el artículo 7 del Normativo de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del centro Universitario del Sur-Occidente, se designa como ASESOR del trabajo de tesis de la Bachiller FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUÁREZ BARRIOS, titulado preliminarmente "VIOLACIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA Y AL PRINCIPIO ESPECIAL DE DISPOSICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE ALGUNOS MINISTERIOS DE ESTADO, al Licenciado ADOLFO RENÉ RUÍZ ALMENGOR, consecuentemente, se solicita a la estudiante que conjuntamente con su asesor elaboren el diseño de investigación y lo sometan a consideración de esta Coordinación para su aprobación correspondiente, previo a la elaboración del trabajo designado; debiendo el asesor nombrado oportunamente, rendir su dictamen al finalizar la labor encomendada.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Lic. Eduardo Arturo Escobar Rubio
Encargado de la Carrera

Mazatenango, Suchitepéquez 09 de Abril del 2013.

Licenciado

Eduardo Arturo Escobar Rubio

Encargado de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Sur Occidente CUNSUROC.

Respetable Licenciado:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el objeto de rendir informe en relación a lo siguiente:

1. Con fecha nueve de Abril del año dos mil trece se terminó de elaborar completamente el diseño de investigación del punto de tesis titulado "VIOLACIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA Y AL PRINCIPIO ESPECIAL DE DISPOSICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE ALGUNOS MINISTERIOS DE ESTADO", para el cual oportunamente fui nombrado por dicha casa de estudios superiores, para asesorar a la alumna FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUAREZ BARRIOS con carné 200540966.
2. Por lo tanto emito el presente informe, para que dicho diseño de investigación, sea sometido a consideración de la coordinación de ciencias jurídicas y sociales del CUNSUROC, para que proceda a realizar la aprobación correspondiente.

Razón por la cual procedo a proferir el presente DICTAMEN por haber finalizado con la labor encomendada.

Sin otro particular.

Licenciado Adolfo René Ruiz Almengor
Abogado y Notario
Asesor de Tesis.

Lic.
Adolfo Rene Ruiz Almengor
Abogado y Notario



A.P.TES 02-2013

COORDINACION DE LA CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO. CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR OCCIDENTE. MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SEIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE.

Se procede a resolver la solicitud planteada por la Bachiller FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUAREZ BARRIOS, de fecha veintitrés de abril del año en curso, mediante la cual solicita que en virtud de cumplir con los requisitos exigidos por el Normativo de Tesis, se apruebe el diseño de investigación y se apruebe en forma definitiva el punto de tesis.

De conformidad con el artículo 8 del Normativo de Tesis de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del centro Universitario del Sur Occidente, para que un punto de tesis sea aprobado en definitiva, deberá presentarse con los siguientes requisitos: Constancia de cierre de pensum; solvencia de Tesorería; solvencia de biblioteca, documentos del diseño de investigación y copia del nombramiento del asesor. Así como también cumplir con lo preceptuado por el artículo 9 del normativo en mención.

Habiéndose procedido a realizar el análisis de la documentación presentada por la bachiller FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUAREZ BARRIOS, es evidente, que cumple con los requisitos establecidos por los artículos 8 y 9 del Reglamento de Tesis. Así mismo, se tuvo a la vista el oficio de fecha nueve del abril del presente año, remitido por el Licenciado ADOLFO RENE RUIZ ALMENGOR, mediante el cual indica que procedió a evaluar el plan de investigación y el tema propuesto, opinando que se satisfacen los requisitos exigidos por el Normativo de Tesis de este centro de estudios.

POR TANTO: Con fundamento en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Tesis de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario del Sur Occidente, y con base en el dictamen emitido por el Licenciado ADOLFO RENE RUIZ ALMENGOR, SE APRUEBA el punto de tesis: "VIOLACIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA Y AL PRINCIPIO ESPECIAL DE DISPOSICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE ALGUNOS MINISTERIOS DE ESTADO", propuesto por la bachiller FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUAREZ BARRIOS y se ACEPTA como ASESOR al Licenciado ADOLFO RENE RUIZ ALMENGOR.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAR A TODOS"

Lic. Eduardo Arturo Escobar Rubio
Encargado de la Carrera

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario del Sur Occidente
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ABOGADO Y NOTARIO





LICENCIADO
HENRY ESTUARDO AYALA DARDON
ABOGADO Y NOTARIO

Mazatenango Suchitepéquez,
18 de Noviembre del 2013.-

LICENCIADO
HENRY ESTUARDO AYALA DARDON
ENCARGADO DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
SU DESPACHO.-

De manera atenta rindo a usted informe sobre la revisión del trabajo de tesis de la Bachiller Francisca Emelina del Rosario Juárez Barrios, titulado: "VIOLACION A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y GARANTIA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES."

La revisión la efectué en forma persona y conjunta con la bachiller sustentante, respetando su criterio, atendiendo las observaciones y recomendaciones que formulé.

El trabajo que se sustenta, contiene conclusiones y recomendaciones dignas de tomarse en cuenta en el medio forense.

La tesis elaborada reúne los requisitos reglamentarios, por lo que emito DICTAMEN FAVORABLE para que se ordene su impresión.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme, su atento servidor,

LIC. HENRY ESTUARDO AYALA DARDON
ABOGADO Y NOTARIO

LICENCIADO
Henry Estuardo Ayala Dardon
ABOGADO Y NOTARIO

3ª. CALLE 5-53 ZONA 1, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ
TELEFONOS: 59108219 - 51551581 - 78721698
Correo Electrónico: headsuper2007@yahoo.es



EM.OR.IM-03-2013

COORDINACION DE LA CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO. CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR OCCIDENTE. MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

Con fundamento en la literal g) del artículo 10 del Normativo de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario del Sur-Occidente, habiéndose rendido el Dictamen Favorable del revisor Licenciado Henry Estuardo Ayala Dardón del trabajo de tesis del Bachiller FRANCISCA EMELINA DEL ROSARIO JUÁREZ BARRIOS , titulado "VIOLACIÓN A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES", REMITASE a la Dirección del Centro Universitario del Sur Occidente para la emisión de la orden de impresión correspondiente.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAR A TODOS"

Lic. Henry Estuardo Ayala Dardón
Encargado de Carrera



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CUNSUROC/USAC-I-52-2013

DIRECCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUROCCIDENTE,
Mazatenango, Suchitepéquez, 25 de noviembre de dos mil trece.-----

Encontrándose agregados al expediente los dictámenes del asesor y revisor, SE
AUTORIZA LA IMPRESIÓN DE LA TESIS TITULADA: “VIOLACIÓN A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE
HABEAS DATA, POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS
MINISTERIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES”, de la estudiante: Francisca Emelina del Rosario Juárez
Barrios, carné 200540966 del carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

LIC. JOSÉ ALBERTO CHUGA ESCOBAR
DIRECTOR



/gris

DEDICATORIA

A Dios dueño y señor de toda la creación.

A mis padres y hermanas

A mi nueva familia,

*Y de manera muy, pero muy especial a mi amado esposo e hijo, como
guía y fuente de inspiración académica y profesional.*

*A la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario
de Sur Occidente. CUNSUROC*

ÍNDICE

Pág.

Introducción ----- i

CAPÍTULO I

EL DERECHO CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO Y LA DIVISIÓN DE PODERES

1.- INDEPENDENCIA POLÍTICA DE CENTROAMERICA ----- 1

1.1.- Poder Constituyente ----- 3

1.1.2.- Sujetos del Poder Constituyente y la Soberanía ----- 4

1.1.3.- Poder Constituyente Originario y Derivado ----- 7

1.1.4.- Límites del Poder Constituyente ----- 9

1.1.5.-Titularidad, Legitimidad del Ejercicio del Poder Constituyente ----- 11

1.2.- Poder Constituido -----13

1.3.- Constitucionalismo ----- 14

1.4.- El Derecho Constitucional -----16

1.5.- Estructura Constitucional ----- 18

1.6.- División de Poderes ----- 20

CAPÍTULO II

EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GUATEMALTECA

2.- DERECHO ADMINISTRATIVO ----- 23

2.1.- Los Sistemas del Derecho Administrativo----- 25

2.1.1. Las Características del Derecho Administrativo ----- 27

2.1.2. Las Fuentes del Derecho Administrativo ----- 29

2.1.3. Principios que Inspiran el Derecho Administrativo ----- 30

2.1.3.1.- Principio de Legalidad ----- 31

2.1.3.2.- Principio de Juridicidad ----- 32

2.1.3.3.- Principio de Supremacía constitucional ----- 33

2.2.- Administración Pública ----- 33

2.2.1.- Estructura de la Administración Pública ----- 34

2.2.2.- Tipos de Administración Pública ----- 39

2.2.3.- Sistemas o Técnicas de Organización de la Administración

Pública ----- 42

2.2.3.1.- Centralización ----- 43

2.2.3.2.- Descentralización ----- 44

2.2.3.3.- Desconcentración ----- 45

2.2.3.4.- Autonomía ----- 46

2.2.4.- Elementos de la Administración Pública ----- 46

2.2.4.1.-La Jerarquía administrativa ----- 46

2.2.4.2.- El Organo Administrativo ----- 47

2.2.4.2.1.- Funcionarios y Empleados Públicos ----- 47

2.2.4.2.2.- Relación funcional ----- 48

2.2.4.2.3.- Competencia Administrativa ----- 48

2.2.4.2.3.1.- Competencia Exclusiva ----- 49

2.2.4.2.3.2.- Competencia Atribuida ----- 49

2.2.4.2.3.3.- Competencia Concurrente ----- 50

2.2.4.2.4.- Función Administrativa ----- 50

2.2.4.2.5.- Acto Administrativo ----- 50

2.2.4.2.6.- Control Directo ----- 51

2.2.4.2.7.- Control Judicial ----- 52

2.2.4.3.- Actividad ----- 52

2.2.4.4.- Finalidad ----- 53

2.2.4.5.- Medio ----- 53

CAPÍTULO III

**ORGANOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO, AUDITORÍA SOCIAL, PUBLICIDAD Y
TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS**

3.- EL CONTROL Y SUS DIVERSOS ENFOQUES ----- 54

3.1.- Control Interno ----- 56

3.2.- Control Directo ----- 56

3.3.- Control de Derechos Humanos ----- 57

3.4.- Control Judicial ----- 58

3.5.- Control Constitucional ----- 60

3.6.- Control Parlamentario ----- 62

3.7.- Control de Fiscalización ----- 63

3.8.- Auditoria Social ----- 64

3.9.- Publicidad y Transparencia de los Actos Administrativos ----- 66

CAPITULO IV

**PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA**

4.- DEFINICIÓN DE PRINCIPIO ----- 68

4.1.- El Principio como Fuente de Inspiración y Dirección Legal ----- 69

4.2.- Principios generales que inspiran el Derecho Administrativo ----- 70

4.2.1.- Principio de Legalidad ----- 71

4.2.2.- Principio de Juridicidad -----	71
4.2.3.- Principio de Supremacía Constitucional -----	72
4.3.- Principios que inspiran la Administración Pública -----	73
4.3.1.- Principio de División o Separación de Poderes -----	74
4.3.2.- Principio de Descentralización -----	74
4.3.3.- Principio de participación ciudadana -----	75
4.3.4.- Principio de Jerarquía -----	75
4.3.5.- Principio de Probidad -----	76
4.3.6.- Principio de Desarrollo Nacional -----	76
4.3.7.- Principio de Gratuidad -----	77
4.3.8.- Principio de Defensa -----	77
4.3.9.- Principio de Celeridad -----	77
4.3.10.- Principio de Sencillez -----	78
4.3.11.- Principio de Eficacia del Trámite -----	78
4.3.12.- Principio de Transparencia -----	78
4.4.13.- Principio de Publicidad y Máxima Publicidad -----	79

CAPÍTULO V

EL HABEAS DATA COMO GARANTÍA DE LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN

5.- HABEAS DATA GENERALIDADES -----	81
5.1.- Conceptos Jurídicos Fundamentales en Materia de Información Pública -----	84
5.2.- Datos -----	85
5.2.1.- Tipo de datos -----	86
5.2.1.1.- Datos Personales -----	86
5.2.1.2.- Datos Sensibles -----	87
5.2.1.3.- Datos Impersonales -----	87
5.3.- Información -----	87
5.3.1.- Tipos de Información -----	88
5.3.1.1.- Información Pública -----	88
5.3.1.2.- Información Pública de Oficio -----	90
5.3.1.3.- Información Confidencial -----	91
5.3.1.4.- Información Reservada -----	93
5.4.- Sujeto Activo en Materia de Información Pública -----	94
5.5.- Sujeto Pasivo en Materia de Información Pública -----	95
5.6.- Unidades de Información Pública -----	95
5.7.- Obligaciones de Transparencia -----	96
5.8.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Habeas Data -----	101

5.8.1.- Principio de Taxatividad Legal ----- 102

5.8.2.- Actualización de Información ----- 102

5.8.3.- Disponibilidad de Información ----- 103

CAPÍTULO VI

**INSTITUCIÓN PÚBLICA ENCARGADA DE TUTELAR Y VELAR
POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE HABEAS DATA, POR LOS
PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.**

6.- UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ----- 104

6.1.- Naturaleza Jurídica ----- 105

6.2.- Objetivos -----105

6.2.1.- Generales ----- 106

6.2.2.- Específicos ----- 106

6.3.- Funciones ----- 107

6.4.- Estructura Orgánica ----- 108

6.5.- Procedimiento administrativo en materia de solicitud de información
Pública ----- 108

6.6.- Recurso de Revisión ----- 110

6.7.- Procedimiento para la verificación de información pública en portales
Web de los distintos órganos administrativos ----- 110

CAPÍTULO VII

**CONSECUENCIAS Y EFECTOS ANTE LA CONSTANTE VIOLACIÓN A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE OFICIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA, POR LOS
PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

7.- UTOPIA LEGAL ----- 113

7.1.- Consecuencias y efectos en el Ambito Social ----- 115

7.2.- Consecuencias y efectos en el Ambito Jurídico y de la administración
Pública ----- 115

7.3.- Propuesta de Anteproyecto Legislativo para Reformar el Decreto
Legislativo 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública” ----- 122

7.3.1.- Exposición de Motivos de la Propuesta a las Reformas del	
Decreto Legislativo 57-2008 “Ley de Acceso a la Información	
Pública” -----	125
Conclusiones -----	129
Recomendaciones -----	132
Anexos -----	135
Bibliografía -----	168
General: Metodológica	
Textos -----	168
Diccionarios -----	168
Específica: Textos Jurídicos	
Legislación -----	169
Otros -----	169

INTRODUCCIÓN

El habeas data es un tema que en países centroamericanos como el nuestro, y que a través de la Constitución Política de la República de Guatemala se remonta desde el año de mil novecientos cuarenta y cinco, el cual a través del tiempo se amplía y convalida con la llegada de la Ley de Acceso a la Información Pública del decreto legislativo 57-2008, la que regula los principios especiales de publicidad, máxima publicidad y transparencia de todos los actos de la administración pública que realizan todos los organismos del Estado por facultad inherente de la ley, teniendo por objeto salvaguardar el derecho de la publicidad de los datos que tiene toda persona de conocer, para minimizar así mismo al máximo las violaciones a la garantía constitucional de habeas data que se encuentra en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y a los principios especiales de exhibición, actualización y disposición de los datos e información pública de oficio, regulados en el artículo 10 del mismo cuerpo legal citado.

La Constitución Política de la República de Guatemala, consagra en su cuerpo normativo, el principio de publicidad, dicho principio consiste en ser un principio especial de los datos y la información, que en base a la observancia de la transparencia, sencillez, celeridad y gratuidad administrativa, permite que toda información en poder o posesión de cualquier sujeto obligado, sea pública, la cual no podrá ser reservada o limitada, sino únicamente por disposiciones Constitucionales o legales.

Contemporáneamente todo sujeto activo como lo denomina la citada ley, va a hacer toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en la ley, a través de los portales web, haciendo que la obtención de la publicidad de los datos sea mas rápida, cómoda y simple, pero a la vez generando una serie de inconvenientes derivados de la falta de cumplimiento de la obligación de transparencia que tienen los sujetos obligados, en este caso Los Ministerios de Trabajo y Previsión social y Ambiente y Recursos Naturales, con esta nueva forma de obtener información pública de oficio por medio de sus respectivos portales electrónicos.

Lo cual provoca que se da margen a que en un momento determinado los sujetos obligados es decir los Ministerios de Estado, se aprovechen de manera maliciosa de la forma de publicación especial de la información por los portales web, ya sea para ocultar datos importantes de las mismas o para evadir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, generando así no solo la violación a la garantía constitucional de exhibición de los datos (habeas data), sino también a los principios especiales de disposición y actualización de la información pública de oficio, los cuales son el pilar del conocimiento de los actos que realiza toda la administración pública, sino también el eje alrededor del cual giran todas las prácticas de participación ciudadana y auditoria social.

Es por lo anteriormente expuesto que surge la necesidad de reformar la normativa existente sobre la información pública de oficio, de manera que se establezca de forma específica las obligaciones de transparencia a la que están obligados Los Ministerios de Trabajo y Previsión social y Ambiente y Recursos Naturales, de publicar por los portales web y de cumplirlos a cabalidad, para salvaguardar el legítimo derecho de información de todos las personas, y no perder en ningún momento la credibilidad sobre las garantías y principios especiales que inspiran y rigen al derecho administrativo, como lo son la publicidad, exhibición, actualización y disposición de los datos.

Evitando de esta manera que cualquier Ministerio de Estado, vulnere los derechos de cualquier persona individual o jurídica, pública o privada de tener acceso a la información, o inclusive disponer de ella, y estar actualizado de la misma, permitiendo así que toda solicitud, acceso y obtención de la información pública que hubiere solicitado conforme a lo establecido en la ley, se intensifique y que toda información suscitada por este medio se haga en un entorno donde prevalezca la transparencia y publicidad de los datos de la administración pública.

Pues de aplicarse efectivamente la legislación especial en materia de información pública de oficio por los Ministerios de Estado en los portales web, se les estaría brindando a las personas, que realicen prácticas de participación ciudadana y auditoria social, instituciones jurídicas necesarias para la legítima transparencia de la información pública de los datos, en sus derechos de conocer la información por precepto constitucional, con lo cual se lograría disminuir los índices de violación a la información pública de oficio y garantía constitucional de Habeas data, por los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión social y Ambiente y Recursos Naturales.

Cabe mencionar que para el desarrollo de esta tesis, se recurrió a la investigación, documentación y al método científico el cual nos señala a través de sus verificaciones tanto lógicas como técnicas y científicas la validez de la hipótesis planteada, la cual consiste en verificar como las obligaciones de transparencia, son violadas por todos los Ministerios de Estado al no publicar, actualizar, disponer y exhibir información de los actos que estos realizan, lo cual no solo da margen de vivir desconociendo e ignorando los mismos, sino también atentan y lesionan los derechos y garantías inherentes a toda persona humana, lo cual tiende a provocar una evidente utopía legal, porque al existir una norma legal que faculte a la persona de conocer la información y que la misma sea vedada por los sujetos que están encargados de publicar la misma, haciendo que las disposiciones especiales, como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública, queden en desuso, por su falta de cumplimiento, lo cual refleja la necesidad de modificar la legislación especial existente sobre el Acceso a la Información Pública, con el objeto de puntualizar la facultad de que toda persona pueda acceder a la información o conocimiento de los datos, como herramientas claves de la publicidad y transparencia, de cumplirse con las mismas, o de sancionarse por su falta de cumplimiento, sin dejar de derogar u abrogarse la misma por

la importancia que tiene en la actualidad, para evitar que se sigan suscitando más violaciones a la información pública de oficio y garantía constitucional de habeas.

Finalmente, la tesis se presenta en siete capítulos, en el primero se realizó un estudio doctrinario y legal acerca de la Independencia Política de Centroamérica, desde el poder constituyente hasta la división de poderes; el Capítulo II, denominado el Derecho Administrativo y la Administración Pública Guatemalteca, en el se presenta doctrina del Derecho Administrativo, sus características, fuentes y principios, explicamos así mismo que es la administración pública, su estructura, tipos, sistemas, y elementos; el capítulo III denominado Órganos de Control Administrativo, Auditoría Social, Publicidad y Transparencia de los Actos Administrativos, en donde explico los diferentes tipos de controles que existen legalmente y sus diversos enfoques, como lo es el control interno, el control directo, el control de derechos humanos, el control judicial, el control constitucional, el control parlamentario y el control de fiscalización, culminando con la explicación de las instituciones jurídicas de auditoría social, publicidad y transparencia de los actos administrativos; el capítulo IV denominado, Principios que Inspiran el Derecho Administrativo y la Administración Pública, presenta aspectos doctrinales y legales que hacen referencia a la definición de principio, el principio como fuente de inspiración y dirección legal, así como también los principios que inspiran al derecho administrativo, en el cual están el Principio de Legalidad, Principio de Juridicidad y Principio de Supremacía Constitucional, y los Principios que inspiran la Administración Pública en el que explicamos cual es el Principio de División o Separación de Poderes, Principio de Descentralización, Principio de Participación Ciudadana, Principio de Jerarquía, Principio de Probidad, Principio de Desarrollo Nacional, Principio de Gratuidad, Principio de Defensa, Principio de Celeridad, Principio de Sencillez, Principio de Eficacia del Trámite, Principio de Transparencia, Principio de Publicidad y Máxima Publicidad; el capítulo V denominado, el Habeas Data como Garantía de la Publicidad y Transparencia de los Datos y la Información, presenta un estudio legal y doctrinario sobre las generalidades del habeas data, los conceptos jurídicos fundamentales en materia de información pública, la definición de los datos, y que tipos de datos existen, encontrará las definiciones de lo que es la información y que tipos de información existen, los sujetos, y que clases de sujetos, las unidades de información, las obligaciones de transparencia, que papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación y el habeas data, cual es el principio de la taxatividad legal, que es la actualización de la información y la disponibilidad de la misma; continuando con el capítulo VI denominado, Institución Pública Encargada de Tutelar y Velar por el Estricto Cumplimiento de la Garantía de Habeas Data, por los Portales Electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, dicha institución va a ser la Unidad de Información Pública la encargada de velar por que se cumpla con las distintas obligaciones de transparencia a las que están sujetos todos los Ministerios de Estado, defino su Naturaleza Jurídica, Objetivos generales

y Específicos, cuales son sus Funciones, así como también su Estructura Orgánica, su Procedimiento administrativo en materia de solicitud de información pública, desarrollo que es el Recurso de Revisión, y el Procedimiento para la verificación de información pública en portales Web de los distintos órganos administrativos; y por último se desarrolla el capítulo VII denominado, Consecuencias y Efectos ante la Constante Violación a la información pública de oficio y Garantía Constitucional de Habeas Data, por los Portales Electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, desarrollo la utopía legal, sus consecuencias y efectos en el ámbito Social, jurídico y de la administración pública, en este último capítulo presento la propuesta o posible solución, como aporte de la presente investigación, consecutivamente en su orden se desarrolla las respectivas conclusiones, recomendaciones, anexos y la bibliografía que utilicé para desarrollar la presente investigación.

CAPÍTULO I

EL DERECHO CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO Y LA DIVISIÓN DE PODERES

1.- INDEPENDENCIA POLÍTICA DE CENTROAMERICA

“Centroamérica fue descubierta por Cristóbal Colon en su cuarto viaje. La población de los numerosos y diferentes señoríos indígenas que existían en ese entonces fue conquistada y reducida violentamente y con el apoyo de la iglesia, durante la primera década del siglo XVI, y a la mitad del mismo ya la corona había mandado a organizar a la audiencia de los confines del reino de Guatemala para regir y controlar a su favor las nuevas provincias que habían ido creando los conquistadores que partiendo de España y Panamá habían penetrado en el área. Aproximadamente tres siglos después de la conquista se inició el proceso de independencia centroamericano, el cual posee un significado especial ya que ayuda a comprender el proceso de segmentación política que se di en el área muy tempranamente y la pérdida de algunas regiones a favor de España y la formación de las repúblicas centroamericanas”¹. Por lo tanto de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española se entiende por independencia, la no dependencia o sea lo que tiene plena libertad, tanto política, territorial, sociológica, como jurídica.

Por lo que cuando hacemos referencia a la Independencia de Centroamérica, nos estamos refiriendo a la conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de Septiembre de 1821; tal Capitanía estaba conformada, en ese entonces, por la Provincia de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador y la Provincia de Nicaragua y Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia la Independencia Política total del Gobierno Español. A diferencia de los demás

¹ ESCOBAR MEDRANO, Edgar, “Antología guatemalteca”, Primera Edición, Editorial Orión, 2003. Pagina. 213.

países Americanos exceptuando a Panamá, la Independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico. El movimiento independentista centroamericano tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos, y la revolución francesa que terminó con desigualdades y privilegios. Además de ser influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración racionalista europea. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio el 5 de noviembre de 1811, cuando una conspiración encabezada por los curas José Matías Delgado y Nicolás Aguilar intentó apoderarse de unas armas que existían en la casamata de San Salvador. A este movimiento le siguieron revueltas en Nicaragua, la conjuración de Belén y otros movimientos de 1814 a 1821.

Una reunión entre las mismas autoridades coloniales, y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados, terminó el 15 de Septiembre de 1821 con el dominio español en el antiguo reino de Guatemala, que comprendía el actual territorio del estado de Chiapas (México) y las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En el 11 de Octubre del año de 1825 mediante la promulgación de la primera Constitución Política del Estado de Guatemala ya como país independiente y soberano de las demás federaciones de Centroamérica, que se habían conformado después de la conquista; por lo que se empieza a gestar el principio, formación y desarrollo de su propio constitucionalismo a través de la implantación de un poder constituyente originario y propio, que creara y regulara derechos, principios y garantías que velarían por el bien común de todos los guatemaltecos.

Tomando en cuenta como se describió anteriormente Guatemala es una república que ha pasado diferentes períodos históricos. Sus primeros habitantes crearon la cultura maya. Posteriormente, fue sacudida por la guerra ocurrida con la conquista española. En el siglo XIX logra su independencia junto al resto de Centroamérica, la cual fue sucedida por guerras entre conservadores y

liberales, que llevarían a la desintegración de la Federación Centroamericana. Las disputas continuaron entre ambos grupos hasta finales del siglo XIX, estando primero bajo el poder de los conservadores y luego de los liberales. Manuel Estrada Cabrera fue el presidente que logró mantenerse durante más tiempo en el poder.

1.1.- Poder Constituyente

El poder Constituyente como institución jurídico doctrinaria, es el que tiene su fundamento en el principio de supremacía constitucional y que justifica la existencia del Constitucionalismo guatemalteco, desde una perspectiva jurídica general, lo podemos definir como toda aquella facultad inherente de una comunidad soberana de poder darse su propio ordenamiento jurídico Constitucional a través de una Constitución o sea plasmar su voluntad política para crear un nuevo o primario ordenamiento jurídico, que no esté sujeto a ninguna norma legal anterior. Puesto que este no admite restricciones puesto que es un poder supremo ya que es la más fiel y directa manifestación de la soberanía popular.

El poder constituyente establece determinados órganos encargados de actuar en nombre del estado, que reciben el nombre de poderes constituidos u órganos del Estado. Estos poderes u órganos constituidos, al haber sido creados o engendrados por el poder constituyente, se encuentran necesariamente subordinados al mismo, debiendo ajustar todo su accionar a lo regulados por este. Si bien el poder constituyente se disuelve materialmente al establecer y promulgar la Constitución Política y Jurídica del Estado, su voluntad se perpetúa precisamente a través de esa Constitución, por lo que la subordinación de los poderes constituidos al poder constituyente se materializa a través de la sujeción y respeto absoluto de los poderes constituidos a la Constitución.

Por lo que es el concepto positivo de Constitución el que crea el poder constituyente ya que este se convierte "en una manifestación o decisión consciente que fija la existencia política"²

"Según la academia de la lengua española, poder constituyente es lo que constituye o establece, también es lo que se dice de las cortes convocadas para reformar la Constitución del Estado. Jurídicamente el concepto resulta equivocado o cuando menos insuficiente porque parece indudable que las facultades constituyentes no alcanzan solo a la reforma de la Constitución sino también, y principalmente a la implantación de la misma. Una excepción se da cuando la primera Constitución del país ha sido otorgada o concedida por un monarca absoluto, o por una tiranía detentadora del gobierno. La soberanía es un atributo del pueblo, a él y únicamente a él, está atribuido el poder constituyente. El pueblo ejerce esa soberanía varía según las normas establecidas por las propias constituciones cuando se trata de modificarlas o de sustituirlas. El poder constituyente lo ejercen, por delegación del pueblo, las asambleas, cortes o congresos constituyentes convocados para el efecto, se integran en algunos países por los miembros del poder legislativo a los que se agrega un número igual de ciudadanos elegido por sufragio por aquella finalidad, sistema previsto por los países de Constitución rígida como el nuestro. En Guatemala la Asamblea Nacional Constituyente como poder constitucional constituido es elegida por medio de sufragio directo del pueblo, forma un cuerpo legislativo especial, con fines específicos como ya lo hemos estudiado el cual se disuelve una vez cumplidas sus funciones y agotado su mandato"³.

1.1.2.- Sujetos del Poder Constituyente y la Soberanía

Cuando se hace referencia a sujetos del poder constituyente, más que todo se pretende a hacer referencia a quienes son las personas que lo crean,

² KESTLER FARNÉS. Maximiliano. Op. Cit., pp 19

³ PRADO, Gerardo, "Derecho Constitucional", Cuarta Edición, Editorial Praxis, 2005. Páginas 174 a 175.

ostentan, delegan y ejercen el mismo. Por lo que en primer plano podemos decir que el primer sujeto del poder constituyente apreciado de manera global como una colectividad que reside en un determinado estado, es el pueblo quien es el que lo crea, ostenta y delega a través de una manifestación de soberanía, con la expectativa de poder alcanzar su bienestar general. Ahora bien el segundo sujeto del poder constituyente sería la Asamblea Nacional Constituyente, la cual una vez conformada como tal, actuaría como los representantes del pueblo, cuyos miembros que la integran son electos libre y democráticamente, con la única finalidad de constituir un poder originario que tienda a organizar jurídica y políticamente al Estado, a través de una Ley fundamental que en este caso sería una Constitución.

“Desde otra perspectiva se concibe a la Asamblea Nacional Constituyente, como sujeto del poder constituyente, a todo aquel ente colectivo formado por una pluralidad de representantes del pueblo o nación elegidos por medio del sufragio popular con la finalidad única de preparar, discutir, aprobar e implantar la Constitución. Es el cuerpo u órgano a quien se le otorga el mandato de hacer efectiva aquella potestad, esta última es el otorgamiento de una especie de capacidad de ejercicio en representación de la nación. No esta atada con su mandante por instituciones o lineamientos precisos que deba seguir en su misión única, por lo que su actividad de pensar, preparar discutir y aprobar el texto constitucional fundamental, tiene una amplia, libertad de actuación. Sin embargo tal libertad no es absoluta e incontrolada. Los representantes constituyentes deben tener la suficiente sensibilidad y agudeza para captar e interpretar la realidad y condiciones del conglomerado social a quien va dirigido el cuerpo normativo determinar sus aspiraciones, sus ideales, su querer ser. Los miembros constituyentes, son representantes políticos, y jurídicos del titular del poder constituyente, por lo que en base en una aprehensión lo mas fidedigna posible de las condiciones sociales, culturales, políticas y jurídicas, del grupo humano deben hacer las proyecciones

respectivas al efecto de condicionar adecuadamente la producción constitucional”⁴.

En relación a la soberanía según el Diccionario de la Real Academia Española, se debe de entender como toda aquella autoridad suprema que emerge y se deriva del poder público puesto que es la colectividad de los ciudadanos de donde surge, la cual puede ser estimada como un ser real distinto de los individuales que la componen. “Como nación o ente soberano puede instituir el poder constituyente originario, con potestades para crear la norma fundante y fundamental cuya estructura solo podría ser variada conforme el procedimiento y límites fijados en la misma norma fundante. De manera especial, corresponde a esa colectividad ciudadana dar o negar su respaldo a la propuesta de variar la estructura de tal norma fundante, para cuya realización se precisa de instrumentos que garanticen y tutelen la efectiva participación de la población que reúna los requisitos necesarios para poder expresarse políticamente”⁵.

La primera manifestación de soberanía guatemalteca fue la que sucedió el 15 de septiembre de 1821, puesto que en ese tiempo fue suscrita el acta de independencia con evidente expresión originaria de soberanía. Puesto que en esta se impuso el principio de seguridad jurídica. Ya que como en ese tiempo no se contaba con un cuerpo constituyente y legislativo propio para conformar un sistema jurídico autóctono por lo que se continuó con el que estaba instituido por la Constitución Política de la monarquía española de ese entonces. Y la más reciente manifestación de soberanía fue la que sucedió el 31 de mayo de 1985 donde se aprueba la actual Constitución la cual entró en vigor hasta el 14 de enero de 1986 y la cual taxativamente en su artículo 141 establece que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, puesto que uno de los principios

⁴ SIERRA GONZÁLEZ, José Arturo, “Derecho Constitucional guatemalteco”, segunda Edición, Editorial estudiante Fenix, 2006. Páginas. 69 a71.

⁵ SIERRA GONZÁLEZ, José Arturo, “Derecho Constitucional guatemalteco”, segunda Edición, Editorial estudiante Fenix, 2006. Páginas. 74 a 75

básicos del estado de derecho es el Principio de la División de Poderes, puesto que a cada órgano de poder se le atribuye una función específica establecida en la Ley. El Organismo Ejecutivo es el encargado de gobernar y administrar, el Organismo Legislativo tiene como función legislar y el Organismo Judicial Juzgar y promover la consecución de lo Juzgado o sea administrar justicia, tomando en cuenta que la división de poderes, se convierte en la columna vertebral del esquema político republicano y es además el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados, con mutua coordinación y controles en el desempeño de las funciones estatales que se limiten y frenen recíprocamente, obedeciendo al principio jurídico político de pesos y contrapesos.

1.1.3.- Poder Constituyente Originario y Derivado

La institución jurídico doctrinaria denominada como poder constituyente, se debe de entender, como toda aquella facultad inherente de una comunidad soberana de poder darse su propio ordenamiento jurídico Constitucional a través de una Constitución o sea plasmar su voluntad política para crear un nuevo o primario ordenamiento jurídico, que no esté sujeto a ninguna norma legal anterior; tiene dos modalidades, puesto que puede ser originario y derivado.

El Poder Constituyente va ha ser originario cuando se va a crear una nueva Constitución o norma fundamental sin el apoyo de una previa, ya sea por el nacimiento de un nuevo Estado o por el cambio o rompimiento de un régimen político de un estado preexistente, poder que en todo momento va a ostentar una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo que como fundamento legal del Poder Constituyente Originario encontramos el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El Poder Constituyente Originario posee ciertas características sui generis, siendo éstas: *que es supremo, ilimitado, extraordinario, indivisible,*

intransferible y no soberano. Supremo en el sentido de que como poder social constituyente no es constituido y no depende de ningún poder anterior, *ilimitado* siempre en relación a la medida de sus posibilidades, puesto que puede estar sujeto a límites ya que no es un ser absoluto, *extraordinario* en el sentido que se ejerce a través de la normatividad, pues se hace en casos de excepción, *ordinario* en el sentido que se ejerce a través de la normalidad, pues funciona continuamente por medio de la interpretación constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por las mutaciones constitucionales que actualizan su efectividad, *único e indivisible* en relación a que se ejerza como se ejerza, siempre va a ser el mismo poder constituyente y no cabe distinguir entre poder originario y derivado, *intransferible* porque cuando se ejerce el poder constituyente se va a ser siempre en forma originaria y no por delegación; *no es soberano* porque la soberanía es una cualidad de la norma fundamental de un Estado según la cual ella no deriva de una norma superior.

Por lo tanto en síntesis podemos inferir que el poder Constituyente originario o funcional va a hacer aquel que tiene la potestad de cambiar la Constitución de un Estado o también crear la primera Constitución.

El Poder Constituyente va a ser Derivado, porque va a ser creado y regulado por el poder constituyente originario o sea cuando se lleven a cabo procesos de reformas Constitucionales a través de una Asamblea Nacional Constituyente, cumpliendo siempre con los respectivos procedimientos establecidos en la legislación preexistente, el cual en el caso de Guatemala se encuentra previsto o establecido en los artículos 277, 278, 279 y 281 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En otro orden de ideas podemos conceptualizar al Poder Constituyente Derivado como la potestad de poder reformar total o parcialmente una Constitución existente, como en el caso de nuestra Constitución Política actual, ya que esta tiene como antecedentes dos resabios de manifestaciones de poder Constituyente derivado, siendo éstas: la reforma del 17 de noviembre de

1993, que surgió tras el derrocamiento del Presidente de la República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías; y en el año de 1999 la Reforma de consulta popular que pretendía nuevamente reformar nuestra Constitución, donde dicho proyecto de reforma no fue aprobado.

El Poder constituyente Derivado siempre va a estar sujeto y regulado por una Constitución anterior.

Debemos de tener presente que la Constitución Política de la República de Guatemala desde el punto de vista de una individualización clásica, podemos decir que es de clase mixta, ya que permite ser reformada por una parte por el Congreso de la República de Guatemala y otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente, de igual forma la misma ley suprema en su articulado normativo también establece que personas en un momento determinado poseen plena iniciativa para proponer reformas a la Constitución, siendo éstas: el Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, diez o más Diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Situaciones que en todo momento demuestran la legitimidad o existencia del poder Constituyente derivado.

1.1.4.- Límites del Poder Constituyente

Según el diccionario de la Real Academia Española, desde una perspectiva general, se debe de entender por límite a la línea real o imaginaria que separa uno o varios puntos; por lo que en relación al poder constituyente como manifestación de soberanía sea este originario o derivado, va a tener límites, los cuales pueden ser *extrajurídicos* y *jurídicos*.

Los *límites extrajurídicos* son aquellos que se consideran absolutos en el sentido de que no se pueden superar. Estos los podemos subdividir en *ideológicos y materiales*. Los límites extrajurídicos *ideológicos*, van a consistir en el conjunto de valores emanados de la ideología predominante, cuando actúa el poder constituyente, considerándosele como la estructura de normas, valores o conocimientos vigentes de la sociedad. Y los límites extrajurídicos *materiales*, van a consistir en el conjunto de condiciones que determinen la infraestructura social, como por ejemplo la lucha de clases o de sistemas de producción, situación geográfica o desarrollo económico.

Los *límites jurídicos* los podemos subdividir en *procesales, sustantivos, pactos preconstituyentes y tratados internacionales*. Los límites jurídicos *procesales* van a hacer el conjunto de reglas que establecen el procedimiento de actuación del poder constituyente, el trámite para la reforma o los plazos de prohibición para reformar.

Los límites jurídicos *sustantivos*, van a hacer el conjunto de directivas que aspiran orientar la labor del poder constituyente que a vez pueden ser, *expreso o tácito*, el límite jurídico sustantivo *expreso*, va a consistir en el conjunto de cláusulas pétreas o inmodificables, de directivas dirigidas al poder constituyente, por quien lo convoca.

El límite jurídico sustantivo *tácito*, se va a dar en los contenidos pétreos que van a surgir emanado de nuestra tradición.

El límite jurídico de pacto *preconstituyente* van a hacer todas aquellas ordenaciones dirigidas a constituir el poder constituyente, sus determinaciones no lo van a limitar, puesto que van a hacer producidas por el mismo poder constituyente en forma autónoma.

Y el límite jurídico de *tratados internacionales*, van a hacer todas aquellas ordenaciones que no van a limitar el poder constituyente, puesto que

ha emanado en forma autónoma del mismo; si no fuera así se habría formado un estado de superior nivel, cuyo poder constituyente sería supremo.

En síntesis de todo lo anteriormente expuesto, podemos inferir que realmente el poder constituyente originario es ilimitado, mientras que el poder constituyente derivado o reformador siempre va a estar subordinado por límites que le impone la propia Constitución y demás leyes constitucionales, ordinarias, especiales y reglamentarias que la complementan, como por ejemplo los límites procesales y los límites sustanciales, los primeros se refieren al procedimiento que se debe de observar y los segundos, se relacionan con limitaciones de contenido adjetivo o sustantivo. La Constitución puede imponer límites temporales, o de plazos durante los cuales no se le reforme. La validez del ejercicio del poder constituyente derivado depende del cumplimiento de las condiciones y del procedimiento impuesto por el ordenamiento constitucional y general vigente y positivo.

1.1.5.-Titularidad, Legitimidad del Ejercicio del Poder Constituyente

El poder constituyente como manifestación de la soberanía popular, en ningún momento puede ser considerado como consecuencia de las normas jurídicas, sino al contrario como fuente precursora y creadora de ellas, contrario sensu al poder constituido el cual es el resultado de la implantación e instauración del poder constituyente por un Estado de derecho, el cual sí está realmente sometido a las normas jurídicas. Por lo que cuando hablamos de la titularidad y legitimidad del ejercicio del poder constituyente, primero debemos entender el significado de lo que es la titularidad y la legitimidad, pero desde una perspectiva general; por lo que de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española se entiende por titularidad a toda aquella circunstancia que en un momento determinado otorga o adjudica a uno o varios sujetos una facultad, derecho o propiedad de algo. Y por legitimidad a toda aquella situación o facultad que nazca, se adquiera, se ejercite, transfiera o concluya,

de manera lícita o sea de conformidad con la Leyes o lineamientos previamente instaurados.

Por lo que la titularidad, legitimidad y ejercicio del poder constituyente va ha corresponder más que todo a las personas que lo crean, ostentan, delegan y ejercen del mismo; o sea los sujetos del poder constituyente; por lo que como bien es de nuestro conocimiento el primer sujeto del poder constituyente apreciado de manera global como una colectividad que reside en un determinado estado o territorio independiente y soberano, es el pueblo o nación quien es el que lo crea, ostenta y delega dicho poder, por ser el titular legítimo de esa manifestación de soberanía que lo instituye con miras de organización social, jurídica y política con el afán de alcanzar el bien común.

Ahora bien el segundo sujeto del poder constituyente sería la Asamblea Nacional Constituyente, la cual una vez conformada como tal, actuaría como los representantes del pueblo, cuyos miembros que la integran son electos libre y democráticamente, con la única finalidad de constituir un poder originario que tienda a organizar jurídica y políticamente al Estado, a través de una Ley fundamental que en este caso sería una Constitución, la cual crearía la estructura del estado y los respectivos órganos de poder, que serían los encargados de ejercer en representación del pueblo el poder Constituyente originario debidamente instaurado el cual ya materializado pasaría a convertirse en un poder legalmente constituido.

“Puesto que en la teoría del derecho constitucional es clásica la distinción entre titularidad, legitimidad y ejercicio del poder constituyente. Ya que el legítimo titular del poder siempre va ha ser el pueblo o nación y ese poder por disposición de soberanía es delegado y ejercido por los representantes del pueblo previamente constituidos en sus respectivas leyes fundamentales”⁶.

⁶ QUIROA LAVIE. Humberto. “Derecho Constitucional”. Pp. 42

1.2.- Poder Constituido

El poder constituido no es más que aquel poder que nace, surge o emana de manera directa del poder constituyente, el cual en todo momento debe de mantener su debida subordinación ante el poder constituyente, un ejemplo claro de poder constituido serían los tres poderes del Estado, los cuales en todo momento deben de limitar su actuación dentro del marco de la legalidad y juridicidad o sea dentro de la órbita legal que les fija el poder constituyente a través de la Constitución Política y demás leyes.

Por lo que la expresión poder constituido tiene un significado totalmente diferente a las instituciones jurídicas que habíamos venido examinando en párrafos anteriores porque en sí el poder constituido va a ser el resultado del trabajo creador que realiza la Asamblea Nacional Constituyente como poder constituyente constituido. Al instaurar a través de una Constitución en forma directa a los tres órganos clásicos del poder público que sería los encargados de cumplir la voluntad del pueblo para alcanzar el bien común, que en este caso serían: el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales están incluidos en todas las Constituciones que desarrollan sistemas de gobierno de tipo Presidencial.

Guillermo Cabanellas, en su diccionario de derecho usual, apunta que poder constituido es "cada uno de los poderes públicos creados o reconocidos por la constitución o las leyes, supremas de un estado". Asimismo lo identifican con el gobierno que de hecho o de derecho ejerce el mando en un territorio o momento determinados, cuya sinonimia encontramos con el título IV de la Constitución Política guatemalteca, de él manifiesta Manuel Ossorio que su origen ha de ser legítimo y emanar de la Constitución. En consecuencia será ilegítima cuando surge de un golpe de estado".

1.3.- Constitucionalismo

“La palabra constitucionalismo está compuesta por el adjetivo constitucional o sea que se relaciona con la Constitución de un Estado, y por el sufijo ismo, que se emplea generalmente para formar sustantivos abstractos sobre nombres propios o comunes. O indica alguna tendencia moderna vinculada con la práctica de principios religiosos, artísticos, o filosóficos como en nuestro caso particular que denota doctrina o práctica de principios de derecho para adherirnos al sistema liberal constitucional”⁷. En este sentido Sánchez Viamonte argumenta que constitucionalismo es el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una Constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario.

En si la esencia y significado del constitucionalismo es aun más amplia, ya que éste a través de los antecedentes históricos donde a habido manifestación originaria de poder constituyente trata de develar todo lo relacionado con las distintas Constituciones que han existido en un Estado en un momento determinado, verificando en cada caso particular las distintas decisiones de los constituyentes o de las representaciones populares, sobre el establecimiento de principios y garantías individuales y sociales, así como también los derechos y garantías individuales y colectivos, como la respectiva forma o estructura estatal o de gobierno adoptada.

Por lo tanto el constitucionalismo tiende a convertirse en una disciplina científica de fondo histórico, legal constitucional y sociológico, que devela, la evolución y cambio constitucional en relación a los principios, garantías e instituciones jurídicas que conforman la Ley fundamental de un Estado en un momento determinado.

⁷ PRADO, Gerardo, “Derecho Constitucional”, Cuarta Edición, Editorial Praxis, 2005. Página 11

Como ya se describió anteriormente Guatemala, contemporáneamente como país independiente y soberano es una república que a lo largo de la historia ha pasado diferentes períodos que han impactado grandemente su historia. Puesto que sus primeros habitantes crearon la cultura maya quienes según historiadores se rigieron por su libro sagrado denominado el Popol Vuh. Posteriormente el ahora territorio guatemalteco, fue sacudido por la guerra ocurrida con la conquista española en donde se instauró el gobierno español como conquistador y por ende estableció e impuso su propio ordenamiento jurídico el cual era regido en primer término por la Constitución de Bayona y posteriormente por la Constitución de Cádiz. En el siglo XIX el territorio guatemalteco logra su independencia junto al resto de Centroamérica, la cual fue sucedida por guerras entre conservadores y liberales, que llevarían a la desintegración de la Federación Centroamericana. Las disputas continuaron entre ambos grupos hasta finales del siglo XIX, estando primero bajo el poder de los conservadores y luego de los liberales, pero ya en este tiempo es donde se empieza a gestar y marcar el inicio del constitucionalismo guatemalteco, con la aparición de ciertas leyes fundamentales contenidas en sus respectivos cuerpos normativos obedeciendo cada uno de ellos a su orden cronológico, de la manera siguiente: se decreta el 22 de noviembre de **1824**, la Constitución de la República Federal de Centro América por la Asamblea Nacional Constituyente, siendo la primera de Centro América; se promulga el 11 de octubre de **1825**, la primera Constitución Política del Estado de Guatemala, entrando también en vigencia el mismo año; se promulga el 11 de diciembre de **1879**, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, siendo la segunda de Guatemala y la primera de la República, teniendo también varias reformas a lo largo de su vigencia. Se promulga el 9 de septiembre de **1921** la Constitución Política de la República Federal de Centro América (la cual incluye los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras) y entra en vigor el 1º de octubre de 1921 la Constitución de 1921, siendo esta la segunda de Centro América; se aprueba el 11 de marzo de **1945** y entra en vigor el 15 de marzo de 1945 la Constitución de 1945; se aprueba el 2 de febrero de **1956** y entra en vigor el 1º de marzo de 1956 la Constitución de 1956; se aprueba el 15 de septiembre

de **1965** y entra en vigor el 5 de mayo de 1966 la Constitución de 1965; se aprueba el 31 de mayo de **1985** y entra en vigor el 14 de enero de 1986, la actual Constitución Política de la República de Guatemala por la Asamblea Nacional Constituyente. Todo ello es lo conforma el constitucionalismo guatemalteco.

1.4.- El Derecho Constitucional

Como bien es de nuestro conocimiento el Derecho Constitucional surge cuando el Estado pos revolucionario hace la separación de poderes y les asigna la esfera de competencia y los atributos que le corresponden a cada uno. Puesto que tras haberse suscitado una separación de poderes siempre es menester dar un orden a la nueva organización que se pretende instituir. Por eso es que en todas las realidades políticas, siempre se va a crear e instituir el derecho Constitucional como manifestación de poder constituyente originario. Ya que a través de este es cuando el poder personal es sustituido por el poder impersonal del Derecho, el cual se manifiesta a través de una Ley fundamental denominada Constitución, la cual “tiende a proteger al individuo de la omnipotencia de la autoridad pública”⁸. Tomando como premisa general el principio pro persona y la consecución del bien común.

Por lo que el Derecho Constitucional como disciplina Jurídica autónoma nació a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, debido a las grandes transformaciones políticas ocurridas en Norteamérica (Revolución Estadounidense), Europa (Revolución inglesa y francesa) y Centroamérica (Independencia de Centroamérica).

El derecho Constitucional o político, lo debemos de entender como el conjunto de normas, principios, garantías, instituciones, teorías y doctrinas que regulan la organización y funcionamiento del Estado, así como también las relaciones entre los individuos y sus autoridades, como el señalamiento y

⁸ BORJA. Rodrigo. “Derecho Político y Constitucional”. PP. 305.

reconocimiento de los principios, garantías y derechos que le asisten a todos los miembros de la comunidad política.

Según Guillermo Cabanellas, el Derecho Constitucional es aquella rama del derecho político que comprende las leyes fundamentales del Estado que establecen la forma de gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de los poderes públicos. Durante largo tiempo el derecho constitucional fue concebido como un estudio metódico de la Constitución, por una parte histórico por otra filosófico e incluso exegético y ha sido considerado como una rama más del derecho positivo. Pero luego bajo las influencias especialmente las alemanas, fue considerado como ciencia del estado. Que comprende el estudio del origen, formación y desarrollo de los grupos sociales, de la sociedad humana de base territorial que precede al estado y también de la ciencia estatal en su aspecto político determinaron en la estructura del derecho constitucional modificaciones que han afectado su unidad lógica. El derecho constitucional es según algunos disciplina estrictamente jurídica y no sociológica ni política, según otros, es derecho público fundamental. En cambio el derecho político, disciplina que está ligada históricamente el derecho constitucional es una teoría del estado y de sus formas de gobierno o al menos lo es el plan de su contenido en las obras de enseñanza. Según Vladimiro Naranjo Mesa, escribe que el derecho constitucional es el que estudia la estructura del estado dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida estatal. Pablo Lucas Verdú, quien dice que dicha materia es la rama del derecho público interno que estudia las normas e instituciones relativas a la organización y ejercicio del poder del Estado y a los derechos y libertades básicas del individuo y de sus grupos, en una estructura social.

1.5.- Estructura Constitucional

Indudablemente la Constitución ocupa la cabeza, cúspide o el primer lugar de la escala jurídico normativa de un Estado, todo ello de acuerdo con el principio de la jerarquía de las leyes y a esta situación se le llama supremacía Constitucional que es la base de todos los Estados de Derecho del tipo democrático. Porque la Constitución es el fundamento positivo donde se asienta el orden jurídico, político y social del estado, por lo que se convierte la fuente o principio del mismo.

Cuando se hace referencia a la estructura Constitucional más que todo se quiere dar a entender como dicha Ley fundamental en su acepción material se encuentra lógica y ordenadamente segmentada, ordenada o estructura, o sea cuales van a ser las partes en que esta se va a dividir por sistemática jurídica.

Si tomamos como base el constitucionalismo podemos verificar todas las constituciones que han existido a lo largo de la historia pre independiente e independiente, y si pretendiéramos verificar su estructura constitucional tendríamos que analizar cada Ley fundamental atendiendo al tiempo de su vigencia y verificar la sistemática en base a la cual fue estructurada, pero para ser más ilustrativos y específicos tomaremos como base la Constitución Política de la República de Guatemala, actualmente vigente y positiva, la cual se encuentra estructurada en cuatro partes siendo éstas: el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica.

El preámbulo de la Constitución va a ser el que va a contener el espíritu rector que inspiró la creación de la misma, puesto que va a resumir las grandes directrices que la motivaron y que deben servir como guía a los gobernantes y gobernados, puesto que allí se exponen los grandes principios y fines que han guiado al constituyente para redactar las normas básicas de la organización política y jurídica del país.

La parte dogmática va a ser el apartado que va a desarrollar todo lo relativo a la persona humana, describiendo sus fines, principios, derechos, garantías, así como también los deberes del Estado en relación a esta. La cual por la sistemática adoptada empieza desarrollando todo lo relativo a los derechos humanos individuales tales como: (el derecho a la vida, libertad, justicia, paz, desarrollo integral, propiedad privada, petición, publicidad de los actos administrativos y acceso a archivos y registros Estatales "Habeas Data"), Etc. Misma sistemática que continúa con el desarrollo de los derechos humanos sociales, tales como: (el derecho a la familia, cultura, comunidades indígenas, educación, universidades, deportes, salud, seguridad, asistencia social, trabajo, trabajadores del Estado y régimen económico social. Para concluir con los deberes y derechos políticos y las limitaciones a los derechos constitucionales).

La parte orgánica va a ser el tercer apartado que va a conformar la estructura constitucional vigente, el cual consiste en la descripción del Estado y su forma de gobierno, así como el desarrollo de ciertas instituciones jurídicas tales como la ciudadanía y las relaciones internacionales, poder público, organismo legislativo, ejecutivo y judicial, como también el desarrollo de los regímenes político electoral, administrativo, financiero, de control y fiscalización, Ejército, Ministerio Público, Municipalidades. Y también todo lo relativo al poder constituyente derivado o sea lo relativo a las reformas a la Constitución.

Y por último la parte práctica que va a conformar el cuarto apartado que termina de complementar la Constitución vigente, el cual consiste en la descripción y desarrollo de las garantías Constitucionales que en un momento determinado se pueden invocar o utilizar para defender el orden Constitucional instituido, siendo estas: el Habeas corpus o sea la exhibición personal, como garantía de la libertad individual; el amparo, como garantía contra la arbitrariedad y las inconstitucionalidades de Leyes sean estas en caso concreto o de manera general, como garantías del orden y supremacía constitucional.

1.6.- División de Poderes

Cuando se habla de división de poderes debemos de tener como punto de partida a un principio fundamental que en este caso sería el principio de división de poderes, este principio tiene su origen en Inglaterra, debido al abuso de poder que ostentaban las monarquías en ese entonces. Este principio se basa en la premisa de que todo aquel que tiene poder tiende a abusar de él y lo va a hacer hasta donde encuentre un límite. Situación que generó la necesidad de que a todo peso era necesario imponerle un contrapeso o sea un freno para ponerle límites, lo cual vino a convalidar lo que en la doctrina política y jurídica se conoce como la teoría de los pesos y contrapesos. La cual vino a inspirar la necesidad de crear tres órganos estatales en donde se dividiera el poder público emanado por virtud de soberanía, siendo estos el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde cada uno de estos poderes debía ser ejercido por personas y grupos distintos.

De conformidad con el poder constituido guatemalteco la división de poderes instituida sigue la teoría de los pesos y contrapesos que trata de impedir poderes ilimitados, puesto que el poder se encuentra dividido en tres organismos, siendo éstos: el Organismo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno con distintas funciones, debidamente detalladas y especificadas en la Constitución y Leyes especiales que sustentan su creación.

Organismo Legislativo: este órgano de poder administrativo tiene como función principal la de legislar o sea la creación de normas jurídicas generales o especiales que tiendan a ordenar el Estado y limitar a toda costa la conducta humana intersubjetiva en todos los ámbitos del desarrollo e interacción de la vida social. El artículo 157 de la Constitución establece que corresponde al Congreso de la República la potestad legislativa, que está integrado por diputados que son electos en forma directa por sufragio popular universal y secreto.

Organismo Ejecutivo: a este órgano administrativo de poder tiene como función principal todo lo relativo al Gobierno del Estado y dirección y administración eficiente de la administración pública, o sea el desarrollo efectivo consistente en la función administrativa y de gobierno. Para Naranjo Mesa la función ejecutiva es realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las leyes, así como los objetivos del bien común dentro del Estado. Para Sánchez Agesta: es una decisión de la administración que se materializa a través de actos administrativos, comprende la actividad pública que desarrolla la ley y tiende a establecer mediante una declaración de voluntad, concretamente un derecho, una obligación o una situación subjetiva, porque decide bajo el ámbito de una norma los términos de una relación jurídica. Es así como debe expresar un juicio, manifiestan un deseo o autentican un hecho. Para Raúl Ferrero, consiste esta función cuya finalidad es asegurar la ejecución de las leyes. Y el funcionamiento de los servicios públicos proveyendo a las necesidades del grupo social.

Organismo Judicial: una tercera función del poder público es la que se conoce con el nombre de jurisdiccional designación que es aceptada por la mayoría de tratadistas del ámbito constitucional también se le denomina judicial vocablo que algunos consideran impropio. La Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce la independencia de esta función tal y como se pregonaba en el ámbito doctrinario, la encarga al organismo judicial, la facultad o potestad de juzgar dejando en claro lo siguiente: corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. De conformidad con lo que establece el artículo 203. La Corte de Constitucionalidad reafirma al decir que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los Tribunales de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la autoridad máxima dentro del organismo judicial. Punto a que se refiere la parte final del artículo 74 de la Ley del Organismo Judicial, que dice que es el Tribunal de superior jerarquía de la República. Su integración está

regulada de acuerdo con el artículo 214 constitucional. De importancia capital es lo que dispone el artículo 204 de la Constitución las condiciones esenciales de la administración de justicia. Los Tribunales de Justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

CAPÍTULO II

EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GUATEMALTECA

2.- DERECHO ADMINISTRATIVO

El Derecho Administrativo, como parte de la ciencia jurídica perteneciente a la rama del Derecho Público, desde una perspectiva general internacional, se dice que éste surge como “consecuencia de la revolución francesa en el año de 1789 y para otros dicha historia más que todo se encuentra ligada a la historia, inicio y manifestación del poder público”⁹. Por lo que haciendo un análisis de los puntos de vista enunciados podemos decir que el Derecho Administrativo, se encuentra íntimamente ligado con el Constitucionalismo y el Derecho Constitucional, puesto que siempre que haya resabios de la existencia de Constitucionalismo, obligatoriamente van a haber resabios de la existencia de una o varias Constituciones las cuales en su momento tuvieron que haber creado o regulado en su respectiva parte orgánica, la respectiva estructura estatal, e instituciones jurídicas tales como: el poder público, los órganos de poder, los regímenes político electorales, administrativos, financieros, de control y fiscalización, Ejército, Ministerio Público, Municipalidades, todos ellos, basados en relación a sus respectivos medios o técnicas de administración; con el único afán de alcanzar sus respectivos fines, que en el caso de todo Estado, siempre será la consecución del bien común.

“Tanto el Estado como el Derecho, son considerados como productos sociales, creados por el hombre y para el hombre, tomando en cuenta que el Estado es concebido como la organización humana, política, jurídica y territorial mejor organizada a lo largo de la historia”¹⁰, siempre y cuando lo

⁹ CALDERÓN M. Hugo “Derecho Administrativo Parte General”. Primera edición. Editorial Orión. 2006. Pagina. 59

¹⁰ LÓPEZ ZILLER. José Alberto. “El Comercio y la Contratación Electrónica en el Marco Jurídico Guatemalteco”. Primera edición. Editorial Camaja. 2012. Página 217.

haga a través de un poder legalmente originario debidamente constituido, que en este caso sería el establecimiento de una Constitución Política, como manifestación de soberanía que regule todos sus aspectos, desde los derechos, garantías individuales y sociales inherentes a toda persona humana, como la estructura del estado y la administración pública.

Por lo tanto una vez instituido un ordenamiento Constitucional que pretenda normar y estructurar un Estado determinado, siempre existirá la necesidad de implantar para su correcto desarrollo, evolución y alcance de sus fines; la aplicación de manera solidaria y subsidiaria de un ordenamiento jurídico administrativo, el cual tendrá como finalidad primordial de imponer límites al ejercicio del poder público, delegado por manifestación de soberanía, evitando a toda costa abusos de poder y autoridad que sean lesivos a los administrados, estableciendo y fijando a través de Leyes generales y Especiales, la competencia administrativa de cada órgano de poder, así como los procedimientos administrativos a seguir. Teniendo presente siempre la premisa que todo funcionario o empleado público, puede hacer todo y solo lo que la Ley le permite, puesto que su actuación únicamente debe regirse en base a los principios de legalidad y juridicidad.

El Derecho Administrativo como ciencia normativa, complementaria del Derecho Constitucional, “comprende la estructura administrativa, la organización centralizada, descentralizada y autónoma. La función pública, las obligaciones y competencias administrativas, el procedimiento administrativo, el acto administrativo, los medios de control administrativo, los reglamentos y contratos administrativos, la responsabilidad del Estado y el dominio público, sin limitarnos únicamente a ellos”¹¹.

Razón por la cual de una manera puntual, podemos definir al “derecho administrativo como la rama del derecho público, que estudia los principios y normas de derecho público, la función administrativa, y actividad de la

¹¹ GORDILLO. Agustín. “Derecho Administrativo, Parte General”. Tomo I. Página v29y v30

administración pública, así como las relaciones entre la administración y los particulares, relación entre los mismos particulares, relaciones inter orgánicas y su control que incluye la protección judicial de los particulares y el derecho de defensa en contra de los actos que le afectan al administrado”¹².

2.1.- Los Sistemas del Derecho Administrativo

En nuestra legislación cuando hacemos referencia a los sistemas del derecho administrativo, más que todo se trata de hacer alusión de manera específica a la aplicación práctica del control judicial, desarrollado a través del proceso contencioso administrativo, el cual en materia de Derecho Administrativo es aplicable y procedente, siempre y cuando se haya realizado y llevado a cabo un procedimiento administrativo previo conforme la Ley, en el cual se haya emitido un acto o resolución final por parte del órgano administrativo, el cual tuvo que ser lesivo a los intereses del administrado, y en consecuencia el administrado, en ejercicio de su derecho de defensa y en aplicación práctica del control directo por medio de los recursos administrativos, procede impugnar la resolución o acto de autoridad proferida por la administración pública, pero no obstante de dicha impugnación, la administración pública vuelve a resolver en sentido negativo, circunstancia que en todo momento seguiría siendo lesiva a los intereses del administrado, razón por la cual la Ley le confiere al administrado hacer uso de su derecho de acción a través del control judicial, el cual por disposición constitucional se encuentra a cargo del Tribunal de lo Contencioso administrativo, a través de sus salas respectivas, el cual es parte del Organismo Judicial, cuya función primordial es ser el contralor de la legalidad y juridicidad de los actos de la administración pública. Situación que implica que en Guatemala prevalezca el sistema de justicia retenida, puesto que permanece en el Organismo Judicial, a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la facultad de administrar justicia,

¹² CALDERÓN M. Hugo “Derecho Administrativo Parte General”. Primera edición. Editorial Orión. 2006. Pagina. 86

juzgar y promover la consecución de lo juzgado en base a la legalidad y juridicidad.

En otras Legislaciones han existido otros sistemas, tales como "el sistema Anglosajón que es un sistema básicamente Inglés y el Sistema Francés.

El sistema Anglosajón o Sajón imperante en Inglaterra, el cual se caracterizó por la no existencia de un Derecho especial, puesto que la situaciones de naturaleza administrativa eran reguladas por el Derecho Común, es decir por el Derecho Civil donde las únicas fuentes que se utilizaban para resolver dichas divergencias de naturaleza administrativa era la Jurisprudencia y la Costumbre. Esto significa que dentro del Derecho Sajón no existe un Derecho especial, que regula las relaciones de la Administración Pública como en el sistema francés".¹³

El Sistema Francés, como lo explica el autor Gustavo Penagos, "La Revolución francesa cambió todo el sistema monárquico. El Consejo del Rey fue privado de sus poderes judiciales por la ley del 27 de noviembre de 1790, que lo transfirió al Tribunal de Casación posteriormente, la ley del 27 de abril del 1791, suprimió el Consejo del Rey y organiza en forma embrionaria una especie de Consejo de Estado, el Tribunal de Conflictos y la Corte de Casación".

Preocupados los ideólogos de la Revolución que una justicia administrada por hombres dedicados a la actividad política y administrativa, deja mucho que desear, lo que provocó que en el año de 1799, se creara el Consejo de Estado independiente de otros organismos del Estado. En el año de 1872, se marca la autonomía de la jurisdicción contencioso-administrativa, en que se le otorgó al Consejo de Estado francés, en virtud de una ley, la facultad de administrar justicia en forma independiente y a nombre del pueblo francés, lo que ha sido llamado como **justicia delegada**. El consejo de estado de Francia actualmente

¹³ CALDERÓN M. Hugo "Derecho Administrativo Parte General". Primera edición. Editorial Orión. 2006. Página. 80

está integrado por el vicepresidente, cinco presidentes de sección, consejeros de estado en servicio ordinario, los consejeros de estado en servicio extraordinario, los Maitres de Requetes (maestros de demandas), auditores, nominalmente actúa como presidente el primer ministro de Francia.¹⁴

Lo cual permite verificar que Francia a diferencia de Guatemala aplica un sistema de justicia delegada, puesto que no es el Organismo judicial quien imparte la justicia en situaciones suscitadas por pretensiones que involucren al derecho administrativo, sino que es el Consejo de Estado, que viene siendo como una dependencia del Ejecutivo, quien en virtud de la Ley de dicha legislación se le ha delegado la facultad de administrar justicia en forma independiente de los órganos jurisdiccionales a nombre del pueblo.

2.1.1. Las Características del Derecho Administrativo

Desde una perspectiva general como bien establece el Diccionario de la Real Academia Española, el significado del término característica siempre va hacer alusión a todo lo relativo al carácter o sea los caracteres o cualidades sui generis de una cosa, disciplina, ciencia o arte, que van ha permitir distinguirlas de las demás. Por lo que el derecho como Ciencia normativa, perteneciente a la rama del derecho público, posee sus propias características, siendo éstas: que es un derecho joven, que aún no ha sido compilado y codificado, que es un derecho subordinado, así como también que es un derecho autónomo y cambiante.

El derecho administrativo es relativamente nuevo, de reciente creación, parte del último cuarto del siglo diecinueve. Puesto que el Derecho Administrativo, surge con la Revolución Francesa y nace como producto del surgimiento del Estado de Derecho.

¹⁴ Ob. Cit. Pág. 65

El Derecho Administrativo no ha sido compilado y codificado puesto que la codificación implica la creación de una ley única que regule todo lo relacionado con una materia, con una visión de conjunto en forma completa y coherente. En el derecho administrativo no se puede hablar de codificación, por lo extenso de las competencias administrativas y porque la codificación implica unificación de todo lo relativo a la administración enmarcado en una ley única.

El derecho administrativo es un derecho subordinado en relación al respeto y observancia de Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes constitucionales, ordinarias, especiales, que conforman el ordenamiento jurídico guatemalteco.

El derecho Administrativo es un Derecho Autónomo, puesto que dicha autonomía se manifiesta a través de la existencia de una doctrina propia, una legislación propia, y órganos administrativos y jurisdiccionales que conocen situaciones administrativas específicas, situaciones que resaltan dicha autonomía.

El derecho administrativo es un derecho dinámico en el sentido que es más cambiante que cualquiera otra ciencia jurídica, si no fuera así las administraciones públicas fueran muy estáticas, por la naturaleza del servicio y en general por la labor que desarrolla la administración pública se encuentra en constante cambio, más que todo en los procedimientos. La Administración Pública está en constante cambio, el que depende de las circunstancias y de las necesidades sociales, pues la finalidad de la administración es el bienestar general, el que se realiza a través del servicio público”.¹⁵

¹⁵ CALDERÓN M. Hugo “Derecho Administrativo Parte General”. Primera edición. Editorial Orión. 2006. Páginas 81-83.

2.1.2. Las Fuentes del Derecho Administrativo

En primer término es necesario establecer que se entiende por fuente del derecho en sentido formal, la manera o la forma como se establece o exterioriza la norma jurídica, en otras palabras fuente del derecho significa el origen, fenómeno, de donde proviene la norma.

“La palabra fuente se deriva del latín *fons fontis* que en su origen antiguo significa manantial de agua que brota de la tierra, de lo que de manera figurada se le considera como fenómeno o el objeto general que produce algo, de donde se origina una cosa. Por esa razón las fuentes del derecho administrativo son las fuentes de producción, nacimiento y punto de partida del mismo, en el que se manifiestan los principios y normas que regulan la administración pública y la actividad que desarrolla, los medios para realizarla y las relaciones que genera.

El autor Andrés Serra Rojas, citado por Manuel del Río González, nos indica: las fuentes del derecho administrativo son los procedimientos formas, actos o hechos y demás medios de creación e interpretación en los cuales tiene su origen los principios y leyes en general, las fuentes mismas del derecho, como la ley, la costumbre y la jurisprudencia, todas referidas a la materia administrativa.

Por lo que de manera legal en Guatemala se consideran como fuentes formales del derecho administrativo a la Ley, la Costumbre, la Doctrina, la Jurisprudencia, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de derecho administrativo ratificados por Guatemala.

De conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley del Organismo Judicial, la Ley es considerada como la fuente primaria de todo ordenamiento jurídico, tomando siempre como base cierta el Principio de Legalidad.

Desde un punto de vista legal, la Ley del Organismo Judicial específicamente en su artículo 2 le da a la costumbre la categoría de fuente del derecho y por lo mismo al uso en defecto de ley aplicable al caso concreto, siempre que no sea contrario a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

La doctrina en nuestra legislación también es reconocida como fuente del derecho.

La jurisprudencia según el diccionario de la real academia española la jurisprudencia no es más que el conjunto de sentencias que los tribunales emiten en relación a un mismo asunto en forma conteste y reiterada, la cual en un momento puede ser creadora de la doctrina legal.

“Los tratados internacionales pueden ser considerados como fuente indirecta de derecho administrativo, dependiendo del procedimiento para la aceptación de los mismos. En Guatemala los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, quedan sujetos a la aprobación del Congreso de la República. Desde una perspectiva doctrinaria a los tratados internacionales se les conoce como fuentes supranacionales del derecho administrativo, puesto que en la legislación no solo existen normas internas que regulen en el derecho administrativo, por el contrario existen normas, a través de los tratados y convenios internacionales, que tienen contenido administrativo, que son fuente importante de nuestra disciplina jurídica.

2.1.3. Principios que inspiran el Derecho Administrativo

En nuestra legislación los principios generales o especiales del derecho en general, tienen gran aceptación y aplicación en el mundo jurídico, tomando en cuenta que según la Ley del Organismo Judicial, éstos pueden ser fuente de derecho, como de interpretación, guía o inspiración del mismo. Por lo que según el Diccionario de la Real Academia Española, se debe de entender por principio a toda aquella norma no legal de carácter filosófico, supletoria de ella

y constituida por doctrina o aforismos, que gozan de constante aceptación por jurisconsultos y tribunales.

En materia de derecho administrativo, debemos de entender como principios generales o especiales del mismo, a todas aquellas directrices o líneas matrices de carácter filosófico, que en un momento determinado inspiran u orientan a la aplicación práctica y correcta del ordenamiento jurídico administrativo en relación a la legalidad y juridicidad de la función administrativa por parte de la administración pública, así como de las relaciones entre la administración y los particulares, relación entre los mismos particulares, relaciones inter orgánicas y su control que incluye la protección judicial de los particulares y el derecho de defensa en contra de los actos que le afectan al administrado. Tomando en cuenta que el derecho siempre sigue a la realidad como la sombra sigue al cuerpo, pero en ausencia de derecho, o en caso de lagunas o ambigüedades, siempre debe atenderse el espíritu de la norma, y dicho espíritu solo se logra entender y evidenciar a través de los principios generales o especiales de determinada rama, disciplina o ciencia jurídica.

El derecho administrativo, no hay lugar a dudas, es una ciencia y como toda ciencia su base siempre va ha estar estructura a través de principios; por lo que entre los principios generales y fundamentales del derecho administrativo podemos enunciar: el principio de legalidad, el principio de juridicidad y el principio de supremacía constitucional.

2.1.3.1.- Principio de Legalidad

“Este principio debe entenderse desde el punto de vista de la ley, para el principio de legalidad lo fundamental es la ley y el administrador no puede actuar si no existe una norma legal previa que especifique o faculte su actuación. Por lo que la norma legal y el funcionario o empleado público, están íntimamente ligados. Tomando como base la premisa que establece que

todo funcionario y empleado público, puede hacer todo lo que la ley les permite. Puesto que la misma ley es la que determina el límite de la esfera de sus actuaciones y competencias, para evitar a toda costa el abuso o desviación de poder o autoridad por parte de la administración pública en relación a los administrados.

Tomando en cuenta en Guatemala toda norma, toda ley es manifestación del principio de legalidad. Y considerando que en materia de derecho administrativo existirán tantas leyes generales, especiales o reglamentarias, como órganos administrativos, centralizados, descentralizados, autónomos, de poder, extra poder y de control existan. Lo cual evidencia la magnitud y complejidad del derecho administrativo y de la importancia de la legalidad en el desarrollo y aplicación del mismo.

3.1.3.2.- Principio de Juridicidad

Este principio debe de entenderse en un sentido más amplio que el principio de legalidad, puesto que la legalidad únicamente hace referencia a la Ley. *Contrario sensu* a lo que es la juridicidad, puesto que esta hace referencia a todo lo que atañe a derecho; o sea tiene una concepción mucho más amplia, tomando en cuenta que el derecho no se limita únicamente a la ley, sino también toma en cuenta a la costumbre, la doctrina, la doctrina legal, la jurisprudencia, la equidad y los principios generales del derecho.

Razón por la cual la Constitución Política de la República de Guatemala, regula en su estructura normativa; al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como el contralor de la juridicidad de todos los actos de la administración pública. Lo cual implica la aplicación de este principio al verificar las decisiones que han tomado los órganos administrativos mediante actos o resoluciones lesivas a intereses de particulares en donde los recursos administrativos como contralores de la legalidad no han sido suficientes, por lo que es necesaria la aplicación control judicial como contralor de la juridicidad,

para que al conocer el caso concreto haga un estudio de forma y de fondo del acto o resolución denunciada, para al final determinar no solo la legalidad de la misma sino también la respectiva juridicidad.

Los principios generales de derecho equivalen tanto como a las normas jurídicas, la aplicación supletoria, y el valor propio que estos tengan, ya constituyen una fuente importante de derecho administrativo. Se encuentran ubicados dentro del artículo 221 de la Constitución Política, desde el momento que la Constitución regula al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como el contralor de la juridicidad de la administración publica.

3.1.3.3.- Principio de Supremacía Constitucional

Este principio aunque pertenezca directamente a la esfera del derecho constitucional, debe ser siempre la base fundamental de la aplicación del derecho administrativo, tomando en cuenta que la Constitución como Ley suprema y fundamental de todo Estado, posee una súper legalidad, circunstancia que la coloca en la cúspide del ordenamiento jurídico guatemalteco, donde los órganos administrativos como titulares de la aplicación del poder público por virtud de soberanía popular, siempre deben sujetar el ejercicio del mismo, a las limitaciones que la Constitución les impone, puesto que las personas que dirigen y exteriorizan la voluntad de dichos órganos, únicamente son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos en todo momento a la Ley y jamás superiores a ella.

2.2.- Administración Pública

Teniendo presente entonces que el derecho administrativo se creó con la finalidad primordial de imponer límites al ejercicio del poder público ostentado y aplicado por toda la administración pública, para así evitar a toda costa abusos o desvíos de poder y de autoridad que sean o fuesen lesivos a los intereses de los administrados, estableciendo y fijando a través de la

Constitución y demás leyes ordinarias generales y especiales, así como también reglamentarias, los límites a las atribuciones y competencias administrativas de cada órgano de poder, así como los procedimientos administrativos a seguir. Teniendo presente siempre la premisa que todo funcionario o empleado público en el ejercicio de su función pública, es únicamente depositario de la autoridad, esta sujeto a la ley; y solo puede hacer lo que la ley le permite, puesto que su actuación en todo momento debe regirse en base a los principios de legalidad, juridicidad y supremacía constitucional.

Por lo tanto cuando hablamos de administración pública, debemos de entender ésta como “todo aquel conjunto de órganos administrativos, que van ha desarrollar su función administrativa, encaminada a la creación, propuesta, desarrollo y ejecución de servicios públicos y políticas públicas, las cuales se traducen en una serie de planes y programas, basados en estudios demográficos, que tienen como finalidad única el logro del bien común, ya que se constituyen en el medio idóneo que toda la administración pública dispone para alcanzar sus fines; la cual se encuentra regulada en su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo”¹⁶.

2.2.1.- Estructura de la Administración Pública

Cuando hablamos de la estructura de la administración pública, debemos de percatarnos de no confundir ésta, con la forma en la que se organiza un Estado, “puesto que según algunas doctrinas administrativas e incluso la misma Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se encuentra estructurado por tres órganos de poder, siendo estos el Legislativo, Ejecutivo y Judicial”¹⁷. Ahora bien cuando se hace referencia a la estructura de la administración pública, esta lleva un sentido aún más amplio, puesto que no sólo se limita a verificar los tres órganos de poder con su respectiva organización jerárquica vertical y horizontal, sino también verifica y desarrolla

¹⁶ LÓPEZ ZILLER. José Alberto. “Manual de Preparación de Privados fase Pública” Página 123.

¹⁷ CALDERON M. Hugo Haroldo. “Derecho Administrativo Parte General”. Editorial Orión. Primera Edición. 2006. Página 6

todo lo relativo a los demás órganos que integran el estado, siendo éstos: los órganos de control político, órganos de control jurídico administrativo, entidades descentralizadas no empresariales, entidades autónomas no empresariales, instituciones de seguridad social, empresas públicas nacionales, instituciones públicas financieras y otras afines.

De una manera enunciativa más no descriptiva se indicará de manera sucinta la estructura de cada órgano, empezando por los órganos de poder.

El Organismo Legislativo como órgano de poder por virtud de soberanía, se encuentra conformado por: el pleno del Congreso, los bloques legislativos, la comisión de derechos humanos, la comisión permanente, la junta directiva, la presidencia, la secretaría privada, el departamento de coordinación de sedes, la dirección ejecutiva, el área de asesoría, la dirección de auditoría interna, la dirección legislativa, la dirección administrativa, la dirección financiera y la dirección de personal.

El Organismo Ejecutivo, como otro de los órganos de poder es el más amplio y complejo en relación a su estructura, puesto que se encuentra conformado de la siguiente forma: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Unidad de Evaluación, Supervisión y Control del Gasto Público.

Diecisiete secretarías entre las cuales podemos mencionar: la secretaría general, secretaría privada, secretari de coordinación ejecutiva, secretaría de comunicación social, secretaría de análisis estratégico, secretaría de planificación y programación, secretaría de la paz, secretaría nacional de ciencia y tecnología, secretaría de asuntos administrativos y de seguridad, secretaría de asuntos agrarios, secretaría presidencial de la mujer, secretaría de obras sociales de la esposa del presidente, secretaría de seguridad alimentaria y nutricional, secretaría de bienestar social, secretaría de asuntos específicos, secretaría de turismo y secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. No se mencionó la secretaría de control y transparencia, puesto

que esta fue declarada inconstitucional y expulsada del ordenamiento jurídico lo cual deja sin efecto al acuerdo gubernativo 37-2012 que fue quien le dio su creación.

Nueve órganos administrativos dependientes de la presidencia siendo éstos: la Autoridad Para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Atitlán y su Entorno, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, el Fondo Nacional Para la Paz, Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, Consejo Nacional de la Juventud, Junta Nacional del Servicio Civil, la Oficina Nacional del Servicio Civil, Defensoría de la Mujer Indígena, el Fondo de Desarrollo Indígena guatemalteco.

Y catorce Ministerios de Estado, los cuales serán la respectiva unidad de análisis en la presente investigación a través de sus respectivos portales web donde se verificará si cumplen o no con sus respectivas obligaciones de transparencia que les fija la Ley de Acceso a la Información Pública, en relación los artículos 7 y 10 del citado cuerpo legal, siendo éstos: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Desarrollo Social.

El Organismo Judicial, como el tercer órgano de poder el cual se encuentra conformado de la siguiente forma: Corte Suprema de Justicia, Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Carrera Judicial, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial, Presidencia del Organismo Judicial, Secretaría del Organismo Judicial, Dirección de Servicios de

Gestión Tribunalicia, Dirección de Servicios de Apoyo Jurisdiccional, Órganos de Control, Órganos de Dirección y Ejecución; y Órganos de Asesoría y Apoyo.

Continuando con la sistemática enunciativa y no descriptiva ahora se procederá a indicar cuales son los órganos considerados como de Control Político, siendo éstos: la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral.

De igual forma se procederá únicamente a indicar cuales son los órganos considerados como de Control Jurídico Administrativo, siendo éstos: la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, el Registro de la Propiedad, el Registro Nacional de las Personas, el Registro de Información Catastral y la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Como entidades descentralizadas no empresariales, se pueden enunciar: Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Instituto de Fomento Municipal, Superintendencia de Administración Tributaria, Comité Nacional de Alfabetización, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, Instituto Nacional de Cooperativas, Comité Permanente de Exposiciones, Instituto Guatemalteco de Turismo, Instituto Nacional de Estadística, Fondo de Tierras, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, Aporte Para la Descentralización Cultural.

Como entidades autónomas no empresariales, podemos enunciar las siguientes: Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Consejo Nacional Para la Atención de Personas con Discapacidad, Consejo Nacional de Adopciones, Escuela Nacional Central de

Agricultura, Comité Olímpico Guatemalteco, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala e Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Como instituciones de seguridad social, podemos enunciar las siguientes: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social e Instituto de Previsión Militar.

Como empresas públicas nacionales, podemos enunciar las siguientes: Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, Empresa de Productos Lácteos de Asunción Mita, Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, Empresa Portuaria de Champerico, Empresa Portuaria Quetzal, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Ferrocarriles de Guatemala e Instituto Nacional de Electrificación.

Como empresas públicas financieras, podemos enunciar las siguientes: Banco de Guatemala, Crédito Hipotecario Nacional, Corporación Financiera Nacional, Instituto de Hipotecas Aseguradas y Superintendencia de Bancos.

Como gobiernos locales e instituciones municipales, podemos enunciar, todas las Municipalidades, la Asociación Nacional de Municipalidades y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

Y por último como otras afines, podemos enunciar las siguientes: Autoridad Para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Izabal, Autoridad Para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago de Petén Itzá, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza, Superintendencia de Telecomunicaciones, Comisión Portuaria Nacional, Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres.

En base a todo lo anteriormente expuesto, todos los órganos administrativos enunciados son los que conforman la estructura de la

administración pública estatal, los cuales se encuentran regidos en su estructura, atribuciones, competencias y funcionamientos por el Derecho Administrativo.

2.2.2.- Tipos de Administración Pública

Como ya se indicó anteriormente que se debe de entender por administración pública a todo aquel conjunto de órganos administrativos, que van ha desarrollar su función administrativa, encaminada a la creación, propuesta, desarrollo y ejecución de servicios públicos y políticas públicas, las cuales se traducen en una serie de planes y programas, basados en estudios demográficos, que tienen como finalidad única el logro del bien común, ya que se constituyen en el medio idóneo que toda la administración pública dispone para alcanzar sus fines; la que se encuentra regulada en su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo.

Razón por el que a la administración pública para el logro de sus fines se puede dividir en cuatro tipos, siendo éstos; la administración pública nacional, la administración pública regional, la administración pública departamental y la administración pública municipal.

En relación a la administración pública nacional, esta por disposición constitucional corresponde al Organismo Ejecutivo, el cual es el encargado de gobernar, administrar y velar por el correcto desarrollo social nacional, a través de sus respectivas políticas públicas las cuales no son más que el medio del cual se vale el Organismo Ejecutivo en coordinación con toda la administración pública, que se traducen a un conjunto de acciones encaminadas a mejorar el nivel y calidad de vida de las personas, familia y población; para poder ser formuladas y ejecutadas, deben ser planificadas y programadas en base a estudios demográficos, que generen información suficiente para crear planes y programas que permitan lograr una mejor asignación de recursos a las áreas

necesitas, así como también una mayor eficiencia y eficacia en la realización de las tareas y acciones públicas pertinentes.

Tomando en cuenta que de conformidad con la Ley de Desarrollo Social, el desarrollo social y nacional tiene como única finalidad la realización del bien común, el cual solo es alcanzado mediante la aplicación de políticas públicas, puesto que según el artículo 7 del citado cuerpo legal el derecho al desarrollo es un derecho inherente a la persona, puesto que las personas constituyen el objetivo fundamental de las acciones relacionadas con el desarrollo integral y sostenible de la sociedad.

En relación a la administración pública regional, en primer término es menester analizar que de conformidad con el artículo 2 del decreto legislativo número 70-86 que hace referencia a la Ley Preliminar de Regionalización, se regula una institución jurídica administrativa muy importante, que en este caso sería la región, que de conformidad con la Ley se le concibe como toda aquella delimitación territorial de uno o más departamentos que reúnan condiciones geográficas, económicas y sociales, con el objeto de efectuar acciones de gobierno en las que, junto o subsidiariamente con la administración pública, participen sectores organizados de la población.

Así mismo el artículo 3 de dicha ley hace referencia de como deben de integrarse las regiones para el ordenamiento territorial y el funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, así como también en razón de la interrelación entre centros urbanos y del potencial de desarrollo del territorio circundante, razón por la cual el cuerpo normativo descrito anteriormente en su contenido establece que Guatemala, se va a dividir en ocho regiones de desarrollo, siendo éstas: la Región Metropolitana, la que va a estar integrada por el departamento de Guatemala; la Región Norte que va a estar integrada por los departamentos de Alta y Baja Verapaz; la Región Nororiente integrada por los departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso; la Región Suroriente integrada por los departamentos de Jutiapa,

Jalapa, y Santa Rosa; la Región Central integrada por los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla; la Región Suroccidente integrada por los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez; la Región Noroccidente integrada por los departamentos de Huehuetenango y Quiché; y la Región del Petén integrada únicamente por el departamento de Petén.

Por lo que la administración pública a nivel regional se va a dar o desarrollar de la misma manera que el ejecutivo hace con la administración pública a nivel nacional, con la única salvedad que las acciones de gobierno pueden ser coordinadas, sugeridas y desarrolladas conjuntamente con la representación y participación de las comunidades legalmente organizadas, las cuales se estructuran de conformidad con lo establecido para el efecto por el Decreto Legislativo 11-2002, que hace referencia a la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Cuerpo normativo que de manera primordial se basa en el principio especial de la participación de la población en la planificación democrática del desarrollo social y nacional.

En relación a la administración pública departamental, de conformidad con el artículo 41 del Decreto Legislativo 114-97 que hace referencia a la Ley del Organismo Ejecutivo, establece que el gobierno departamental, estará a cargo del Gobernador Departamental, quien será nombrado por el Presidente de la República. El Gobernador Departamental representa al departamento para el que fue nombrado y tendrá competencia para actuar, únicamente en el departamento que represente. Razón por la cual es el encargado de velar por la eficiente y congruente administración pública departamental; todo ello con fundamento en el artículo 47 que hace referencia a las atribuciones de las Gobernaciones Departamentales, resaltando para el efecto lo que establece los incisos d, e y g del citado artículo, estableciendo para el efecto que: el gobernador departamental debe propiciar e impulsar el pronto y eficaz cumplimiento de las políticas públicas y acciones generales y sectoriales del gobierno central, velar por la efectiva coordinación de las políticas públicas de

los municipios y de las entidades autónomas y descentralizadas que operen en su departamento de acuerdo con la política general del gobierno de la república y en su caso con las políticas específicas del ramo o sector que corresponda, todo ello sin menoscabo de la autonomía municipal; atender cuando sea de su competencia o canalizar a las autoridades correspondientes los requerimientos de la población siempre y cuando sean de beneficio comunitario.

En relación a la administración pública municipal, va ha ser aquella que se va ha desarrollar en los respectivos municipios a través de sus respectivas autoridades, que en este caso podemos enunciar al Consejo Municipal quien por disposición legal le corresponde al Gobierno del Municipio y el Alcalde municipal que es el que representa a la municipalidad y al municipio, al cual le corresponde la administración del mismo, todo ello con la única finalidad de alcanzar a través de los planes, programas y políticas públicas municipales establecidas, planificadas, reglamentadas y programadas por el Consejo Municipal; el bien común de todos los vecinos que conforman el distrito municipal. Tomando en cuenta que taxativamente el artículo 2 del Código Municipal en su parte conducente preceptúa que el municipio se va ha organizar para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito.

2.2.3.- Sistemas o Técnicas de Organización de la Administración Pública

De conformidad con el artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte conducente, taxativamente establece que la administración pública en Guatemala, será descentralizada. Por lo que la descentralización de conformidad con la ley, implica el traslado del poder de decisión política y administrativa del gobierno central hacia entes autónomos e incluso descentralizados, por tener éstos una mayor cercanía y relación con la población en cuanto a sus aspiraciones, demandas y necesidades, lo que produce espacios de participación nuevos y necesarios para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático, producidos por la delegación de

competencias administrativas, económicas, políticas, sociales y financieras, con la única finalidad de implementar todas las políticas públicas necesarias, para lograr la consecución del bien común ya sea de manera Nacional, Regional Departamental o Municipal.

“Razón por la cual los sistemas o técnicas de administración se identifican principalmente por la descentralización de competencias que se hacen desde el ejecutivo hacia entes autónomos y centralizados. Esto con el objeto de asegurar una adecuada integración y coordinación de las actividades sobre la distribución de trabajo más equitativo y eficaz. Tomando en cuenta que el Estado tiene su propia organización, que está integrada por una serie de órganos administrativos y elementos que interactúan en un complejo sistema de atribuciones y competencias para delimitar el campo de acción por materia, grado y territorio, a fin de que la acción de sus órganos no interfiera en sí. Por lo que el funcionamiento de la organización estatal, hace necesario la utilización de diferentes formas de estructuración de acuerdo con las necesidades y los fines propios que se propone la administración.

Así que los sistemas o técnicas de administración, se determinan en base a consideraciones, administrativas, políticas y técnicas, en razón de la independencia o dependencia de los órganos que la componen, de especialidad de la materia que desarrollan, y al territorio en que se la ejecuten.

Razón por la cual la doctrina administrativa ha llegado a considerar que existen cuatro formas de organización administrativa, siendo éstas: la descentralización, centralización, desconcentración y autonomía.

2.2.3.1.- Centralización

La centralización desde una perspectiva jurídico administrativa, es considerada como aquel sistema o técnica de administración pública más antiguo, el cual se desarrolla directamente por parte del Organismo Ejecutivo a

través de cada uno de los órganos administrativos que lo conforman, en el ejercicio y desarrollo de sus respectivas funciones, atribuciones y competencias administrativas; la que se caracteriza por la concentración de orgánica administrativa que forma entre sí una relación de subordinación en un área específica de un territorio o Estado, que por lo regular siempre va ser la capital o zona metropolitana de éste. Lo cual a dado lugar a que la doctrina jurídico administrativa llegue a considerarla como la administración directa del Estado o gobierno central, a través de sus órganos administrativos jerárquicamente estructurados. Tomando en cuenta que en este sistema o técnica de administración, la relación jerárquica juega un papel muy importante, ya que une en línea vertical a los órganos de diferentes niveles de la administración centralizada y en línea horizontal a los órganos del mismo grado.

2.2.3.2.- Descentralización

A la descentralización *contrario sensu* que la centralización desde una perspectiva general se le ha llegado a considerar como una forma de administración pública indirecta, caracterizada por el traslado de competencias por parte del ejecutivo a otros órganos administrativos o persona jurídicas (con personalidad jurídica propia), que sean parte del Estado o ajenos a él. Con la sola finalidad de alcanzar el bien común.

La descentralización como institución jurídica de naturaleza administrativa es una de las principales estrategias que el Estado de Guatemala utiliza, para atender las demandas de la población, puesto que implica el traslado de competencias administrativas de parte del gobierno central hacia entes autónomos, demás instituciones del Estado, y comunidades organizadas legalmente, caracterizados por su mayor cercanía y relación con la población, en cuanto a sus aspiraciones, demandas y necesidades, lo que produce espacios de participación nuevos y necesarios; para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático del estado guatemalteco. La descentralización como proceso, consiste en la transferencia que hace el

Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y comunidades organizadas legalmente, trasladándoles poder de decisión a través de la adjudicación de la titularidad de ciertas competencias administrativas, así como los recursos financieros necesarios que sirvan para la aplicación de políticas públicas y servicios públicos.

2.2.3.3.- Desconcentración

Este tipo de sistema o técnica de administración pública, “es una concepción nueva de algunos de los autores de Derecho Administrativo, puesto que la ubican en un punto intermedio entre la centralización y descentralización administrativa. Este tipo de sistema o técnica de administración, nace como contraposición a la centralización administrativa, pretendiendo eliminar desde el momento de su implementación el excesivo centralismo burocrático, que hace que la administración pública se torne lenta en sus funciones y evitar la rigidez del centralismo burocrático.

Razón por la que la desconcentración administrativa se vuelve en una forma alterna que pueden adoptar todas las instituciones, centralizadas, descentralizadas y autónomas del Estado, para el efectivo, rápido y eficaz desarrollo de sus funciones administrativas. Puesto que esta únicamente va implicar la transferencia de la titularidad de la competencia administrativa ya que siempre va a depender tanto financiera como políticamente del órgano principal que permitió su aplicación, razón por la cual siempre existirá el vínculo de jerarquía administrativa”¹⁸.

2.2.3.4.- Autonomía

La autonomía es el último de los sistemas o técnicas de administración pública, el cual se caracteriza por la creación por disposición de la Ley de uno o

¹⁸ CALDERON M. Hugo Haroldo. “Derecho Administrativo Parte General”. Editorial Orión. Primera Edición. 2006. Páginas 201, 202 y 203.

varios órganos administrativos estatales, dotados de personalidad jurídica propia y competencias generales y especiales propias, así como también adquiridas por virtud de descentralización, los cuales en ningún momento dejan de ser parte del Estado y que tampoco se encuentran excluidos de los controles del mismo. Desde una perspectiva crítica podemos decir que en Guatemala, la autonomía pura no es más que una utopía, puesto que si bien es cierto los entes autónomos se caracterizan por elegir a sus propias autoridades, disponer de sus propios recursos y atender los asuntos propios de su competencia, siempre va a recibir un pequeño porcentaje del presupuesto general de la nación instituido legalmente; aspecto que tiende a romper la totalidad de la plena autonomía.

2.2.4.- Elementos de la Administración Pública

La administración pública, como estructura orgánica compleja para poder funcionar adecuadamente, debe coordinar y armonizar todo el que hacer en todos los entes administrativos que la conforman, puesto que "existe diversidad de elementos que la integran y complementan, siendo éstos los siguientes: la jerarquía administrativa, el órgano administrativo, los funcionarios y empleados públicos, la competencia administrativa, la que puede ser exclusiva, atribuida y concurrente, la función administrativa, relación funcional, acto administrativo, control directo, control judicial, la actividad y la finalidad.

2.2.4.1.- La Jerarquía administrativa

La jerarquía administrativa como elemento de la administración pública, se le concibe como toda aquella relación de colaboración y subordinación que existe entre los órganos administrativos que pertenecen a una misma estructura orgánica o que poseen una misma competencia administrativa.

Por lo que de conformidad con la doctrina jurídico administrativa, dicha jerarquía va a estar estructurada o conformada por líneas y grados. En donde

las líneas van a ser aquellas que van a representar la coordinación e incardinación inter orgánica, pudiendo ser éstas tanto horizontales como verticales.

Las líneas horizontales son las que van a enlazar a los órganos administrativos del mismo nivel que no se guardan ningún tipo de subordinación más que coordinación funcional.

Ahora bien las líneas verticales van a ser aquellas que van a enlazar a los diferentes grados de la administración pública en su escala jerárquica, puesto que los grados siempre van a representar subordinación y dependencia.

2.2.4.2.- El Organo Administrativo

El órgano administrativo como elemento de la administración pública, se va a constituir como el medio, conducto, o el instrumento jurídico material del cual va a disponer el Estado, para manifestar y exteriorizar su voluntad, prestando para el efecto servicios públicos e implementando políticas públicas estructuradas en base a planes, programas y estudios demográficos, con la sola finalidad de alcanzar el bien común de la población.”¹⁹.

2.2.4.2.1.- Funcionarios y Empleados Públicos

Los funcionarios y empleados públicos van a conformar lo que en derecho administrativo se le conoce como el elemento personal o subjetivo necesario de la administración pública, puesto que va a estar constituido clasísticamente por diferentes categorías siendo éstas: las de dignatarios, funcionarios y empleados públicos “los cuales no van a ser más que personas físicas que representan o se encuentran a cargo en un momento determinado de los órganos administrativos, los que pueden llegar a ostentar dicho cargo ya

¹⁹ CALDERON M. Hugo Haroldo. “Derecho Administrativo Parte General”. Editorial Orión. Primera Edición. 2006. Páginas 158 y 164.

sea por nombramiento, por elección popular o por oposición, de acuerdo al sistema de administración de personal del Servicio Civil.”²⁰

2.2.4.2.2.- Relación Funcional

La relación funcional como elemento de la administración pública no es más que el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del Estado por medio del servicio civil, desde el momento en que inician el ejercicio del cargo hasta el cese de labores o entrega del mismo, cuyas características pueden ser el acto administrativo de nombramiento o investidura, la voluntad del estado que decide el nombramiento y el particular que acepta el cargo, genera efectos jurídicos, derechos y obligaciones, los derechos y obligaciones que se encuentran establecidas en la ley y la finalidad el bien común a través del servicio público. La naturaleza jurídica del servicio civil se divide en tres teorías, la primera sostiene que la relación funcional es un acto unilateral del estado, otra que afirma que es un acto contractual y la última que considera a la relación funcional como un acto de condición por la capacidad de servicios. En conclusión hay que considerarlo como un acto diverso por el nombramiento, la voluntad y el propósito de servicio a la colectividad.

2.2.4.2.3.- Competencia Administrativa

La competencia administrativa como elemento necesario de la administración pública, juega un papel muy importante, puesto que es la que va a determinar a través de la ley la esfera de atribuciones y competencias que un órgano administrativo puede ostentar en un momento determinado, fijando los límites pertinentes al ejercicio del poder público. “La doctrina jurídica administrativa define a la competencia administrativa como la cantidad de poderes, potestades, facultades y funciones que el Ordenamiento Jurídico

²⁰ CALDERON M. Hugo Haroldo. “Derecho Administrativo Parte General”. Editorial Orión. Primera Edición. 2006. Página 159.

Administrativo le otorga a los órganos administrativos, para que puedan legítimamente actuar, quedando sometidos a la aplicación de los principios de legalidad y de juridicidad en el ejercicio de la función administrativa.”²¹

Para efectos de complementación y referencia cabe mencionar que el Acuerdo Gubernativo número 312-2002, establece que la competencia administrativa se puede clasificar en exclusiva, atribuida y concurrente.

2.2.4.2.3.1.- Competencia Exclusiva

La competencia exclusiva como la primera de las clases de competencia anteriormente descritas, de conformidad con la Ley, va ha ser aquella que se va ha ejercer conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes; y que es atribuida con exclusividad a un órgano o dependencia del Estado.

2.2.4.2.3.2.- Competencia Atribuida

Esta clase de competencia va ha a ser aquella que de conformidad con la Constitución Política de la República y demás Leyes, por virtud de descentralización van ha ejercer los municipios, las demás instituciones del Estado o la comunidad legalmente organizada, por efecto de la descentralización ordenada en la ley.

2.2.4.2.3.3.- Competencia Concurrente

Esta clase de competencia va ha a ser aquella que de conformidad con la Constitución Política de la República y demás Leyes se va ha ejercer desde más de un nivel de la administración pública, siempre y cuando atendiendo a su ámbito territorial, conjunta y complementariamente, por dos o más entidades

²¹ CALDERON M. Hugo Haroldo. “Derecho Administrativo Parte General”. Editorial Orión. Primera Edición. 2006. Página 177.

del Estado, con delimitación precisa de sus áreas de responsabilidad, para el logro de un objetivo común.

2.2.4.2.4.- Función Administrativa

“La función administrativa es la que corresponde específicamente al Organismo Ejecutivo. Puesto que es regulada por el Derecho Administrativo, que consiste en la toma de decisiones particulares, que crean situaciones jurídicas concretas, bajo la forma de acto, de condición y de actos subjetivos, y que encamina a la satisfacción de necesidades generales de interés público. La función administrativa puede verse desde dos puntos de vista formal y material. Desde el punto de vista formal la función administrativa es la actividad que normalmente realiza el Organismo Ejecutivo. Desde el punto de vista material se puede entender la función administrativa como la actividad del Estado encaminada a la ejecución de leyes, de principios constitucionales y de la legislación ordinaria. La administración administrativa es en esencia el que hacer de la administración pública o sea el ejecutivo en acción.”²²

2.2.4.2.5.- Acto Administrativo

Es una declaración unilateral, concreta o general de voluntad, de un órgano administrativo competente, que produce efectos jurídicos directos, concretos o generales, cuyas características pueden ser de *presunción de legitimidad*, es decir cuando se ha cumplido con todas las etapas del procedimiento administrativo y los requisitos de fondo y forma que señale la ley, se produce el acto administrativo que se presume legítimo y empieza a producir efectos jurídicos luego de su notificación, salvo que sea impugnado por el afectado por medio de los recursos administrativos o en la vía judicial por medio de lo contencioso administrativo, el amparo y la inconstitucionalidad, la *ejecutoriedad*, se da cuando el acto administrativo llena los requisitos de fondo

²² CALDERON M. Hugo Haroldo. “Derecho Administrativo Parte General”. Editorial Orión. Primera Edición. 2006. Páginas 7 y 8.

y forma que exige la ley, y que debe cumplirse luego de notificado, la ejecución puede ser *directa* cuando los propios órganos centralizados se encargan de ejecutarlo e *indirecta* cuando se produce debe pedirse la intervención de un órgano jurisdiccional especial o privativo o común para que coactivamente proceda a la ejecución del acto, *la irretroactividad*, se da cuando el acto administrativo debe surtir efectos a partir de la notificación o publicación, a la persona a quien se dirige y nunca antes, de lo contrario se produce la violación constitucional, la *unilateralidad*, se da cuando el acto administrativo es unilateral, ya que es una declaración unilateral y concreta ya que se establece para que la administración tome una decisión, no requiere la voluntad del particular, algunos autores no aceptan la unilateralidad del acto administrativo; y la *revocabilidad*, que puede analizarse desde dos puntos de vista, *de oficio* cuando el superior jerárquico del órgano administrativo revoca la decisión tomada por el subordinado o el propio órgano toma la decisión y la revoca, en este caso la resolución no ha sido notificada, y *a petición de parte* cuando la resolución administrativa ha sido notificada legalmente al particular y este hace uso de los medios que la ley le otorga para oponerse a las resoluciones o actos administrativos por afectarle a sus derechos e intereses.

2.2.4.2.6.- Control Directo

Es el que control que los particulares o administrados ejercen sobre los actos o resoluciones de la administración, el cual se refleja en los recursos administrativos o medios de impugnación.

“Por lo regular el control directo inicia cuando por resolución de petición o denuncia ante un órgano administrativo, en virtud de haberse llevado un procedimiento administrativo, al concluirse éste se emite un acto o resolución administrativa que tienda a ser lesivo o vejatorio a los intereses del administrado, por lo tanto el administrado en ejercicio de su derecho constitucional de defensa y control directo sobre la administración pública, utiliza ya sea los medios de impugnación ordinarios, como lo son: el recurso de

revocatoria o reposición o en su defecto los medios de impugnación extraordinarios, como lo son: la apelación revisión y reconsideración, iniciando así la segunda fase del expediente y procedimiento administrativo, pero ya en fase de impugnación en virtud de control directo”²³.

2.2.4.2.7.- Control Judicial

Cuando en el ejercicio del control directo, a través del uso de los recursos administrativos, el administrado considera que no se respeta la legalidad ni la juridicidad por parte de los actos o resoluciones de la administración pública, por considerar éste que son lesivos a sus intereses, la Ley le confiere al administrado o particular la facultad del ejercicio legítimo del derecho de acción y pretensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, se constituye como el contralor de la Juridicidad de los actos de la administración pública, verificando así que las resoluciones o actos de autoridad emanados o preferidos por la administración pública, se apeguen a la Ley, la costumbre, la doctrina, la doctrina legal, la jurisprudencia, la equidad y a los principios generales del derecho y especiales del derecho administrativo.

2.2.4.3.- Actividad

La actividad como otro de los elementos importantes de la administración pública, se manifiesta a través de las distintas acciones que desarrollan los órganos que integran la administración pública, en relación a la propuesta, implementación, desarrollo y ejecución de planes y programas que se convierten en políticas públicas y efectiva prestación de servicios públicos a los que por disposición legal, está obligada la administración pública para el logro de su finalidad, que como bien sabemos es la consecución del bien común.

²³ LÓPEZ ZILLER. José Alberto. “Manual de Preparación de Privados fase Pública” Página 6

2.2.4.4.- Finalidad

Como ya se mencionó anteriormente la única finalidad para la cual se creó y organizó el estado como producto social en virtud de soberanía, de una manera, tanto jurídica, política, como territorial, fue con la sola finalidad de que a través de la administración pública, en el legítimo ejercicio de la función pública, se pudiera alcanzar el bien común o bienestar general de toda la población.

2.2.4.5.- Medio

El medio se debe de entender como la vía o el instrumento legal del cual dispone la administración pública para el logro de su finalidad. El cual se viene a circunscribir a todos aquellos planes y programas que en base a estudios demográficos y propuestas, por parte de la población y la comunidad organizada pretenden crear e implementar políticas públicas y servicios públicos esenciales, para el adecuado y efectivo desarrollo social y nacional de la población guatemalteca.

CAPÍTULO III

ORGANOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO, AUDITORÍA SOCIAL, PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

3.- EL CONTROL Y SUS DIVERSOS ENFOQUES

De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, desde una perspectiva *latu sensu* se entiende por control a toda aquella situación o disposición, que permite en todo momento y ante cualquier situación la debida, correcta y eficiente comprobación, inspección, fiscalización e intervención, de una persona u órgano en relación a otra.

Ahora bien verificando el control, pero desde un punto de vista de la administración en general, este se viene a constituir como uno de los tantos pasos que integran un proceso administrativo sea este privado empresarial o público estatal, tomando en cuenta que de conformidad con la doctrina de la administración general y doctrina jurídico administrativa, se pueden concebir como pasos de la administración, los siguientes: la planificación, la coordinación, la organización, la dirección y el control.

Donde el control va ha servir para la medición de resultados actuales y pasados en relación a los esperados, ya sea total o parcial, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes.

“Desde una perspectiva política, podemos decir que la función política de control es de reciente existencia, como consecuencia de una actitud consciente de verificar acciones concretas. Precisamente esa verificación o ejercicio de la inspección, tiene un valor jurídico originario, que implica un límite a la actividad del órgano con la posible influencia en sus decisiones. En ese sentido ésta función puede definirse como toda capacidad o facultad indirecta de influir o limitar la decisión del titular de una función a quien está formalmente atribuida por el Derecho. Generalmente significa una vía de participación, verificación y

limitación de impulso discrecional del gobierno, puesto que entre sus actividades podemos mencionar: a la audiencia como informe previo de otro órgano diferente de aquel a quien corresponde la decisión, el acto o ratificación como rechazo o aprobación de la decisión de un órgano por otro órgano, el derecho de enmienda, el derecho de información y discusión de la acción gubernamental y administrativa que se pueda dar a través de preguntas e interpelaciones, la encuesta pública como instrumento de inspección e información de las decisiones del gobierno, la creación de órganos permanentes de inspección, como el caso del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala y la posibilidad de deducir responsabilidades en el ámbito político, cuya consecuencia máxima puede ser que el funcionario terminó o cese en el desempeño del cargo”²⁴.

Ahora bien desde una perspectiva jurídica y cuasi política, podemos decir que el control tiene su fundamento en la teoría de los frenos y contrapesos, que establece o instituye el poder de vigilancia y control por parte de un órgano o persona sobre la actividad de otro, produciéndose así una recíproca supervisión al estar plenamente determinado y delimitado su campo de acción y que de él no se puede salir. Debemos de tener presente que en Guatemala, la soberanía se encuentra repartida en tres órganos que ostentan los poderes del estado, donde se debe actuar en un plano de igualdad, para así alcanzar un equilibrio en aras de un prudente y eficiente ejercicio del poder público.

El ordenamiento jurídico guatemalteco establece varias formas de aplicar el control en la administración pública, siendo éstos: el control interno, el control directo, el control de derechos humanos, el control judicial, el control parlamentario, el control de fiscalización, la auditoría social, la publicidad y transparencia de los actos administrativos.

²⁴ PRADO, Gerardo, “Teoría del Estado”, Segunda Edición, Editorial Praxis, 2006. Página 155 y 156.

3.1.- Control Interno

Siempre desde la perspectiva de la administración pública, al control interno se le debe de entender como todo aquel que se realiza a nivel interno o dentro de un órgano administrativo, centralizado, descentralizado, desconcentrado o autónomo, en el ejercicio legítimo de su función administrativa, obedeciendo siempre a su respectiva escala jerárquica, en donde los órganos superiores o sea los de mayor nivel jerárquico son los que ostentan e instituyen el debido poder de vigilancia hacia sus subordinados, creando y emitiendo a través de acuerdos, los reglamentos internos respectivos, que establezcan y determinen las pautas de actuación e interacción administrativa, procedimental y laboral. Por lo tanto debemos de tener presente que el control interno administrativo, es uno de los poderes que otorga la Jerarquía administrativa, como por ejemplo el poder disciplinario, el poder de revisión, el poder de revocatoria, Etc.

3.2.- Control Directo

El control directo en contraposición con el control interno, tiene otro enfoque totalmente distinto, puesto que el control directo se va a dar fuera de la escala jerárquica administrativa o sea fuera de la estructura y jerarquía administrativa, puesto que quienes lo van a ostentar no van a ser ni funcionarios, ni empleados públicos por parte de un órgano administrativo; sino particulares que en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, aplicado en un momento determinado para evidenciar e impugnar, la existencia de ilegalidades de actos o resoluciones administrativas, que sean perjudiciales o lesivas a sus intereses; por lo que es así como tanto los recursos administrativos, sean estos ordinarios o extraordinarios, se convierten en el medio idóneo para la respectiva y correcta aplicación del control directo, sobre las resoluciones ilegales, arbitrarias o lesivas de la administración pública en perjuicio de los intereses de los particulares o administrados. De manera meramente ilustrativa y no descriptiva, cabe mencionar que de conformidad

con el artículo 17 de la Ley de lo contencioso Administrativo establece que los únicos recursos administrativos que se pueden catalogar como medios de impugnación ordinarios de toda la administración pública son: el Recurso de Revocatoria y el Recurso de Reposición.

Por lo tanto en uso y aplicación práctica de la exégesis, hermenéutica y lógica jurídica, podemos decir que cualquier otro recurso administrativo que no sea el Recurso de Revocatoria o Reposición, será considerado como medio de impugnación extraordinario, teniendo como ejemplos precisos e inmediatos a los recursos de: Apelación en Materia de Servicio Civil y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Revisión en materia de Acceso a la Información Pública; y Reconsideración en materia de Administración de Personal del Registro Nacional de las Personas.

3.3.- Control de Derechos Humanos

El control de Derechos Humanos es una especie de control estatal, que tiene su punto de partida en la teoría de pesos y contrapesos de la administración pública, ya que el mismo se ejerce siempre y cuando exista solicitud o denuncia de parte interesada, por medio de la Procuraduría de los Derechos Humanos de manera directa, e indirecta a través de las respectivas delegaciones departamentales de ésta; con la única finalidad de verificar y evidenciar la existencia fehaciente, abusiva y contundente de violaciones a los derechos individuales o sociales consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás Leyes, por parte de los órganos que conforman la administración pública; todo ello en el ejercicio de la legítima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías Constitucionales.

Este tipo de control tiene su sustento legal en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los

Derechos Humanos, que desarrolla ampliamente todo lo relativo a la aplicación práctica de este tipo de control.

En calidad de esbozo, se debe de tener presente que en Guatemala al Procurador de los Derechos Humanos, también se le conoce como el *Ombudsman*, aforismo que significa el representante, defensor del pueblo y proveedor de justicia, puesto que entre las atribuciones y competencias que le asigna su Ley orgánica están: tutelar todos los derechos humanos fundamentales, y la legalidad; investigar y controlar a la administración pública, sugerir nuevas medidas legales y sancionar a las autoridades que dificulten el legítimo ejercicio de un derecho.

3.4.- Control Judicial

En su respectivo orden de aplicación práctica adjetiva, podemos catalogar al Control Judicial, como el cuarto control, que tiene en un momento determinado injerencia en cuanto a la verificación de la legalidad y juridicidad de los actos o resoluciones emanados de la administración pública a través de sus respectivos órganos administrativos, entidades descentralizadas, centralizadas, desconcentradas o autónomas.

La Jurisprudencia Constitucional, establece que el Control Judicial, tiene su base e inspiración en el *principio de control jurídico adjetivo de los actos de la administración pública*, el cual fue creado y ampliamente desarrollado en la Gaceta número 56, expediente No. 219-00, página No. 594, de la sentencia 15-06-00, proferida por la Corte de Constitucionalidad, que establece que en materia administrativa, el control judicial será ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través de sus respectivas Salas, en donde éste se constituye como tal, para conocer en caso de contiendas por actos o resoluciones de la administración pública y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como también en caso de controversias derivadas de los contratos y concesiones administrativas, para así poder fungir como un

órgano imparcial y objetivo, contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública, que tienda a evitar a los gobernados la lesión de sus derechos fundamentales y legales a través de la legítima resistencia para la protección y defensa de sus derechos.

Ahora bien para poder invocar la aplicación práctica del Control Judicial, primeramente se deben de cumplir con ciertos presupuestos legales, siendo éstos: que haya existido una solicitud, denuncia, concesión o contrato ante un órgano administrativo, que se haya creado y conformado expediente administrativo, que haya existido un acto o resolución administrativa que lesione derechos o intereses de los solicitantes, denunciantes, contratistas, concesionarios o administrados, que se haya ejercido el control directo, a través de la interposición de los recursos administrativos, sean éstos ordinarios o extraordinarios, que exista otra resolución administrativa generada por la interposición de los recursos administrativos, que en lugar de revocar el acto objeto de impugnación, convalide éste y siga lesionando los derechos de los interesados.

Una vez cumplidos éstos presupuestos legales, de conformidad con la Ley de lo Contencioso Administrativo y la Constitución Política de la República de Guatemala, ya se puede invocar la tutela e intervención de la jurisdicción privativa, a través del control judicial, por medio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estructurado a través de sus respectivas Salas.

De manera meramente enunciativa, más no descriptiva cabe mencionar que actualmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está conformado específicamente por cinco Salas, donde la primera y la quinta Sala, conocen asuntos de naturaleza eminentemente administrativa y la segunda, tercera y cuarta Sala, conocen de asuntos de naturaleza tributaria, dichas Salas tienen de conformidad con la Ley competencia en toda la república de Guatemala, para conocer en única instancia los procesos que se promuevan en cada una de sus respectivas materias.

Ahora bien en relación a toda esa serie de etapas ordenadas, concatenadas y sistematizadas que conforman ya sea el proceso contencioso administrativo o el proceso contencioso tributario, van a ser las mismas que las de un juicio de conocimiento, con la única variante de los respectivos plazos para cada caso.

3.5.- Control Constitucional

Cuando en materia de Derecho Administrativo o administración pública, se hace referencia a la aplicación práctica del control constitucional, más que todo se está tratando de forma específica, de referir o remitirse a una de las tres garantías constitucionales que se instituyen como el medio de defensa legítimo del orden Constitucional, que en éste caso sería de manera específica el Amparo.

De conformidad con la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se le concibe al Amparo como toda aquella garantía Constitucional en contra de la arbitrariedad, la cual se invoca y aplica con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos, cuando la violación ya hubiese ocurrido. Tomando como base las premisas legales que establecen, *que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y que todos los días y horas son hábiles en materia de amparo.*

Razón por la cual dicha garantía constitucional, contra la arbitrariedad procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las Leyes garantizan a la persona humana.

Los órganos que por disposición legal tienen competencia para conocer la interposición de amparos son: la Corte de Constitucionalidad la cual de

conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala es considerada como un tribunal colegiado, independiente y permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es **la defensa del orden constitucional**; y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad es considerada como Tribunal extraordinario en única instancia de amparo; *contrario sensu* a los otros órganos que tienen competencia de conocer Amparos tales como: la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y los Jueces de Primera Instancia, todos ellos al momento de constituirse lo harían pero en la calidad de Tribunales Constitucionales de Amparo.

En materia de Derecho Administrativo el Amparo como medio de Control Constitucional, procedería siempre y cuando por *principio de definitividad*, se hubiese agotado en la fase normal el procedimiento administrativo y éste no haya sido favorable ni efectivo, se hubiesen interpuesto los recursos administrativos como medios de control directo, si el acto o resolución administrativa inicial hubiese sido lesiva a los intereses del administrado; y se hubiese agotado previamente el control judicial si en su momento el control directo no fue efectivo; y que por último en la instancia del control judicial, los mismos derechos y garantías se siguiesen lesionando, convalidando y no revocando las resoluciones o actos administrativos iniciales, por lo que una vez agotadas todas esas vías, se tiene por convalidada la definitividad, la cual permite la acción para el respectivo ejercicio de la justicia constitucional a través del amparo como Garantía contra la Arbitrariedad.

Salvo caso muy especiales permitidos únicamente por la Ley no es necesario agotar preliminarmente, por definitividad, las vías administrativas y judiciales pertinentes, para poder acudir a invocar la aplicación de la justicia constitucional a través de Amparo, como lo es el caso del silencio administrativo, y la resolución desfavorable del recurso de revisión en materia de información pública, entre otros.

3.6.- Control Parlamentario

El control parlamentario es otra manifestación práctica más de la teoría de los pesos y contra pesos, puesto que este tipo de control evidencia como el Congreso de la República de Guatemala, ejerce cierta fiscalización y Control en relación a ciertos funcionarios que conforman el Organismo ejecutivo, generando así un equilibrio en base a la división de poderes y al control inter orgánico de jerarquía horizontal.

El control parlamentario se le conoce también con el nombre de juicio político, interpelación, control ministerial, control de los actos del Ejecutivo y no va a ser más que la obligación que tienen todos los Ministros de Estado, de conformidad con la Ley, de acudir, participar, informar, y contestar las respectivas interpelaciones que en un momento determinado les puedan formular uno o más diputados en las sesiones que realizan los miembros del Congreso de la República.

Por lo tanto la interpelación, como medio de control político se va ha fundar en el régimen del sistema democrático adoptado por Guatemala, puesto que de conformidad con la Ley las injerencias más importantes en el Ejecutivo se producen en materia política, especialmente por el Derecho Constitucional que le asiste a los Diputados de poder interpelar amplia y plenamente a los Ministros de Estado.

La doctrina jurídica administrativa es conteste en el sentido de indicar que el derecho de interpelación se caracteriza por ser **ilimitado**, en relación a que ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrá limitar a los Diputados el derecho de interpelar, calificar o restringir las preguntas que le formulen en su momento a los respectivos Ministros. Ya que todo Ministro que sea legalmente notificado para ser interpelado, por imperativo legal debe asistir a la sesión de interpelación, y en ningún momento puede ausentarse del país, ni excusarse de responder de forma alguna.

Pero aunque la Ley sea la que establezca dicha característica, la misma Ley también establece las excepciones a dicha regla, siendo ésta las interpelaciones que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes, tomando en cuenta que esta información de conformidad con la legislación especial, es de naturaleza confidencial o reservada y por lo tanto aunque fuese objeto de interpelación no existe obligación de responder a ella, bajo ninguna forma o modalidad a tales cuestionamientos.

El efecto de la interpelación, como medio de control político, radica en la emisión de votos de confianza, y votos de falta de confianza. Los votos de confianza representan el visto bueno por parte de los interpelantes en relación a que el interpelado en el ejercicio de su función administrativa, está haciendo una buena labor en relación al desarrollo y correcto ejercicio de las políticas públicas de su competencia, que en todo momento se adaptan a la conveniencia nacional y a la política general de gobierno.

Ahora bien los votos de falta de confianza, representan la reprobación total de la censura del interpelado, en el sentido que la misma reflejó una deficiencia fehaciente en el ejercicio de la función administrativa, o sea que el desenvolvimiento de sus actuaciones no se adaptan al correcto ejercicio de las políticas públicas de su competencia, ni a la conveniencia nacional, ni a la política general de gobierno. Situación que faculta a los interpelantes exigir la dimisión del interpelado, para el sólo efecto de tenerlo por separado del cargo.

3.7.- Control de Fiscalización

El control de fiscalización, es otra manifestación práctica de la teoría de los pesos y contrapesos de la administración pública, puesto que este tipo de control por disposición legal, le corresponde a la Contraloría General de Cuentas, en el legítimo ejercicio de la acción fiscalizadora, de todo el interés

hacendario de los organismos del estado y de la nación, a través de la realización de auditorías gubernamentales.

Se debe de entender por auditoría gubernamental a toda aquella manifestación de control gubernamental, que comprende un conjunto de actividades técnicas y legales ejercidas por la Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, para evaluar todo el ámbito operacional, funcional y legal de los entes públicos, con base a normas de auditoría gubernamental, técnicas y procedimientos, que permitan un enfoque objetivo y profesional, cuyos resultados no se sintetizan solamente en recomendaciones para mejorar la administración pública, sino también para determinar la pérdida, destrucción o desvío del haber patrimonial del Estado y la deducción de las responsabilidades legales, para la compensación del mismo.

3.8.- Auditoría Social

La auditoría social como medio de control y transparencia de los actos de la administración pública, es una institución jurídica de reciente creación, puesto que nace en el año dos mil dos, mediante el Decreto Legislativo 14-2002, que hace referencia a la Ley General de Descentralización, puesto que como ya se mencionó anteriormente la descentralización, como uno de los sistemas o técnicas de administración pública, consiste en la transferencia que hace el Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y comunidades organizadas legalmente, trasladándoles poder de decisión a través de la adjudicación de la titularidad de ciertas competencias administrativas, económicas, políticas y sociales así como los recursos financieros necesarios que sirvan para la aplicación de políticas públicas y servicios públicos.

Muchas veces ese traslado de competencias, específicamente la económica y financiera, conlleva a que ciertos funcionarios o empleados públicos, por ya tener la titularidad directa de dichas competencias, realicen actos arbitrarios e ilegales que desvirtúen la aplicación y ejecución de las

políticas y servicios públicos, para los cuales fueron destinados dichos fondos y traten de buscar beneficios personales y no en pro de la comunidad, razón por la cual, el legislador fue sabio, al incardinar a la figura jurídica de Descentralización, la de Auditoría Social, como medio de control y transparencia de todos los actos de la administración pública, pero a través de la proactiva participación y representación de la población por medio de las comunidades organizadas, entendiéndose éstas como el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y en determinado momento cualquier comunidad organizada y reconocida conforme la Ley, por lo que éstas circunstancias propiciarían que en un momento determinado por las injerencias democráticas de la población en la planificación, ejecución y control integral de la política pública ya sea nacional, regional, departamental o municipal, se genere plena solvencia y transparencia por parte de la administración pública en el manejo y control de recursos públicos y fondos sociales.

Razón por la cual la Auditoría Social en materia de Derecho Administrativo y Administración Pública, se convierte también en un medio de control democrático o de fiscalización social, que permite la existencia y desarrollo de la transparencia en todos los actos de la administración pública.

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley General de Descentralización, tendrán facultad para realizar Auditoría Social de los programas de descentralización que se ejecuten en sus respectivas localidades y en los que tenga participación directa, ya sea en el ámbito municipal, departamental, regional o nacional, las comunidades organizadas o sea los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Organizaciones Comunitarias organizadas y reconocidas por la Ley.

Ahora bien la Ley General de Descentralización tiene un vacío en el sentido que crea la institución jurídica de Auditoría Social, como herramienta de fiscalización social y transparencia, pero no se regula de manera específica un procedimiento administrativo a seguir para desarrollar la misma, razón por la

cual el cuerpo legal enunciado, establece que en caso de que algunas de las entidades con derecho a la realización de auditorías sociales considerasen necesario ejecutar alguna Auditoría Social ante cualquier órgano administrativo descentralizado o autónomo, sería menester solicitar a la Contraloría General de Cuentas, la práctica de auditoría gubernamental que corresponda, para que ésta verifique los hechos solicitados y resuelva e informe dentro del plazo de treinta días, contados a partir de que esta concluya.

3.9.- Publicidad y Transparencia de los Actos Administrativos

La publicidad y transparencia de los actos administrativos, se viene a constituir como el más reciente medio de control directo en la administración pública pero sin la necesidad de la existencia de un acto o resolución administrativa previa, que lesione intereses de particulares o administrados.

Este medio de control es una manifestación más de las características de los Estados Democráticos de Derecho, puesto que un Estado de Derecho no se constituye únicamente con la existencia de reglas de juego, sino también sobre la base de quienes participan en dicho juego tengan todas las reglas a su disposición, para que las conozcan, las utilicen y respeten. Razón por la cual con la Ley de Acceso a la Información Pública, se vino a implementar otra nueva forma de control directo, para que a través de la publicidad de todos los actos administrativos, se lograra una plena transparencia en todo el que hacer cotidiano de la administración pública en general. Situación que desde el 2008 ha venido a causar una reforma y revolución procedimental y estructural del Estado Guatemalteco, al permitir a la población conocer ya sea de manera material o electrónica toda la información que día a día, genera, maneja, administra y registra el Estado, bajo la premisa legal de la publicidad de los actos administrativos; derecho Constitucional y garantía de *Habeas Data*, que no podía seguir siendo vulnerado por las mismas autoridades en aras de la indefensión de los ciudadanos. Puesto que para poder alcanzar el bien común

también es menester fomentar en todos los sectores sociales la participación ciudadana, para lograr así la construcción de una ciudadanía informada.

CAPÍTULO IV

PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4.- DEFINICIÓN DE PRINCIPIO

Antes de entrar directamente a realizar un esbozo en relación a la definición o conceptualización de lo que es un principio desde una perspectiva general y desde una perspectiva jurídica atendiendo siempre el complejo estructural normativo. Cabe mencionar que los principios independientemente la materia, rama, disciplina o ciencia que pertenezcan orienten e inspiren, se van a clasificar siempre en generales y especiales.

Ahora bien dentro del ámbito jurídico cabe mencionar, que tanto los principios generales o especiales del derecho en general tienen gran aceptación y aplicación, tomando en cuenta que de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, los principios son catalogados no solo como fuentes del Derecho, sino también como base o directriz jurídica filosófica de interpretación y orientación del mismo.

En otro orden de ideas desde una perspectiva general, según el diccionario de la Real Academia Española, establece que se debe de entender por principio a toda aquella norma no legal, filosófica, supletoria de ella y constituida por la doctrina, que sirve de inspiración, guía u orientación a una ciencia o disciplina determinada.

Aplicada la definición anterior pero específicamente al ámbito de la Ciencia Jurídica, se debe de entender por principio a toda aquella directriz o línea matriz de carácter filosófico jurídico, constituida por la Ley, la Jurisprudencia, la doctrina jurídica y la doctrina legal, que en un momento determinado inspira u orienta todas aquellas circunstancias referentes a una rama jurídica, una Ley o norma legal, los cuales siempre se van a constituir en

la base que se debe tomar en cuenta ante toda situación donde exista, duda, lagunas, vacíos o ambigüedades legales. Puesto que los principios independientemente que sean generales o especiales siempre van a determinar el primer instante o punto de partida de la creación de una cosa determinada, representando así el espíritu y la finalidad de la situación o institución jurídica.

4.1.- El Principio como Fuente de Inspiración y Dirección Legal

Como ya se mencionó anteriormente tanto los principios generales o especiales del derecho en general tienen gran aceptación y aplicación en el ámbito de la Ciencia Jurídica, tomando en cuenta que de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, los principios del derecho, son catalogados no solo como fuentes del mismo, sino también como base o directriz jurídico filosófica de interpretación y orientación legal.

Dicha circunstancia tiene su fundamento en la Jurisprudencia Constitucional, específicamente en la Gaceta No. 18, página No. 99, expediente No. 280-90, sentencia 19-10-90, de la Corte de Constitucionalidad, jurisprudencia de la cual nace de lo que hoy en derecho se conoce como *Principio Hermenéutico*, el cual establece en su texto que las Leyes en todo momento en su texto como en su contexto, deben de interpretarse como un conjunto armónico, en el sentido de que cada rama o norma jurídica debe determinarse en forma acorde con las restantes o complementarias, sin dejar de considerar alguna disposición legal de forma aislada, para lograr así en su oportunidad que las conclusiones obtenidas, sean armónicas en base al marco de legalidad y juridicidad, y no que en un momento determinado coloquen en pugna a las distintas clausulas o apartados del texto y el contexto legal.

Por lo que de manera especial el citado principio hermenéutico se manifiesta directamente en el Decreto Legislativo 2-89, el cual hace referencia a la Ley del Organismo Judicial, el cual en su artículo 10 establece en su acápite, la forma en la que se debe de interpretar la Ley, estableciendo para

el efecto el citado artículo de manera taxativa; que las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras y a su contexto de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, puesto que el conjunto de una Ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero **los pasajes oscuros de la misma, se podrán aclarar atendiendo** al siguiente orden: en primer término atendiendo a la finalidad y espíritu de la misma, en segundo término atendiendo a la historia fidedigna de su institución, en tercer término atendiendo a las disposiciones sobre casos o situaciones análogas y por último atendiendo al modo que más parezca sobre la equidad y **los principios generales del derecho.**

Razón por la cual podemos verificar que, en base al principio hermenéutico y a la forma de interpretación legal, se puede constatar que los principios tanto generales como especiales del derecho en un momento determinado pueden constituirse como Fuente de Inspiración y Dirección Legal del ordenamiento jurídico guatemalteco.

4.2.- Principios que inspiran el Derecho Administrativo

En materia de derecho administrativo, debemos de entender como principios generales del mismo, a todas aquellas directrices o líneas matrices de carácter jurídico filosófico, que en un momento determinado inspiran u orientan a la aplicación práctica y correcta de todo el ordenamiento jurídico administrativo, sea este ordinario general o especial e incluso reglamentario, en relación a la observancia, respeto y aplicación de la legalidad y juridicidad. Tomando en cuenta que el derecho siempre sigue a la realidad tratando en todo momento de adaptarse a la coyuntura social, pero en ausencia de derecho, o en caso de lagunas o ambigüedades legales, siempre debe atenderse el espíritu de la norma, y dicho espíritu solo se logra entender y evidenciar a través de los principios generales o especiales de determinada rama, disciplina o ciencia jurídica. Por lo que entre los principios generales del

Derecho Administrativo podemos mencionar al principio de legalidad, juridicidad y supremacía constitucional.

4.2.1.- Principio de Legalidad

Este principio debe entenderse desde el punto de vista de la ley; puesto que para el principio de legalidad lo fundamental es únicamente la ley; por lo que desde la perspectiva de los funcionarios o empleados públicos, éstos en el ejercicio de su funciones y atribuciones administrativas no pueden actuar si no existe una norma legal previa que especifique o faculte su actuación. Por lo que la norma legal y el funcionario o empleado público, están íntimamente incardinados. Tomando como base la premisa que establece que todo funcionario o empleado público, puede hacer todo lo que la Ley les permite. Puesto que la misma Ley es la que determina el límite de la esfera de sus actuaciones, atribuciones y competencias, para evitar a toda costa el abuso o desviación de poder o autoridad por parte de la administración pública en relación a los administrados.

Tomando en cuenta que en Guatemala toda norma, toda Ley es manifestación del principio de legalidad. Y considerando que en materia de derecho administrativo existirán tantas Leyes generales, especiales o reglamentarias, como órganos administrativos, centralizados, descentralizados, desconcentrados, autónomos, de poder, extra poder y de control existan. Lo cual evidencia la magnitud y complejidad del derecho administrativo y de la importancia de la legalidad en el desarrollo y aplicación del mismo.

4.2.2.- Principio de Juridicidad

Este principio debe de entenderse en un sentido más amplio que el principio de legalidad, puesto que la legalidad únicamente hace referencia a la Ley. *Contrario sensu* a lo que es la juridicidad, puesto que ésta hace referencia a todo lo que atañe a derecho; o sea tiene una concepción mucho más amplia,

tomando en cuenta que el derecho no se limita y circunscribe únicamente a la Ley, sino también toma en cuenta a la Costumbre, la doctrina, la doctrina legal, la Jurisprudencia, la equidad y los principios generales del derecho.

Razón por la cual la Constitución Política de la República de Guatemala, regula en su estructura normativa; al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como el contralor de la juridicidad de todos los actos de la administración pública. Lo cual implica la aplicación de este principio al verificar las decisiones que han tomado los órganos administrativos mediante actos o resoluciones lesivas a intereses de particulares en donde los recursos administrativos como contralores de la legalidad no han sido suficientes, por lo que es necesaria la aplicación del control judicial como contralor de la Juridicidad, para que al conocer el caso concreto haga un estudio de forma y de fondo del acto o resolución denunciada, para al final determinar no solo la legalidad de la misma sino también la respectiva juridicidad. Teniendo en todo momento presente que los principios generales del Derecho Administrativo equivalen tanto como a las normas jurídicas, en la aplicación supletoria, y el valor propio que éstos tengan constituyéndose como una fuente importante de inspiración y orientación del derecho administrativo.

4.2.3.- Principio de Supremacía Constitucional

Este principio aunque pertenezca directamente a la esfera del derecho constitucional, debe ser siempre la base fundamental en la aplicación del derecho administrativo, tomando en cuenta que la Constitución como Ley suprema y fundamental de todo Estado, posee una súper legalidad, circunstancia que la coloca en la cúspide del ordenamiento jurídico guatemalteco, donde los órganos administrativos como titulares de la aplicación del poder público por virtud de soberanía popular, siempre deben sujetar el ejercicio del mismo, a las limitaciones que la Constitución les impone, puesto que las personas que dirigen y exteriorizan la voluntad de dichos órganos,

únicamente son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos en todo momento a la Ley y jamás superiores a ella.

4.3.- Principios generales que inspiran la Administración Pública

Desde el punto de vista de la Administración Pública, debemos de tener presente que la misma por estar creada, estructurada y limitada en cuanto a sus funciones, atribuciones y competencias por la Ley, va a estar incardinada a ciertos principios generales que guiarán y complementarán su actuación, razón por la cual debemos de entender como principios propios de la Administración Pública a todas aquellas directrices o líneas matrices de carácter jurídico filosófico funcional, que en un momento determinado inspiran u orientan el debido y fluido desenvolvimiento de la administración pública en el correcto ejercicio de la función administrativa, lo cual de manera sucinta involucra todo lo relativo a las relaciones entre la administración y los particulares, relación entre los mismos particulares, relaciones inter orgánicas y su control que incluye la protección judicial de los particulares y el derecho de defensa en contra de los actos que le afectan al administrado, razón por la cual cada uno de estos principios se encuentran inmersos y desarrollados en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás Leyes administrativas de observancias general, como lo es el caso de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley del Organismo Legislativo, Ley del Organismo Judicial, Ley de Desarrollo Social, Ley General de Descentralización, Ley de Probidad de Empleados y Funcionarios Públicos, Código Municipal, Ley Marco de los Acuerdos de Paz que serían el fundamento legal que trae a la vida jurídica los principios generales rectores que inspiran la Administración Pública, siendo éstos: el principio de separación y división de poderes, principio de descentralización, principio de desconcentración, principio de jerarquía, principio de probidad, principio de desarrollo nacional, principio de gratuidad, principio de defensa, principio de celeridad, principio de sencillez,

principio de eficacia del trámite, principio de transparencia, principio de publicidad y principio de máxima publicidad.

4.3.1.- Principio de División o Separación de Poderes

Este principio más que todo establece que la división de poderes como características de los Estados democráticos de Derecho, se “viene a constituir como la columna vertebral del esquema político republicano, y es además el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica, fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. En el sentido de que la distribución del poder estatal en diversos órganos no es básicamente la de distribuir funciones entre ellos con el objeto de obtener un desempeño eficiente, sino su fin primordial es desarrollar separada y coordinadamente sus funciones en tres órganos, los cuales se limiten recíprocamente de forma que cada uno de ellos actúe dentro de la esfera de su competencia y constituya un freno o contrapeso a la actividad de los demás órganos. Razón por la cual el principio de división y separación de poderes no implica una absoluta separación, sino una recíproca colaboración y fiscalización entre tales órganos, con el objeto de que los actos producidos por el Estado se enmarquen dentro de una unidad jurídico Constitucional”²⁵.

4.3.2.- Principio de Descentralización

Este principio más que todo se funda en el régimen administrativo del Estado, que como bien sabemos de conformidad con la Constitución Política de Guatemala, se establece que por regla general que la administración pública será descentralizada. Puesto que si no fuese así todo el poder de decisión, los recursos y las fuentes de financiamiento para la formulación y ejecución de las políticas públicas, se concentrarían en el ejecutivo, y ésto de alguna forma impediría la eficiente administración, la equitativa distribución de los fondos

²⁵ Gaceta No. 83, expedientes acumulados, Nos.: 2265, 2443 y 2451-06, sentencia: 28-03-07, de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

públicos, y el ejercicio participativo de los gobiernos locales y de la comunidad organizada.

4.3.3.- Principio de participación ciudadana

Este principio más que todo se funda en la participación y representación de los diversos sectores que constituyen la nación guatemalteca, con el objeto de permitirles involucrarse y desarrollarse de forma activa en la planificación y ejecución democrática del desarrollo de las políticas públicas estatales, para coadyuvar con el Estado a alcanzar el máximo desarrollo social y nacional, por aras del bienestar general de toda la sociedad guatemalteca.

4.3.4.- Principio de Jerarquía

Este principio más que todo establece que para que la administración pública sea funcional en el ejercicio de sus atribuciones y competencias adjudicadas por la Ley, es necesario que exista una estructura orgánica que permita la debida colaboración y subordinación entre los órganos administrativos que integren o que posean una misma competencia administrativa. Razón por la cual, la jerarquía administrativa debe de estar estructurada o conformada por líneas y grados. En donde las líneas van a ser aquellas que van han representar la coordinación e incardinación inter orgánica, pudiendo ser estas tanto horizontales como verticales.

Las líneas horizontales son las que van a enlazar a los órganos administrativos del mismo nivel que no se guardan ningún tipo de subordinación más que coordinación funcional.

Ahora bien las líneas verticales van a ser aquellas que van a enlazar a los diferentes grados de la administración pública en su escala jerárquica, puesto que los grados siempre van ha representar subordinación, dependencia y control interno, generando en todo momento los respectivos poderes de

mando, revisión y revocación, poder disciplinario, poder de avocación y poder de delegación.

4.3.5.- Principio de Probidad

El principio de probidad más que todo se refiere a la prudencia en cuanto a la administración de los recursos de los órganos administrativos y demás entidades descentralizadas y autónomas estatales, en cuanto al ejercicio de la función administrativa con plena transparencia, para así evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado; y al establecimiento de los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de sus cargos; y prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden e inviertan fondos o valores públicos, determinando la responsabilidad en que incurran.

4.3.6.- Principio de Desarrollo Nacional

Este principio nace al seno de la Ley de Desarrollo Social y más que todo establece que toda la función administrativa que desarrolla el Estado a través de sus respectivos órganos administrativos, debe de tener como única finalidad la de alcanzar el máximo y pleno desarrollo social y nacional que propicie y potencialice el bien común. Tomando también como base el artículo del citado cuerpo legal, el cual taxativamente establece que las personas siempre deben de constituir el objetivo fundamental y primordial de todas las acciones relacionadas con el desarrollo integral y sostenible de la sociedad.

4.3.7.- Principio de Gratuidad

El principio de gratuidad, es el que establece que todas las diligencias o incidencias que se realicen ante la administración pública en ocasión o no de la

sustentación de procedimiento administrativo, son totalmente gratuitas, puesto que es obligación de todos los órganos administrativos, sean éstos descentralizados, desconcentrados, centralizados o autónomos, atender las solicitudes, denuncias o inquietudes de los administrados, siempre y cuando se encuentren éstas, dentro de la esfera de sus respectivas competencias y atribuciones legales.

4.3.8.- Principio de Defensa

Este principio más que todo es el que hace referencia a la legítima resistencia de los administrados para la correcta y coherente protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución y demás Leyes Ordinarias. Ante resoluciones o actos administrativos que pongan fin a expedientes administrativos determinados; y que por ende emanen de procedimientos administrativos previos, que tiendan a ser lesivos a los derechos e intereses de los administrados. Situación que en todo momento permite el uso debido de los recursos administrativos, como medio de defensa ante tales situaciones.

4.3.9.- Principio de Celeridad

El principio de celeridad más que todo establece que la administración pública, ante una solicitud, o denuncia de parte de los administrados, debe de actuar de oficio con plena diligencia y prontitud, en cuanto a la tramitación y resolución de la misma; no esperando hasta que se cumplan los plazos máximos legales, siempre y cuando se tenga la facultad de resolver rápidamente, tomando como base la premisa de que una pronta resolución, refleja la ética y la eficiencia de las instituciones públicas.

4.3.10.- Principio de Sencillez

Este principio más que todo refleja el poco formalismo de todos los actos que se promuevan, tramiten y gestionen ante los órganos administrativos, puesto que ninguna Ley administrativa, dentro de la substanciación de un procedimiento administrativo, requiere como *iura conditio* el auxilio de Abogado. Salvo los casos en que el mismo administrado por su desconocimiento jurídico, requiera el auxilio, dirección y procuración de un Jurista, para la promoción, tramitación y dilucidación del procedimiento administrativo.

4.3.11.- Principio de Eficacia del Trámite

Este principio más que todo es el que determina la capacidad resolutive del órgano administrativo, a efecto de resolver con plena capacidad, eficiencia, celeridad y solvencia jurídica con lo solicitado, sin olvidar la esencia y poco formalismo que reviste al derecho administrativo, teniendo siempre presente la legalidad, la juridicidad y la supremacía constitucional.

4.3.12.- Principio de Transparencia

Este principio surge con el compromiso adquirido por los representantes del Estado de Guatemala al suscribir los acuerdos de paz en el año de 1996, puesto que en ese tiempo Guatemala con el objeto de lograr el fortalecimiento del poder socioeconómico, la situación agraria, el poder civil, y el ejército en una sociedad democrática, se comprometió a modernizar y fortalecer la administración pública en procuración de que la gestión pública alcanzara un manejo transparente y absolutamente honrado, en el uso de los recursos públicos y todo interés hacendario, como condición para lograr que las funciones de la administración pública tengan la capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado por la Constitución Política de la República

de Guatemala, que es garantizar a los habitantes la plena realización del bien común.

Por lo que la transparencia como principio se le debe de entender como toda aquella disposición o acción legal, que permita verificar por parte de otros órganos estatales o incluso de la comunidad organizada, el correcto uso del patrimonio público, económico o financiero de un órgano administrativo, en el legítimo ejercicio de su función administrativa. También dicho principio establece a las autoridades estatales informar sobre sus actos incluso cuando nadie se los haya requerido.

4.4.13.- Principio de Publicidad y Máxima Publicidad

Antes de entrar a conceptualizar al principio de publicidad y máxima publicidad, se considera pertinente esbozar lo siguiente: como bien sabemos el principio de publicidad tiene su punto de partida en primer término en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y parcial y someramente en otras Leyes ordinarias, pero hasta el año 2008 en nuestra realidad jurídica, se pudo evidenciar “como el derecho sin ser un ser viviente, puede evolucionar, obviamente siempre enfocado desde una perspectiva jurídica, como lo es el caso del principio Constitucional de publicidad, que es el que consagra la publicidad de los actos administrativos, así como también la publicidad de los datos personales que consten en archivos o registros públicos; puesto que dicho principio contemporáneamente dejó de ser el principio de publicidad que todos conocíamos y del cual recién estábamos haciendo referencia, para convertirse en el principio de máxima publicidad, el cual hoy por hoy, es ampliamente desarrollado por la legislación especial relativa al acceso a la información pública, la cual lo define como: aquel principio especial de los datos y la información, que en base a la observancia de la transparencia, sencillez, celeridad y gratuidad administrativa, permite que toda información en poder o posesión de cualquier sujeto obligado, sea pública, la cual no podrá ser

reservada o limitada, sino únicamente por disposiciones Constitucionales o legales”²⁶.

²⁶ LÓPEZ ZILLER. José Alberto. “El Comercio y la Contratación Electrónica en el Marco Jurídico Guatemalteco”. Primera edición. Editorial Camaja. 2012. Página 54 y 55.

CAPÍTULO V

EL HABEAS DATA COMO GARANTÍA DE LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS DATOS Y LA INFGORMACIÓN

5.- HABEAS DATA GENERALIDADES

El Habeas Data independientemente el país o región del mundo que la regule en su respectivo ordenamiento jurídico, siempre será considerada como una garantía tutelar de los datos y la información, aunque otros países como lo es el caso de Argentina, España o Uruguay en un momento determinado la hayan llegado a considerar como un recurso legal que permite acceder a los bancos de información o registros de datos, para su correcta protección, acceso, exhibición y manipulación.

Desde una perspectiva etimológica, podemos decir que el Habeas Data como garantía tutelar de los datos y la información personal y pública, deviene de los aforismos latinos *habere*, que significa tener, exponer, exhibir y *data* que significa datos, información o documentos. Aforismos que mediante la sintaxis lógica conforman lo que hoy en día las distintas legislaciones mundiales conocen como Habeas Data.

El Habeas Data, como garantía Constitucional y legal de los datos y la información contemporáneamente ya es ampliamente desarrollada por diversos Estados primeramente de manera sucinta por medio de sus respectivas Constituciones, como por ejemplo el caso de los países de "Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Panamá, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y específica y detalladamente a través de legislaciones específicas, como lo es el caso de: Argentina por medio de los siguientes cuerpos normativos: Ley 1845, Ley 7447, Ley 3246, Ley 4360, Ley 4244; Bolivia a través de la Ley 2361; Chile por medio de la Ley 19628; España a través de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal; Nicaragua, Panamá y Paraguay a través de su la Ley de

Acceso a la Información; Perú por medio de la Leyes 26470, 27806, 27444; Uruguay por medio de las Leyes 18331 y 18381, Nicaragua a través de la Ley de protección de datos personales; Estados Unidos dentro de su división territorial cuenta con varias leyes que rigen el acceso a documentos públicos del estado y entidades locales de recaudación de impuestos, además de la Ley por la libertad de la información, cuerpo legal que regula el manejo del registro de documentos en posesión del gobierno federal; y por último Guatemala por medio del Decreto Legislativo 57-2008 que hace referencia a la Ley de Acceso a la Información Pública”²⁷.

En Guatemala el régimen de Habeas Data se empezó a gestar desde la Constitución Política de la República de 1945 mediante su artículo 53 donde de manera taxativa se regulaba que todos los actos administrativos son públicos, y los ciudadanos tienen el derecho de pedir que se les informe de ellos en cualquier tiempo, salvo cuando se trate de asuntos diplomáticos u operaciones militares. Situación que posteriormente con la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1956 prevaleció, pero regulándose para el efecto en otro artículo distinto siendo este el artículo 71, fundamento legal que cambió con la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965, donde se reguló de manera sucinta dicha institución, pero en el artículo 75 del citado cuerpo legal; para culminar con la Constitución Política de la República de Guatemala vigente que es la de 1985, donde podemos encontrar dicha garantía regulada en los artículos 30 y 31 de la citada Ley suprema y fundamental, donde en los epígrafes respectivos se hace referencia a la publicidad de los actos administrativos y al acceso de archivos y registros estatales. Todos estos fundamentos legales enunciados se convierten en la base de lo que hoy en día se conoce como Habeas Data, ya que si bien es cierto han existido resabios legales indirectos de esta institución jurídica *sui generis* especializada, como garantía tutelar de los datos y la información, pero no fue si no gracias a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 57-2008 en donde ya de manera

²⁷ http://es.wikipedia.org/wiki/Habeas_data

específica se crea la Institución Jurídica de Habeas Data, como garantía tutelar de los datos y la información pública y personal, que empezó a gestarse en Guatemala desde el año de 1945, pero que se convirtió en concepto jurídico fundamental específico hasta el año 2008.

La Ley de Acceso a la Información Pública mediante su artículo 9 numeral 4to. Establece que el Habeas Data no es más que la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos, y la finalidad a que se dedica esta información, así como su protección, corrección, rectificación o actualización.

Razón por la cual las doctrinas jurídicas modernas conciben al Habeas Data como “una garantía tutelar para la correcta y efectiva protección y seguridad jurídica de los datos y la información personal y pública. Tomando en cuenta que el régimen legal de Habeas Data esta íntimamente incardinado al principio constitucional de seguridad jurídica consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual para asegurar y garantizar una tutela efectiva de los datos y la información generó a través del proceso legislativo, legislaciones especiales con instituciones jurídicas que tienen como finalidad única la de salvaguardar ya sea de manera general o específica los datos y la información, sea esta personal o pública, como lo es el caso del Habeas Data.

El Habeas Data es la institución jurídica tutelar de los datos y la información pública y personal, que contemporáneamente surge al texto y al contexto de los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala, institución jurídica que a través del proceso de evolución y transformación de la norma, se fue desarrollando hasta llegar a conformar en el año 2008 una legislación especial que es el Decreto Legislativo 57-2008, que es el que hace referencia a la Ley de Acceso a la Información Pública. Dicha garantía tutelar de los datos y la información personal y pública, para evitar

cualquier tipo de óbices en el desarrollo de su aplicación, es complementada por un principio que es un ejemplo claro de cómo el derecho sin ser un ser viviente puede evolucionar, obviamente siempre enfocado desde una perspectiva jurídica, como lo es el caso del principio de publicidad, que como bien sabemos también surge al seno de los artículos 30 y 31 de nuestra carta magna, el cual consagra la publicidad de los expedientes y actos administrativos, así como también la publicidad de los datos personales que consten en archivos o registros públicos, dicho principio hoy en día dejó de ser el principio de publicidad que todos conocíamos, para pasar a ser el principio de máxima publicidad, el cual contemporáneamente es ampliamente desarrollado por la Legislación especial de Habeas Data, la cual lo define como: aquel principio que con observancia siempre en la transparencia, sencillez, celeridad y gratuidad, permite que toda información en posesión de cualquier sujeto obligado sea pública, la cual no podrá ser ni reservada, ni limitada, si no únicamente por disposiciones legales o constitucionales”²⁸.

5.1.- Conceptos Jurídicos Fundamentales en Materia de Información Pública

Previamente a desarrollar todo lo relativo a los conceptos jurídicos fundamentales en materia de información pública, es necesario explicar pero de una manera general, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, lo que son en primer término los conceptos jurídicos fundamentales.

Según la teoría de la *causalidad jurídica* toda institución perteneciente a la ciencia jurídica va ha estar estructurada por supuestos jurídicos incardinados a relaciones necesarias conformadas por deberes jurídicos o derechos subjetivos optativos, también vinculadas con relaciones contingentes que determinan el cumplimiento o no de los determinados supuestos jurídicos, situación que al final generará las llamadas consecuencias jurídicas o de

²⁸ LÓPEZ ZILLER. José Alberto. “El Comercio y la Contratación Electrónica en el Marco Jurídico Guatemalteco”. Primera edición. Editorial Camaja. 2012. Página 53 y 55.

derecho. Que en su conjunto conforman la citada teoría de la *causalidad jurídica*, la cual más que todo establece que no hay consecuencia jurídica, sin supuesto de hecho, es decir toda consecuencia jurídica se haya condicionada por determinados supuestos.

Por lo tanto el derecho para poder ser entendido, aplicado y considerado como tal va ha estar conformado por una inmensa gama de instituciones jurídicas o supuestos de hecho, que para poder determinar su aplicación individual y alcance, es necesario que debamos de entender los conceptos jurídicos fundamentales que cada una de ellas representa.

La teoría general del derecho establece que los conceptos jurídicos fundamentales no son más que nociones irreductibles sin las cuales sería imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera.

Por lo tanto los conceptos jurídicos fundamentales en materia de acceso a la información pública, van a ser toda aquella inmensa gama de supuestos jurídicos o instituciones jurídicas creadas y desarrolladas en virtud del Decreto Legislativo 57-2008 que hace referencia a la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde podemos citar los siguientes: los datos, la información, el Habeas Data, los sujeto activos, los sujeto pasivos, las unidades de información, obligaciones de transparencia y el recurso de revisión.

5.2.- Datos

“Al hablar de datos en un sentido lato, debemos de entender estos, como todo aquel conjunto de caracteres que a través de la sintaxis, unen palabras para formar oraciones y expresar conceptos, los cuales generan información, la cual siempre va ha estar contenida ya sea en un soporte material, digital, magnético y óptico. Los datos juegan un papel muy importante en el desarrollo e interacción de una sociedad ya que ellos son el antecedente necesario para poder llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las

consecuencias legítimas de un hecho, los cuales tienen como finalidad única, la de generar información.

Desde una perspectiva jurídica especial, nuestra legislación vuelve a los datos una institución jurídica concreta, pero dentro del ámbito de la materia de acceso a la información pública, para lo cual dicha legislación los tiende a clasificar, atendiendo específicamente a los criterios de titularidad y uso, protección y resguardo; y publicidad por cuestiones de transparencia, auditoría social, estadística y estudios demográficos.

5.2.1.- Tipo de datos

Razón por la cual, cuando desde un punto de vista jurídico especial nos referimos a tipos de datos, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública, prácticamente nos estamos refiriendo los datos personales, los datos sensibles y los datos impersonales, pero como sub instituciones jurídicas derivadas de los datos, como institución jurídica especial en materia de acceso a la información pública.

5.2.1.1.- Datos Personales

Los datos personales, como sub instituciones jurídicas derivadas de los datos, van a ser aquellos relativos a cualquier información concerniente a las personas naturales identificadas o inidentificables, como lo es el caso de las famosas generales de Ley, que como bien sabemos vienen a convalidar lo que en materia de acceso a la información pública se le conoce como datos personales, los cuales van a estar conformados por el nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, la residencia, la vecindad y el domicilio, datos que tienen gran aplicación práctica en todos los ámbitos del que hacer cotidiano y por ende del derecho en general; tanto en sus aspectos sustantivos o adjetivos.

5.2.1.2.- Datos Sensibles

Los datos sensibles como sub instituciones jurídicas derivadas de los datos, van a ser todos aquellos datos, que tienden a hacer referencia o alusión a las características físicas, morales, étnicas, ideológicas, opiniones políticas, creencias religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral, hábitos personales, origen racial, situación familiar y cualquier otra situación personal de naturaleza íntima. Reconocidos y protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y demás Leyes ordinarias, a través de derecho constitucional a la intimidad.

5.2.1.3.- Datos Impersonales

Los datos impersonales, como sub instituciones jurídicas derivadas de los datos, van a ser aquellos que tienen como característica principal que no son identificables, puesto que no identifican a nadie en particular, ya que solo son recopilados o proporcionados para situaciones de naturaleza demográfica, o sea para mantener estadísticas, por lo tanto únicamente este tipo de datos van a ser la excepción a la regla de protección jurídica que proporciona el régimen de Habeas Data en relación a la correcta, debida y eficiente, recopilación, manejo, administración, guarda, custodia y protección jurídica de los datos y la información.

5.3.- Información

Como bien sabemos desde una perspectiva general, la información es el resultado de los datos, la cual va a ser el medio idóneo que nos lleva al aprendizaje, a la comunicación y al entendimiento entre seres humanos, no importando la forma en la que se genere, transmita o reciba, sus efectos siempre van a ser los mismos.

Desde un punto de vista jurídico especial nuestra legislación concibe a la información como una institución jurídica concreta pero dentro del ámbito de la materia de acceso a la información pública, con fundamento en el Decreto Legislativo 57-2008; para lo cual dicha legislación tiende a estructurarla y clasificarla de manera sistemática, atendiendo específicamente a los criterios de máxima publicidad por obligaciones de transparencia, participación ciudadana y auditoría social; así como también atendiendo al criterio de acceso restringido por confidencialidad total ya sea por disposición legal o que sea entregada o proporcionada bajo garantía de confidencialidad; y por último atendiendo al criterio temporal de restricción legal, de conformidad con el procedimiento legal especial establecido para el efecto.

5.3.1.- Tipos de Información

Por lo tanto la tipología legal de la información, genera una serie de sub instituciones jurídicas, en materia de acceso a la información, cada una de ellas con su respectiva función, aplicación y características *sui generis*, para su concreta individualización e implementación, siendo éstas: la información pública, la información pública de oficio, la información confidencial y la información reservada, todas ellas en su conjunto constituyen la regla y la excepción a la regla al régimen especial de Habeas Data.

5.3.1.1.- Información Pública

Desde un punto de vista legal, la información pública va a ser toda aquella información que se encuentre en poder de los sujetos obligados, entiéndase estos como cualquier órgano administrativo, sea centralizado, descentralizado, desconcentrado o autónomo, que maneje, administre, guarde o custodie información de particulares por medio de expedientes, reportes, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, archivos, fichas, registros, sin importar su fuente y fecha de elaboración,

puesto que dicha información no solo puede estar contenida en soportes materiales, sino también en cualquier medio ya sea sonoro, visual, electrónico, informático, u holográfico, siempre que la misma Ley o sujeto obligado en ningún momento la haya catalogado como confidencial o temporalmente reservada, de manera meramente ilustrativa podemos enunciar ciertos órganos administrativos que manejan a diario este tipo de información, siendo éstos: el RENAP, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro de Precalificados, Registro de Personas Jurídicas, Registro Tributario Unificado, Instituto Nacional de Estadística, Hospitales Públicos, Privados y Centros de Salud, Municipalidades, Ministerio Público, Organismo Judicial, Ministerios de Estado, Tribunal Supremo Electoral, Centros Educativos y Sistema Financiero, entre otros.

Este tipo de información es la que empezó a instituir y crear el régimen de Habeas data, a nivel constitucional, pero de forma somera, puesto que la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 31 regula lo relativo a el acceso a los archivos y registros estatales, estableciendo de manera taxativa que: toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esa información, así como a su corrección, rectificación y actualización.

Posteriormente en el año dos mil ocho con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, dicho régimen de Habeas Data fue perfeccionado, puesto que ya se creó y desarrolló en virtud de esta Ley especial, la figura e institución jurídica de Habeas data, que hoy por hoy es conocida como la garantía tutelar de la exhibición de los datos y la información. Por lo tanto la información pública, contemporáneamente de conformidad con la Legislación especial que la regula y desarrolla, tiende a garantizarle a toda persona individual, el derecho a conocer, proteger, actualizar y rectificar, los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales.

5.3.1.2.- Información Pública de Oficio

La información pública de oficio, como sub institución jurídica de la información, tiene otro enfoque distinto en comparación con la información pública propiamente dicha, puesto que este tipo de información más que todo se enfoca en primer término a garantizar por medio del Habeas Data que toda persona pueda tener acceso a los actos de la administración pública, actos que por imperativo legal están obligados a proporcionar todos los órganos administrativos del estado, como sujetos obligados en base a sus respectivas obligaciones de transparencia establecidas por la Ley de Acceso a la Información, estableciendo como obligatorio para tal efecto el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública, favoreciendo así de alguna manera la rendición de cuentas del Estado hacia los gobernados, de manera que éstos ya sea de manera directa o indirecta puedan auditar el desempeño de la administración pública, perfeccionándose así el régimen de Habeas Data por garantizar la transparencia de la administración pública y el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública.

Por lo que el resabio constitucional de la información pública de oficio lo encontramos regulado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual hace referencia a la publicidad de los actos administrativos, en donde taxativamente se establece que todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo, informes, copias, reducciones, y certificaciones que soliciten, así como también la exhibición de expedientes, que deseen consultar, con la única excepción de la información que por su naturaleza esté expresamente catalogada como confidencial o reservada.

Contemporáneamente con la existencia de una Legislación propia y especial en materia de información pública, este tipo de información, se deriva de la imposición legal de las obligaciones de transparencia las cuales se

encuentran ampliamente desarrolladas en los veintinueve numerales que integran el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información, las cuales establecen que los sujetos obligados titulares de la información, deben mantener esta exhibida, actualizada y disponible en todo momento, de acuerdo con sus funciones, y a disposición de cualquier interesado, la cual podrá ser consultada ya sea de manera directa o **a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado**, razón por la cual este tipo de información es la que realmente permite la participación ciudadana y la auditoría social, fomentando y reafirmando el régimen de publicidad y transparencia gubernamental.

5.3.1.3.- Información Confidencial

La información confidencial va a ser toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato Constitucional o disposición expresa de una Ley, tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad. Como se puede observar este tipo de información tiene dos supuestos legales, el primero hace referencia a disposición de confidencialidad expresa por una Ley y la otra cuando las personas sean estas naturales o fictas la entreguen a sujetos obligados bajo garantía de confidencialidad.

En relación al primer supuesto que es el que hace referencia a la confidencialidad por disposición legal, más que todo es el que se refiere a todos aquellos casos en que las Leyes de manera general establezcan entre su normativa que determinada información debe tener carácter de confidencial y por ende ser de acceso restringido para cualquier persona, constituyéndose entonces, como una excepción al régimen de Habeas Data. Como por ejemplo la información considerada como confidencial por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

De igual forma el artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información, establece todos los supuestos específicos relativos a información confidencial siendo éstos; la información relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional, debiéndose entender la seguridad nacional como: todos aquellos asuntos que sean parte de la política del Estado para preservar la integridad física de la Nación y de su territorio a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado, de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes, y aquellos que se refieren a la sobrevivencia del Estado-Nación, frente a otros Estados. La expresamente definida como confidencial, la información calificada como secreto profesional, los datos sensibles o personales, que sólo podrán ser conocidos por el titular del derecho.

En relación al segundo supuesto de la información confidencial de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencial. Podemos mencionar los siguientes: correspondencia, documentos y libros personales, las comunicaciones electrónicas, telefónicas, radiofónicas, cablegráficas, informáticas, y otras derivadas de la tecnología moderna.

Por lo tanto este tipo de información jamás podrá ser pública, razón por la cual se le considera como el límite del derecho a acceso a la información y como excepción al régimen de Habeas Data, razón por la cual podemos inferir que el derecho a la información no es un derecho absoluto, puesto que tiene limitaciones, derivadas del tipo de información confidencial. La Convención Americana de Derechos Humanos advierte que la libertad de pensamiento y expresión no debe de atentar contra los derechos o la reputación de otros, ni poner en peligro la seguridad nacional, el orden o la moral pública, razón por la cual la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la información confidencial, reconoce la necesidad del Estado de mantener la discrecionalidad, en asuntos determinantes para que las autoridades adopten medidas o tomen decisiones beneficiosas para el país; razón por la cual aunque debe prevalecer

el principio de máxima publicidad y la garantía de Habeas Data, no todo puede tener carácter público.

5.3.1.4.- Información Reservada

La información reservada va a ser toda aquella información que siendo pública, su acceso se va a encontrar parcialmente o temporalmente restringido ya sea por disposición expresa de una Ley o cuando haya sido considerada como tal, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley.

De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, se va a considerar como información reservada a toda aquella información relacionada con: asuntos militares y diplomáticos calificados como de seguridad nacional, asuntos de propiedad intelectual y derechos de autor y derechos conexos, asuntos relacionados cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daños a las actividades de investigación, prevención o persecución de delitos, así como también la relacionada con los procesos de inteligencia del Estado o a la importación de justicia, los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoría, la información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección de parte de la Superintendencia de Bancos, de igual forma la información catalogada como reservada por la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y también los análisis proporcionados al Presidente de la República, orientados a proveer la defensa y la seguridad de la nación, así como la conservación del Orden Público. El derecho a acceder a la información pública que se hubiese basado en análisis podrá ejercerse ante los órganos o entidades que la tengan en su poder.

Por lo tanto la información reservada tiene carácter público, sin embargo, ha sido restringida por un determinado período de tiempo, puesto que en

determinados supuestos, divulgarla desestabilizaría la economía o deterioraría las condiciones de seguridad del país. Razón por la cual el artículo 25 y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece el mecanismo o procedimiento legal para poder lograr y asegurar la correcta reserva de la información pública.

Solo en calidad de análisis y observación cabe resaltar que si un sujeto obligado traslada a otro información reservada, esta no perderá su calidad y seguirá siendo restringida para el público.

En cuanto al período de tiempo en que la información pública, puede ser considerada como reservada, la Ley de Acceso a la Información establece que no podrá ser mayor de siete años, salvo casos en que los sujetos obligados realicen su respectiva declaración de ampliación del plazo de reserva, la cual no podrá exceder del tiempo total de doce años.

Se debe de tener siempre presente que la información pública que haya sido clasificada como reservada, puede dejar de tener tal clasificación siempre y cuando se cumplan los presupuestos de haberse cumplido el plazo de reserva, dejen de existir las razones que fundamentaron su clasificación, por resolución de organo jurisdiccional o autoridad judicial competente.

5.4.- Sujeto Activo en Materia de Información Pública

Entre otras de las instituciones jurídicas fundamentales que integran el régimen de acceso a la información pública, tenemos al sujeto activo, denominación o calidad que se le va a dar a toda aquella persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiese solicitado conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.

5.5.- Sujeto Pasivo en Materia de Información Pública

Otra de las instituciones jurídicas fundamentales que integran el régimen de acceso a la información pública, sería al sujeto pasivo, denominación o calidad que se le va a dar a los sujetos obligados en materia de información pública, siendo éstos todos los distintos órganos administrativos, de poder, extra poder, control político y control jurídico administrativo, que integran la estructura de la administración pública, los cuales por su naturaleza siempre van a manejar, administrar, recursos, bienes, actos e información pública, situación que les genera la obligación de proporcionar a cualquier sujeto activo la información pública que se les solicite y también la obligación de cumplir fielmente con la exhibición, disposición y actualización de la información a través de los respectivos portales web que posean en virtud del estricto cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley.

5.6.- Unidades de Información Pública

Las Unidades de Información Pública como otra de las tantas instituciones que conforman el régimen guatemalteco de acceso a la información pública, las podemos definir como aquellas instituciones inter orgánicas, jurídico administrativas en materia de acceso a la información pública, creadas por la Ley e implementadas para su funcionamiento mediante acuerdo administrativo proferido por el titular del órgano administrativo, en el cual se legitime la existencia administrativa de su funcionamiento; y la designación, titularidad y legitimidad del funcionario o empleado que la representará y administrará, todo ello para cumplir con las funciones, competencias y atribuciones que le corresponden de conformidad con la Ley, siendo éstas: las de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, notificar las negativas de acceso a la misma, expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a su cargo, velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones de

transparencia, y el efectivo respecto y cumplimiento a la garantía de Habeas Data, y a los principios de máxima publicidad, transparencia, actualización y disposición de la información pública de oficio ya sea de forma material o digital a través de portales electrónicos.

5.7.- Obligaciones de Transparencia

Las obligaciones de transparencia, también conforman la amplia gama de instituciones jurídicas en materia de acceso a la información pública, pero de oficio, convirtiéndose para el efecto en una de las instituciones jurídicas más importantes para lograr la consecución y efectiva aplicación del régimen de Habeas Data, Publicidad, Máxima Publicidad y transparencia en el legítimo ejercicio de la participación ciudadana y auditoría social en relación a la exhibición, disposición y actualización constante de los datos e información por los sujetos obligados ya sea de manera directa o a través de sus respectivos portales web, ya que éstas por imperativo legal son impuestas a todos los órganos administrativos de poder que conforman la administración pública, así como también a los órganos extra poder, control político y control jurídico administrativo.

Desde un enfoque o perspectiva legal las obligaciones de transparencia van ha estar conformadas o estructuradas por veintinueve numerales que integran el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde cada numeral representará cada una de las obligaciones que el sujeto obligado tiene que cumplir de manera taxativa en relación de tener exhibida, actualizada o disponible la información pública de oficio de su competencia.

De manera meramente ilustrativa más no descriptiva indicaré cuales son cada uno de los veintinueve numerales que crean y establece el régimen de transparencia en materia de información pública de oficio, siendo éstos los relativos a:

- 1.- La estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo.
- 2.- Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las dependencias que la conforman.
3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos.
6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos.
7. La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.
8. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad.

9. La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones.

10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.

11. La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.

12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos.

13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones.

14. Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor.

15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos.

16. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado.

17. Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas.

18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente.

19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos.

20. Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo.

21. Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

23. Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión correspondientes.

24. En caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional, que manejen o administren fondos públicos deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.

25. En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o administren fondos públicos deben hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.

26. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre; el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo.

27. El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley.

28. Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos.

29. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.

5.8.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Habeas Data

Contemporáneamente la legislación especial de los datos y la información, permite que a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como lo es el caso de computadoras y Smartphone, con conexión a internet, podamos hacer un uso directo, constante y eficiente del Habeas Data, como garantía tutelar para la correcta y efectiva protección y seguridad jurídica de los datos y la información personal y pública, puesto que de manera taxativa el artículo 10 del Decreto 57-2008 impone las obligaciones de transparencia a todos los órganos administrativos, las cuales consisten en la debida exhibición, actualización y disposición de toda la información pública en formato electrónico, propia del normal desenvolvimiento de los órganos administrativos, dentro del respectivo marco de sus atribuciones y competencias legales, a través de portales web, para el solo efecto que la población en ejercicio de su derecho a la participación ciudadana y auditoria social, pueda verificar en cualquier momento la información pública de todo el que hacer de un órgano administrativo determinado o bien solicitar por medio de una bandeja de correo electrónico cualquier tipo de información a la que pudiera tener interés, todo ello con fundamento en los artículos 10 y 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

5.8.1.- Principio de Taxatividad Legal

El principio de taxatividad legal es todo aquel principio que nace al seno de la teoría general del derecho, el cual establece, reafirma y ampara que todos y cada uno de los imperativos legales que integran o conforman cada uno de los respectivos supuestos de hecho y derecho propios de un artículo de manera específica o una Ley de manera general, sean de observancia obligatoria y que no permitan discusión para condicionar el cumplimiento de su ejecución.

Razón por la cual la mayoría de normas jurídicas se caracterizan por ser taxativas puesto que desde el momento que una Ley entra en vigencia es de observancia general y obligatoria, no permitiéndose o admitiéndose en ningún momento discusión sobre su cumplimiento o aplicación, puesto que de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, contra la observancia de la Ley ninguna persona puede alegar, ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.

Motivo por el cual todos los órganos administrativos que integran o conforman la administración pública, por imperativo legal deben de cumplir con mantener, exhibida, actualizada y disponible toda la información que indique la legislación especial en materia de acceso a la información pública, en el legítimo ejercicio y fiel cumplimiento de las obligaciones de transparencia y aplicación de la garantía de Habeas Data y a los principios de máxima publicidad, transparencia, actualización y disposición de información pública de oficio en los respectivos portales electrónicos que habiliten para el efecto.

5.8.2.- Actualización de Información

El principio de actualización de la información pública, es otro de los principios especiales que nace en el texto y contexto de la normativa especial en materia de acceso a la información pública, el cual establece o impone la obligación a los sujetos obligados de actualizar la información pertinente y propia del normal ejercicio de sus atribuciones y competencias legales, en un

plazo no mayor de treinta días, después de que por el constante y normal desarrollo o desenvolvimiento de sus actividades administrativas se generen cambios, como contrataciones, ascensos, despidos compras, licitaciones, cotizaciones, contratos abiertos, fideicomisos, acuerdos, Etc. Entre otros. Fundamento legal artículo 7 del Decreto 57-2008.

5.8.3.- Disponibilidad de Información

El principio de disponibilidad de la información pública, es otro de los principios especiales que nace en el texto y contexto de la normativa especial en materia de acceso a la información pública, el cual establece o impone la obligación a los sujetos obligados de mantener disponible en todo momento la información pública de oficio, en el legítimo y fiel cumplimiento de las respectivas obligaciones de transparencia, para que así en cualquier momento los sujetos activos o administrados en el legítimo ejercicio de su derecho a la participación ciudadana y auditoria social puedan consultar dicha información ya sea de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado, en aplicación del debido uso o utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, fortaleciendo así en todo momento el régimen de publicidad y transparencia de los actos de la administración pública. Fundamento legal artículo 10 del Decreto Legislativo 57-2008.

CAPÍTULO VI
INSTITUCIÓN PÚBLICA ENCARGADA DE TUTELAR Y VELAR
POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE HABAS DATA, POR
LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

6.- UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

Las unidades de información pública, son órganos administrativos de reciente creación, puesto que se crearon mediante la entrada en vigencia del Decreto 57-2008 que hace referencia la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo tanto desde una perspectiva legal específica, podemos esbozar que la Unidades de Información Pública, se vienen a convertir en una de las tantas instituciones o figuras jurídicas fundamentales, que integran, conforman y complementan a la legislación especial en materia de información pública.

De manera taxativa el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece la obligación hacia los órganos administrativos, sean estos centralizados, descentralizados, concentrados o autónomos, de crear e implementar en su estructura orgánica a las respectivas Unidades de Información Pública, las cuales serán las que tendrán como función principal de conformidad con la Ley; ser las instituciones jurídico administrativas en materia de información pública, de tutelar y velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el respeto y aplicación efectiva de la garantía de Habeas Data y el principio de disposición y actualización de información pública de oficio, cuando esta sea solicitada de manera directa o material o verificada por los distintos portales Web de los órganos administrativos que conforman la organización estatal.

A las unidades de información pública las podemos definir como: las instituciones inter orgánicas jurídico administrativas en materia de acceso a la información pública, creadas por la Ley e implementadas para su

funcionamiento mediante acuerdo administrativo proferido por el titular del órgano administrativo, en el cual se legitime la existencia administrativa de su funcionamiento; y la designación, titularidad y legitimidad del funcionario o empleado que la representará y administrará, todo ello para cumplir con las funciones, competencias y atribuciones que le corresponden de conformidad con la Ley, siendo estas: las de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, notificar las negativas de acceso a la misma, expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a su cargo, velar por el estricto cumplimiento e las obligaciones de transparencia, y el efectivo respecto y cumplimiento a la garantía de Habeas Data, y a los principios de máxima publicidad, transparencia, actualización y disposición de la información pública de oficio ya sea de forma material o digital a través de portales electrónicos.

6.1.- Naturaleza Jurídica

En relación a la naturaleza jurídica de las Unidades de Información Pública, podemos establecer que estas, como instituciones inter orgánicas jurídico administrativas, pertenecen a la rama del Derecho Público, ya que son reguladas de manera indirecta y sucinta por el Derecho Constitucional en su inicio y en su creación, estructuración y funcionamiento por el Derecho Administrativo a través de legislaciones administrativas especiales, que hoy por hoy permiten, fundamentan y perfeccionan su existencia.

6.2.- Objetivos

Desde una perspectiva general de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se debe de entender por objetivo a toda, aquella, visión, finalidad, anhelo o pretensión que se quiere o anhela alcanzar, ya sea a corto, mediano o largo plazo, para obtener resultados concretos, que son los que van a determinar la viabilidad o no viabilidad de lo planificado,

desarrollado y ejecutado, por lo que en relación a los objetivos de las Unidades de Información Pública, podemos decir que existirán dos tipos, siendo estos los generales y los específicos.

6.2.1.- Generales

Como objetivo general podemos mencionar el de velar por el efectivo y correcto cumplimiento de lo regulado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Ley de Acceso a la Información Pública, al verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones de transparencia impuestas por la Ley a los sujetos obligados y también a garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública, en posesión de las autoridades y sujetos obligados por virtud la Ley de Acceso a la Información Pública.

6.2.2.- Específicos

Ahora bien, como objetivos específicos podemos enunciar los siguientes:

- Garantizar la publicidad y transparencia de la Administración Pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la Información.
- Establecer como obligatorio el principio de la máxima publicidad y transparencia en la Administración Pública y para los sujetos obligados en la presente ley.
- Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en la que se restrinja el acceso a la Información Pública, ante circunstancias de información reservada o confidencial.
- Favorecer el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que

puedan auditar el desempeño de la Administración Pública, ya sea de manera directa o a través de los portales electrónicos establecidos para el efecto.

- Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la Administración Pública
- Verificar de manera puntal de la respectiva exhibición, disposición y actualización de la información pública de oficio, por parte del órgano administrativo que represente.

6.3.- Funciones

Como bien sabemos en materia de Derecho Administrativo y Administración Pública, todas las funciones, atribuciones y competencias que en un momento determinado un órgano administrativo, sea este, centralizado, desconcentrado, descentralizado o autónomo puede ostentar, por imperativo legal con la debida observancia en el principio de legalidad, obligatoriamente debe estar, establecido directamente en la Ley o reglamento que lo regule, razón por la cual en base a las funciones de las Unidades de Información, podemos extraer de la Ley de Acceso a la Información Pública las siguientes:

- Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones que promuevan la excelencia y calidad en el servicio de acceso a la información pública que se brinde al público en general.
- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública en el plazo establecido por la Ley.
- Auxiliar al sujeto activo en la elaboración de su solicitud y orientarlo en los trámites respectivos.

- Recabar la información pública que le sea requerida de conformidad con la Ley y los procedimientos internos establecidos en el Manual de Funciones y Procedimientos de la Unidad de Información Pública.
- Promover y coordinar con las dependencias administrativas y demás instituciones estatales la actualización permanente de la información pública.
- La demás funciones que sean necesarias para garantizar o agilizar el acceso a la información.

6.4.- Estructura Orgánica

En relación a la estructura orgánica interna de las respectivas Unidades de Información Pública que funcionan dentro de los respectivos órganos administrativos, cabe mencionar que este tipo de órganos administrativos, son los únicos que no van a tener una estructura administrativa compleja, ampliamente incardinada por líneas y grados, puesto que por lo regular solo va a estar integrada por el encargado de la unidad, secretario, personal técnico informático que son los encargados de la correcta exhibición, disposición y actualización de información pública a través de los respectivos portales electrónicos.

6.5.- Procedimiento administrativo en materia de solicitud de información pública.

Como bien sabemos desde una perspectiva del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es aquel que va estar conformado por una serie de etapas, ordenas, concatenadas y sistematizadas; que van ha tener como fin primordial la emisión de un acto o resolución administrativa, proferida por la autoridad competente, que en un momento determinado declare con o sin lugar

solicitud o denuncia que promovió el inicio y creación del procedimiento y expediente administrativo respectivo.

Razón por la cual en materia de acceso a la información pública, el procedimiento administrativo a seguir para la solicitud material o digital de información pública de conformidad con la Ley, se estructura de la manera siguiente:

Solicitud formulada por el interesado a la unidad de información pública del órgano administrativo que corresponda, la cual puede ser verbal, escrita o vía electrónica. (Llenando los requisitos que establece para el efecto el artículo 41 del Decreto Legislativo 57-2008) o bien la utilización del modelo de solicitud de información proporcionado.

Recepción de la solicitud por parte de la unidad de información que corresponda, para lo cual esta debe proferir el respectivo Decreto de trámite y realizar la notificación respectiva.

Resolución que resuelve petición o solicitud de información pública, la cual de conformidad con la Ley debe ser emitida o proferida dentro de un plazo de 10 días siguientes a la admisión de la solicitud.

Dicho plazo de resolución, se puede ampliar por 10 días más, debiendo notificar al interesado dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo señalado.

Si después de la ampliación el obligado no diese respuesta, tiene la obligación de otorgar la información en un plazo no mayor de 10 días posteriores al vencimiento del plazo estipulado, sin costo alguno.

En caso contrario de que vencido los plazos anteriormente descritos, no se entregare la información solicitada, el interesado puede accionar de amparo ante el órgano jurisdiccional competente; o realizar la denuncia respectiva

ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, por la fehaciente violación al Derecho de Petición.

Ahora si el supuesto fuese que la Unidad de Información Pública se negare a proporcionar la información solicitada, mediante el respectivo acto o resolución administrativa, y esta no se encontrase catalogada de manera legítima como información reservada o confidencial, la persona interesada puede hacer uso del control directo, el cual consiste en la interposición del recurso de revisión.

6.6.- Recurso de revisión

El recuso de revisión es una institución jurídica especial que también nace con la Ley de Acceso a la Información pública, el cual se bien a constituir como un medio extraordinario de impugnación, en ejercicio del control directo procedente en contra de las resoluciones proferidas por las unidades de información pública que sean lesivas o adversas a las solicitudes de los administrados en materia de acceso a la información pública. El cual se interpone ante la máxima autoridad que represente el órgano administrativo; dentro del plazo de 15 días siguientes a la notificación de la resolución.

El escrito que contenga el recurso de revisión deberá cumplir con los requisitos que para el efecto establece el artículo 57, del Decreto Legislativo 57-2008.-

6.7.- Procedimiento para la verificación de información pública de oficio en portales Web de los distintos órganos administrativos

Para poder explicar de manera amplia lo relativo al procedimiento que cualquier persona individual o jurídica debe de seguir para la verificación de la información pública por medios electrónicos o digitales, es menester tener un

conocimiento previo de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales se constituyen como el medio necesario que convalida el presupuesto tecnológico, para poder evidenciar o verificar a través de los respectivos portales web, la información pública de oficio que de conformidad con la Ley los distintos órganos administrativos deben de mantener exhibidos, actualizados y disponibles ante cualquier usuario.

Razón por la cual podemos decir que “las tecnologías de la información y la comunicación, también representadas por su acrónimo TIC, no son más que uno de los tantos resultados que ha provocado la inmersión masiva de la tecnología en la sociedad, así como los procesos de globalización, y modernización de los sectores económicos, políticos, administrativos y jurídicos, que agrupan una serie de elementos y técnicas usadas en el tratamiento y transmisión de la información, derivadas de la informática, internet, y de las telecomunicaciones.

Por lo tanto a las tecnologías de la información y la comunicación, se les consideran como una etapa más de la evolución y modernización tecnológica en el marco de las sociedades en desarrollo, que generan cambios revolucionarios que traen consigo nuevos valores, principios, procedimientos e instituciones jurídicas y sociales. Y que hasta el momento siguen y seguirán modificando muchos o casi todos los aspectos de nuestras vidas”²⁹.

Por lo que una vez conocidas lo que son y representan las tecnologías de la información y la comunicación nos es fácil poder entender el procedimiento para en un momento determinado verificar de manera directa la información pública de oficio de los distintos órganos administrativos a través de sus respectivos portales web.

²⁹ LÓPEZ ZILLER. José Alberto. “El Comercio y la Contratación Electrónica en el Marco Jurídico Guatemalteco”. Primera edición. Editorial Camaja. 2012. Página 9 y 10.

Por lo tanto para poder verificar de manera directa la información pública de oficio de los distintos órganos administrativos a través de sus respectivos portales web, en primer termino tenemos que agenciarnos de un ordenador o sea una computadora sea esta de escritorio o portátil o también de Smartphone, siempre y cuando dichos dispositivos tecnológicos en su software, cuenten con una aplicación que permita la navegación por internet. Una vez convalidados los presupuestos anteriormente descritos se necesita también que se cuente con una conexión a internet ya sea vía Wired o Wirelles o sea en línea o inalámbrica o también vía Wifi o de punto de acceso remoto, para luego abrir la aplicación del navegador de internet respectivo, escribir el link o dirección electrónica del órgano administrativo que deseemos verificar; y una vez desplegada la respectiva página web, buscar el icono, banner o etiqueta, que haga referencia a la información pública y presionar clic sobre este, para poder ingresar directamente al apartado específico de información pública, apartado donde se nos desplegaran 29 numerales, donde cada uno de ellos representa la información que de conformidad con la Ley de Acceso a la Información es pública y se debe de mantener en todo momento exhibida, disponible y actualizada. En virtud de publicidad, y transparencia de los órganos que conforman la administración pública, manifestándose así total y plenamente la garantía de Habeas Data o exhibición de datos e información.

CAPÍTULO VII

CONSECUENCIAS Y EFECTOS ANTE LA CONSTANTE VIOLACIÓN A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA, POR LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

7.- UTOPIÍA LEGAL

De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, la utopía no es más que el término que se utiliza para describir un plan, proyecto, doctrina o legislación que aunque nazca a la realidad y efectivamente exista, al momento de querer hacer viable su aplicación aparece como irrealizable en el transcurso de su formulación.

Razón por la cual cuando hablamos de utopía legal, más que todo se hace referencia a todas aquellas Leyes que aunque efectivamente han cumplido con todos y cada uno de los pasos que sustentan y fundamentan su creación y aplicación en el mundo jurídico, en un momento determinado tienden a ser vigentes más no positivas, o sea no tienden a tener un uso o aplicación práctica en casos concretos, lo cual convalida la existencia de la teoría de la utopía legal, puesto que dichas leyes aunque tengan estructuras normativas complejas, complementadas por instituciones jurídicas específicas, principios, garantías y amplios supuestos de hecho o de derecho incardinados a sus respectivas consecuencias jurídicas, al momento que el individuo o administrado la invoca o la quiere hacer valer, tiende a ser irrealizable al momento de su respectiva invocación o formulación.

Por lo tanto cuando en la utilización práctica de las tecnologías de la comunicación y la información para la correcta y efectiva verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los respectivos sujetos obligados en sus respectivos portales web, nos damos cuenta que aunque la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 7 y 10 sea clara y taxativa al imponer la obligación de exhibir, actualizar y poner a disposición de la

población la información que de conformidad con la Ley tiende a ser pública de oficio; o sea que no exista necesidad de requerimiento de parte interesada, para su respectiva exhibición, actualización y disposición, situación que tiende a fortalecer y convalidar el régimen de transparencia y máxima publicidad de todos los actos de gobierno, generando en la población la confianza hacia sus autoridades y la iniciativa para practicar el derecho a la participación ciudadana y auditoria social, aspectos que tienden a fortalecer el régimen democrático de todo estado de derecho.

Pero resulta que en la práctica consuetudinaria, cuando ya el administrado se logra enterar que existe una legislación que le permite desde la comodidad de su hogar, por medio de los portales web que las unidades de información pública de cada sujeto obligado a creado, para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, para poder tener acceso a conocer como se manejan los bienes y recursos del Estado, donde la única llave requerida para convalidar dicho presupuesto es el uso y la aplicación práctica de la tecnología y las instituciones jurídicas, garantías y principios propios del régimen de Habeas Data; situación que al intentar practicarse y convalidarse como una realidad jurídica ideal, genera una serie de aspectos negativos en los administrados que apuntan única y exclusivamente a concluir que en Guatemala el régimen de Habeas data no es más que una utopía legal, puesto que si bien es cierto existen portales Web, de cada sujeto obligado que desglosen los veintinueve numerales que de conformidad con el artículo 10 del Decreto Legislativo 57-2008, conforman las obligaciones de transparencia de la información pública de oficio, al momento de intentar verificar cada uno de ellos, el administrado se percata que la información no esta exhibida, o si esta exhibida no esta actualizada o si esta exhibida y actualizada no esta disponible o simplemente no esta ni exhibida, ni actualizada, ni disponible, situación que no solamente convalida la teoría de la utopía legal, sino que también tiende a violentar de manera directa y fehaciente a la garantía constitucional de Habeas Data y al principio especial de disposición y actualización de información pública de oficio, aspectos que no solo generan consecuencias y efectos en el ámbito

social, sino también en el ámbito jurídico y en toda la administración pública, provocando incertidumbre e incredibilidad en el régimen de publicidad y transparencia de los actos de la administración pública.

7.1.- Consecuencias y efectos en el Ambito Social

Contemporáneamente con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 57-2008 la garantía constitucional de Habeas Data y el principio especial de disposición y actualización de información pública de oficio han venido a intentar insertar en la sociedad guatemalteca, la confianza a través de la transparencia y publicidad de casi todos los actos de gobierno, impulsando el derecho a una participación ciudadana activa, que el individuo pueda realizar en cualquier lugar y en cualquier momento actos de auditoria social, a través de los portales web de transparencia implantados por los sujetos obligados, pero al momento que el ciudadano guatemalteco intenta realizar y convalidar tales actos y no lo logra, por no poder obtener la información que pretende, tal situación tiende en un momento determinado a generar un descontento social que impacta negativamente la psiquis del individuo, llevando a este a creer que el estado es corrupto y que por más que intente camuflajear sus actos de corrupción con ideologías de transparencia y publicidad, no lo logra, aspecto que no solo queda en el descontento social, sino que posteriormente lleva al individuo a ya no creer en las políticas de gobierno e incluso a ya no creer en la propia legislación, situación que con el paso del tiempo podría llevar a causar un caos al orden público o incluso creer que en Guatemala existe una plena anarquía.

7.2.- Consecuencias y efectos en el Ambito Jurídico y de la administración pública

Como ya bien es de nuestro respectivo conocimiento en Guatemala toda norma, toda Ley es manifestación del principio de legalidad. Y para que esa legalidad pueda ser viable primeramente tiene que devenir y no contrariar en

ningún momento la súper legalidad, calidad que únicamente ostenta la Ley fundamental de todo Estado, que como bien sabemos es la Constitución Política, cuerpo normativo del cual se derivan todos los demás cuerpos jurídicos existentes, sean estos sustantivos ordinarios o espaciales extraordinarios, así como también los adjetivos, como también los reglamentarios e individualizados.

Como bien sabemos el régimen de Habeas Data, transparencia y máxima publicidad no son instituciones jurídicas de reciente creación, puesto que como bien hemos venido analizando surgen con la Constitución Política de la República de Guatemala del año de 1945 y durante toda la gran evolución del constitucionalismo guatemalteco que ya oscila alrededor de 68 años de historia evolución y reforma constitucional, poco a poco han ido evolucionando, hasta lograr su perfección en el año 2008, mediante la creación del Decreto Legislativo 57-2008, que es el que hace referencia a la Ley de Acceso a la Información Pública, cuerpo legal en donde ya de manera específica se crea la Institución Jurídica de Habeas Data, como garantía tutelar para la correcta y efectiva protección y seguridad jurídica de los datos y la información pública y personal, promotora del régimen de transparencia y publicidad y de los derechos de participación ciudadana y auditoría social. Razón por la cual por la amplia trayectoria histórica que dicha institución jurídica tiene, contemporáneamente al intentar invocarla para su respectiva aplicación y no lograr u obtener los resultados que se pretenden, realmente reflejan una gran deficiencia en los procesos cotidianos de la administración pública, puesto que si esta en su momento se organizó por virtud de soberanía, fue única y exclusivamente para garantizarle el bien común a todos los guatemaltecos, y para ello se crearon las Leyes y órganos administrativos de poder, para que solo así a través de ellos se lograra el más amplio y pleno desarrollo social y nacional, como país independiente y soberano, en base al principio pro persona que como bien es de nuestro conocimiento es el que establece que la persona, siempre es y será el principio y el fin del orden social; y que tanto el Estado

como el Derecho son productos sociales, creados por el hombre y para el hombre para el sólo efecto de vivir en armonía y sociedad con sus semejantes. Preceptos que exigen y obligan a la Legislación a ser vigente, positiva, coherente e inteligible, para así poder brindar a todos los guatemaltecos, la plena certeza y seguridad jurídica, en todo su proceder tanto en la vida social como jurídica.

En base a la investigación de campo realizada, se tomó como unidad de análisis los portales web en el apartado o link de obligaciones de transparencia o acceso a la información pública de los catorce Ministerios de Estado, en donde se logra convalidar fehacientemente la hipótesis de que existe una constante violación a la Garantía Constitucional de Habeas Data y al principio especial de Disposición y Actualización de información pública de Oficio, por los portales electrónicos de los catorce Ministerios de Estado, que conforman, integran y estructuran el Organismo Ejecutivo. Tomando en cuenta que en base a dicha investigación se lograron recabar y sintetizar los siguientes datos estadísticos que reflejan las violaciones anteriormente descritas en diferentes variantes o modalidades, siendo estas las siguientes:

En Relación al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. MINTRABAJO, se pudo evidenciar en primer término que dicho Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Legislativo 57-2008, efectivamente sí tiene implementado su respectivo portal electrónico de transparencia con sus respectivos anexos de información pública e información pública de oficio, en donde en este último apartado concerniente a información pública de oficio se desglosan efectivamente los links de las veintinueve obligaciones de transparencia que Manda la Ley, las cuales deben en todo momento hacer referencia de manera puntual a información pública de oficio debidamente exhibida, actualizada y disponible, para el solo efecto de no violentar el precepto legal de información pública de oficio, ni mucho menos la Garantía Constitucional de Habeas Data; pero resulta que de la revisión de campo que se hizo al portal electrónico del Ministerio en Mención se pudo

establecer lo siguiente: a).- se viola específicamente la garantía de exhibición de información pública de oficio a un 3.45% %, en el sentido de no exhibición de información pública algunos de los enlaces electrónicos establecidos para el efecto en el respectivo portal electrónico; b).- en relación al **principio especial de disposición** de información pública de oficio el margen de violación existente en base al análisis de campo realizado fue del 68.97%, en el sentido, de que aunque aparece descrita y esquematizada la obligación de transparencia, al dar clic sobre los links respectivos no esta disponible la información o sí aparece información no es relevante por no ser la información que manda la Ley, puesto que únicamente se establecen leyendas como NO APLICA, lo cual es ilegal o arbitrario, puesto que tal y como establece la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 25 que cuando la información sea clasificada como reservada, se debe de publicar en el apartado respectivo de la obligación de transparencia que corresponda, copia electrónica de la resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado donde en primer termino la fuente de la información, el fundamento por el cual se clasifica de dicha forma, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva que tendrá y el nombre de la autoridad responsable de su conservación, lo cual no sucede con el presente Ministerio; c).- y con respecto al **principio especial de actualización** de información pública de oficio, se pudo evidenciar que el margen de violación del mismo ascendió a 86.20%, en el sentido que si bien es cierto la información estaba exhibida y por ende disponible la misma no estaba actualizada, puesto que hacía referencia a asuntos y situaciones de años anteriores, no cumpliendo con los imperativos legales establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública, establecidos para el efecto. Y por lo tanto convalidando la hipótesis que llevó al desarrollo de la presente tesis. Ya que se evidencia de manera directa y fehaciente el incumplimiento y violación a la Información Pública de Oficio, como institución jurídica especial de la cual se derivan las obligaciones de transparencia, así como también la garantía constitucional de Habeas Data, la cual como ya se indicó se integra por los principios de exhibición, actualización y disposición de información pública y pública de oficio.

En Relación al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. MARN, que a lo largo de la presente investigación se constituyo a través de su respectivo portal electrónico en la segunda unidad específica de análisis, se pudo determinar lo siguiente: en primer término cabe mencionar que mediante Acuerdo Ministerial 434-2009 proferido por el Vice ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se creó la Unidad de información pública del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por lo que si existe un sujeto obligado encargado de manejar y administrar todo lo relativo a información pública e información pública de oficio, de igual forma se pudo verificar que dicho Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Legislativo 57-2008, efectivamente sí tiene implementado su respectivo portal electrónico de transparencia con sus respectivos anexos de información pública más no de información pública de oficio, por lo que no existe aún en dicho portal electrónico este último apartado concerniente a información pública de oficio en donde tendrían y deberían desglosarse efectivamente los links de las veintinueve obligaciones de transparencia que Manda la Ley de Acceso a la Información Pública, las cuales deberían en todo momento hacer referencia de manera puntual a información pública de oficio debidamente exhibida, actualizada y disponible, para el solo efecto de no violentar el precepto legal de información pública de oficio, ni mucho menos la Garantía Constitucional de Habeas Data; para que así de manera sencilla y directa cualquier persona desde la comodidad de su hogar, trabajo o establecimiento educativo, pueda realizar libremente auditoria social; pero como se indicó de la revisión de campo que se hizo al portal electrónico del Ministerio en Mención, se pudo establecer por las inobservancias indicadas, lo siguiente: a).- se viola específicamente la garantía de exhibición de información pública de oficio a un **96.55%**, en el sentido de no exhibición de información pública por no estar creados aún los enlaces electrónicos establecidos para el efecto en el respectivo portal electrónico; b).- en relación al **principio especial de disposición** de información pública de oficio el margen de violación existente en base al análisis de campo realizado fue del 96.55%, en el sentido de que la información pública de oficio no puede estar en ningún momento disponible

puesto que ni siquiera está exhibida por no estar creados aún los enlaces electrónicos establecidos para el efecto en el respectivo portal electrónico c).- y con respecto al **principio especial de actualización** de información pública de oficio, se pudo evidenciar que el margen de violación del mismo ascendió al 96.55%, puesto que la información pública de oficio no se encuentra actualizada por las sencillas y obvias razones de no estar exhibidas en el portal electrónico respectivo, ya que hasta la fecha en la cual se realizó la presente investigación, aún no estaban creados los enlaces electrónicos establecidos para el efecto en el respectivo portal electrónico, no cumpliendo por lo tanto con los imperativos legales establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública, establecidos taxativamente para el efecto. Y por lo tanto se llegó a convalidar la hipótesis que llevó al desarrollo de la presente tesis. Ya que se evidencia de manera directa y fehaciente el incumplimiento y violación a la Información Pública de Oficio, como institución jurídica especial de la cual se derivan las obligaciones de transparencia así como también la garantía constitucional de Habeas Data, la cual se integra por los principios de exhibición, actualización y disposición de información pública y pública de oficio.

En base a las violaciones expuestas, las cuales quedaron debidamente evidenciadas y que fueron el resultado de lo verificado en el estudio de campo que se realizó en relación a la presente investigación, pero de manera directa sobre las dos unidades de análisis principales que como bien se indicó fueron los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y del Ministerio de Ambiente y recursos naturales, ello sin menoscabar las otras investigaciones colaterales que se realizaron consistentes en encuestas dirigidas a estudiantes de la carrera de derecho, cursantes de los últimos semestres de las Universidades Privadas Mariano Gálvez y Rural, ambos centros regionales que operan en el municipio y departamento de Retalhuleu, las cuales también evidenciaron la existencia de las violaciones aducidas, circunstancia que se reflejó de la siguiente forma: a).- En relación a los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, centro regional Retalhuleu, se les realizó una encuesta consistente en doce interrogantes, las cuales pretendían

evidenciar el conocimiento del contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública, como el de sus respectivas instituciones jurídicas especiales, tales como Habeas Data, portal electrónico de transparencia, obligación de transparencia, participación ciudadana y auditoría social, sujetos obligados en materia de información pública, clasificación de información pública, información pública de oficio, y sobre todo previa instrucción e inducción verificar de manera individual si en los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, existe el apartado de información pública de oficio y si existen si la información pública de oficio se encuentra debidamente exhibida, actualizada y disponible, en donde la línea de investigación manifestada estadísticamente en base a las encuestas realizadas, reflejó que el 80% de los estudiantes encuestados no encontró la información pública de oficio, en los portales electrónicos ya indicados, debidamente exhibida, actualizada y disponible, información que nuevamente sustenta la hipótesis que motiva el presente trabajo de investigación. La cual al realizar la misma encuesta pero a los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, centro regional Retalhuleu, se volvió a convalidar dicha hipótesis en el sentido que el 63% de estudiantes encuestados siguiendo la sistemática de los estudiantes Marianistas, tampoco encontró en los portales electrónicos de los Ministerios analizados, la información pública de oficio, debidamente exhibida, actualizada y disponible.

También se realizaron otras encuestas, pero dirigidas a vecinos y transeúntes del municipio y departamento de Retalhuleu, encuestas que de igual forma evidenciaron la existencia de las violaciones que motivaron el presente trabajo de investigación, circunstancia que se reflejó de la siguiente forma: a).- En relación a los vecinos y transeúntes del municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, la encuesta que se les realizó consistía en 7 interrogantes, las cuales pretendían evidenciar: el conocimiento sobre la publicidad de los actos administrativos, formas y modos de acceso a medios de publicidad estatal, conocimiento, acceso y utilización de tecnologías de la información y la comunicación, ejercicio directo o indirecto de los derechos de

participación ciudadana y auditoría social, utilización de portales electrónicos de gobierno, expectativas ante la utilización de los portales electrónicos de gobierno en relación a tener exhibida, actualizada y disponible la información que se desee verificar o consultar, de tal investigación realizada a través de la referida encuesta línea de investigación manifestada estadísticamente en base a resultados, reflejó que el 57% de vecinos y transeúntes encuestados al momento de ingresar a un portal electrónico de gobierno no ha encontrado la información pública de oficio, en los portales electrónicos respectivos, debidamente exhibida, actualizada y disponible, información que nuevamente sustenta la hipótesis que motiva el presente trabajo de investigación.

En los tres tipos de encuestas realizadas en la parte final, se estableció la siguiente interrogante ¿Considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado? En donde el 90% de estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, indicó que si era necesario, contestes con el criterio de los estudiantes de la Universidad Rural, puesto que el 80% de ellos en el mismo sentido manifestaron dicha necesidad y ello sin menoscabar a los vecinos y transeúntes del municipio y departamento de Retalhuleu, pues el 80% de las personas encuestadas también manifestaron el mismo criterio en relación a la creación de una sanción administrativa especial, que garantice el cumplimiento de lo ordenado por la Ley, para que así todo guatemalteco que se encuentre dentro o fuera del país, pueda ejercer plenamente los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes les conceden.

7.3.- Propuesta de Anteproyecto Legislativo para Reformar los artículos 9, 10, 62 y 63 del Decreto Legislativo 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública”

Es necesario, previo a entrar a conocer los anteproyectos legislativos, que se proponen para reformar la normativa antes mencionada, detallar los pasos que

se deben dar, a través del procedimiento legal de formación de ley respectivo, en mi calidad de ciudadano para hacer llegar los anteproyectos ante el Congreso de la República de Guatemala, como uno de los órganos que tienen iniciativa de ley.

- ✓ Remisión de la presente tesis a uno de los diputados al Congreso de la República, por el departamento de Retalhuleu (por ser el ámbito territorial en el que se realizó el trabajo de campo).

- ✓ Presentación ante la Secretaría del Congreso de la República de Guatemala.

El diputado deberá presentar los tres anteproyectos de iniciativa de reforma de ley que disponen reformar los artículos números redactados, en forma de decretos, separándose la parte considerativa de la dispositiva incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, para lo cual se adjuntará una copia del presente trabajo de investigación como estudio técnico así como cualquier documentación que los justifiquen. Los anteproyectos de iniciativa de las reformas se presentarán por escrito en hojas numeradas y rubricadas por quien los propone.

- ✓ Lectura de los anteproyectos por la Comisión de Legislación del Congreso: la dirección legislativa del congreso, remite los anteproyectos de iniciativa de reformas a la comisión de legislación, para su lectura ante el pleno del congreso.

- ✓ Regreso de las propuestas al pleno, en forma de proyectos de INICIATIVA de reformas de ley: una vez leídos, preliminarmente por la comisión de legislación del congreso, estos se convierten en proyectos de iniciativa, propiamente, para proceder a su admisión por el pleno del congreso de la república de Guatemala.

- ✓ ADMISIÓN: una vez presentados y leídos preliminarmente los proyectos de iniciativa de reforma de ley, éstos deberán ser admitidos oficialmente.
- ✓ DISCUSIÓN: Serán discutidos, uno por uno, los artículos de los decretos a reformar, se pondrá la discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tengan por suficientemente discutidos en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el congreso los declare de urgencia nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran. En esta etapa en que se da lectura de los artículos en redacción final.
- ✓ APROBACIÓN: una vez discutidos los proyectos de iniciativa de reformas de ley, deberán ser aprobados.
- ✓ SANCIÓN: aprobados los proyectos de iniciativa de reformas de ley, la junta directiva del congreso de la república de Guatemala, en un plazo no mayor de diez días, los enviara al organismo ejecutivo para su sanción. Debe tomarse en cuenta que dentro de los quince días de recibidos los decretos y previo acuerdo tomado en concejo de ministros, el presidente de la república, podrá devolverlos al congreso, con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de VETO. Si el ejecutivo no devolviera los decretos dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrán por sancionados y el congreso los deberá promulgar como reformas de la ley dentro de los ocho días siguientes.
- ✓ PROMULGACIÓN: es una facultad del organismo ejecutivo, una vez sancionados por el propio presidente de la república.
- ✓ INICIO DE LA VIGENCIA: las reformas a las leyes en mención empezarían a regir en todo el territorio nacional, ocho días después de

su publicación integra en el diario oficial, a menos que las mismas leyes amplíen o restrinjan dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación.

Proyecto de reformas en anexos.

7.3.1.- Exposición de Motivos de la Propuesta a las Reformas a los artículos 9, 10, 62 y 63 del Decreto Legislativo 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública”

Se pretende reformar el artículo 9 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública con la finalidad de: Complementar vacíos, lagunas y ambigüedades legales en relación a las instituciones jurídicas fundamentales de la Legislación especial en materia de acceso a la información pública, incorporando para el efecto la conceptualización o definición de dos instituciones jurídicas básica y fundamentales de mucha importancia siendo estas: las de obligaciones de transparencia y la de infracción administrativa por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, las cuales en la reforma conformarían los numerales 10 y 11 del artículo 9 del Decreto Legislativo 57-2008, las cuales para el efecto se entenderían de la siguiente manera.

Obligaciones de transparencia. Se entenderán como obligaciones de transparencia a todas aquellas instituciones jurídicas propias de la legislación de acceso a la información pública en la cual se manifiesta fehacientemente la garantía del habeas data, el principio de máxima publicidad, la transparencia, la participación ciudadana y la auditoría social en relación a la obligación de mantener exhibida, disponible y actualizada constantemente todos los datos e información pública y pública de oficio por parte de los sujetos obligados ya sea de manera directa o indirecta a través de sus respectivos portales web, ya que éstas por imperativo legal son impuestas a todos los órganos administrativos que conforman la administración pública, así como también órganos de poder, extra poder y control político.

infracción administrativa por incumplimiento a las obligaciones de transparencia: se entenderán como tales a todas aquellas acciones u omisiones sean dolosas o culposas, ocasionadas por los sujetos obligados en el legítimo ejercicio de sus obligaciones legales, devenidas por meras inobservancias, descuidos, abuso de autoridad, negligencia, imprudencia o impericia, que en todo momento tienda a limitar injustificadamente el régimen de transparencia y máxima publicidad, en relación a la exhibición, disposición y actualización de información pública e información pública de oficio ya sea de forma directa e indirecta, para el legítimo ejercicio de los interesados en base a los derechos de participación ciudadana y auditoria social.

Se pretende reformar el artículo 10 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, con la finalidad de: hacer más amplio coherente e inteligible dicho artículo, incorporando al mismo los supuestos jurídicos de: infracción administrativa por parte de los sujetos obligados derivada del incumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como también el supuesto que reafirma el cumplimiento de la garantía constitucional de Habeas Data y los principios especiales de actualización y disposición de información pública e información pública de oficio, como también el sentido en el cual deben de entenderse las obligaciones de transparencia en relación a la información pública de oficio, quedando para el efecto estructurado de la siguiente forma:

Artículo 10 información pública de oficio. Los sujetos obligados para evitar incurrir en cualquier tipo de infracción administrativa por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberán en todo momento mantener exhibida, actualizada y disponible, para cualquier interesado, de acuerdo a sus respectivas atribuciones y competencias legales, la información considerada por disposición legal, como pública y pública de oficio ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de los respectivos portales electrónicos existentes por cada unidad de información, se entenderán por obligaciones de

transparencia, derivadas de la información pública de oficio, todo lo relativo a la exhibición, disposición y actualización de los veintinueve numerales que integran el artículo 10 del Decreto Legislativo 57-2008.-

Se pretende reformar el artículo 62 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, con la finalidad de: crear medidas de coerción y sanción legal para exigir la pronta, debida y eficaz observancia y cumplimiento de la legislación especial en materia de acceso a la información pública, creando para el efecto sanciones específicamente aplicables a los sujetos obligados, responsables de las unidades de información pública, cuando incumplan con cualquiera de las obligaciones legales generales y de transparencia establecidas para el efecto por el Decreto 57-2008. Quedando para el efecto estructurado de la siguiente forma:

Artículo 62 Aplicación de sanciones. Las faltas administrativas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, cometidas por los sujetos obligados o responsables en el legítimo ejercicio de la presente Ley serán sancionados, por una queja con llamada de atención escrita y suspensión de labores por ocho días sin goce de salario, y más de dos quejas con suspensión de labores sin goce de salario por treinta días. Cuando medie reincidencia al incumplimiento de las obligaciones legales y de transparencia por parte de las unidades de información pública de conformidad con esta Ley, al mismo se le impondrá una multa de quince mil quetzales más destitución, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en las que también se pueda incurrir.

Se pretende reformar el artículo 63 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, con la finalidad de hacer más amplio, coherente e inteligible dicho artículo, estableciendo para el efecto de manera directa quien será el encargado o responsable de ejecutar la facultad

sancionadora por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como también bajo que circunstancias legales se deberá desarrollar y dilucidar todo lo relativo al conocimiento, desarrollo, sustanciación, diligencias, incidencias, resolución y sanción del procedimiento administrativo previo o preliminar, en el cual se deberán garantizar en todo momento bajo pena de nulidad de lo actuado el derecho constitucional de defensa del presunto infractor.

Artículo 63 Procedimiento administrativo sancionatorio. El superior jerárquico del órgano administrativo que corresponda, será el obligado a iniciar procedimiento administrativo sancionatorio en virtud de faltas administrativas, devenidas por incumplimiento de las obligaciones legales de transparencia por parte de las unidades de información pública, por lo que la formación del expediente respectivo para la correcta sustanciación, resolución y sanción, se realizarán observando siempre el derecho de defensa del infractor y bajo las normas del procedimiento administrativo.

CONCLUSIONES:

1. En base a la investigación realizada y a los datos estadísticos generados por la misma se pudo establecer que si existe violación a la información pública de oficio y garantía constitucional de Habeas Data, por los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales.
2. De la revisión y lectura del decreto legislativo 57-2008, que hace referencia a la ley de acceso a la información pública, se puede establecer que si existe la obligación por imperativo legal de mantener la información pública de oficio en poder de los sujetos obligados debidamente exhibida, disponible y actualizada todo ello con fundamento en los artículos 10, 7, 9 numeral 4º. y 6º y 30 del cuerpo legal descrito.
3. Se pudo establecer que la información pública de oficio que debe de estar a disposición de los sujetos activos en materia de información pública es la contenida en el artículo 10 del decreto legislativo 57-2008, ley de acceso a la información pública, en sus veintinueve numerales que la estructuran y conforman.
4. Se pudo determinar que el no cumplimiento oportuno, debido y eficaz por parte de los sujetos obligados en

materia de información pública, a través de su respectiva unidad de información pública, atenta clara, contundente y fehacientemente contra el régimen de legalidad, juridicidad, publicidad, transparencia, participación ciudadana y auditoría social, en el sentido que crean en la mente del ciudadano guatemalteco el concepto de utopía legal, por existir leyes vigentes mas no positivas todo ello en el sentido de que aunque exista una legislación que les permita ejercer directa y efectivamente su derecho de participación ciudadana y auditoría social no puedan hacerlo, por el solo hecho del incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados.

5. Se pudo establecer que las causas por las cuales se provoca el constante incumplimiento de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública consistentes en mantener la información pública de oficio debidamente exhibida, actualizada y disponible, radica en la ***inexistencia de un régimen sancionatorio especial, administrativo y específico*** regulado o contemplado en el decreto 57-2008, en el que ***se establezcan las consecuencias jurídicas administrativas especiales*** respectivas por la no observancia a dicho precepto legal.
6. En base al desarrollo de la presente investigación se pudo establecer que las causas por las cuales no se encuentra actualizada, exhibida ni a disposición de los interesados la

información pública de oficio, que para el efecto establece la Ley en los modos, tiempo y forma establecidos, radica en una mera inobservancia e incumplimiento legal por parte de la Unidad de Información Pública de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, por no existir específicamente consecuencias jurídicas administrativas especiales ante la convalidación de tales circunstancias.

RECOMENDACIONES

1. Que los superiores jerárquicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales en forma mensual, establezcan como obligación a las unidades de información pública, presentar informe circunstanciado, para verificar así el efectivo cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que para el efecto establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
2. Que al Superior Jerárquico de cada uno de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, a través de la dependencia administrativa pertinente tienda a capacitar al personal a cargo de la información pública para que puedan conocer cuales son las obligaciones que por imperativo legal deben de cumplir en el tiempo, lugar, modo y forma, todo ello de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.
3. A las unidades de información pública, para no tener ningún tipo de problemas en relación a que tipo de información deben publicar por los respectivos portales electrónicos de transparencia únicamente tienen que tomar como base los

veintinueve numerales que estructuran y conforman la Ley de Acceso a la Información Pública, que en este caso es la guía legal a seguir.

4. A las unidades de información pública cumplir con las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, para que en ningún momento puedan atentar contra el régimen de legalidad, juridicidad, publicidad, participación ciudadana y auditoría social.

5. A las unidades de información pública, incorporar a su portal electrónico de transparencia, la aplicación o plataforma informática Open Wolf, la cual permitirá de una manera simple, directa y automatizada atender como sujeto obligado vía On Line cualquier solicitud de información pública o pública de oficio realizada por cualquier interesado en obtenerla, todo ello para facilitar aún más el ejercicio de todo guatemalteco de sus derechos de participación ciudadana y auditoría social.

6. ***Proponer reformas*** a la Ley de Acceso a la Información Pública en el sentido de ***implementar preceptos normativos que regulen y establezcan consecuencias jurídicas especiales administrativas***, contundentes y positivas en relación a los sujetos obligados, que por dolo, negligencia, imprudencia o impericia incumplan con los preceptos normativos contenidos en el artículo 7 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

7. Proponer al Congreso de la República, a través del Diputado Antonio Ralda de Retalhuleu, un anteproyecto de reformas al Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, que contemple un régimen administrativo sancionatorio especial, efectivo para regular y erradicar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados en materia de información pública.

ANEXOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
DECRETO NÚMERO 00-2013
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en sus artículos 30 y 31 establece todo lo relativo a la publicidad de los actos administrativos y el acceso a archivos y registros estatales, instituciones jurídicas constitucionales que son el punto de partida para el pleno reconocimiento y aplicación del régimen especial de Habeas Data, como garantía tutelar de los datos y la información pública y pública de oficio.

CONSIDERANDO

Que la consolidación del régimen democrático del Estado de Guatemala, como Estado de Derecho, Independiente y soberano establece y define tendencias que lo obligan a enmarcarse siempre al régimen de legalidad, juridicidad, transparencia, máxima publicidad, seguridad y certeza jurídica, participación ciudadana y auditoría social, regímenes que imponen a las unidades de información pública, como sujetos obligados y como órganos tutelares de los datos e información pública Estatal, garantizar en todo momento con plena y pronta eficacia, eficiencia y celeridad el efectivo cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por disposición de la Ley.

CONSIDERANDO

Que es menester establecer consecuencias jurídicas administrativas contundentes y positivas a los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública, en casos de inobservancia por parte de estos al cumplimiento efectivo de todas las obligaciones que para el efecto establece el Decreto 57-2008, para así poder garantizar plenamente de manera directa y efectiva, el derecho a la participación ciudadana y auditoría social por parte de cualquier sujeto interesado en verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones de transparencia ya sea de manera directa o electrónica.

POR TANTO

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA**REFORMAS AL DECRETO LEGISLATIVO 57-2008, LEY DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Artículo 1 se reforma el artículo 9 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así:

Artículo 9 Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Datos personales: Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables.
2. Datos sensibles o datos personales sensibles: Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.
3. Derecho de acceso a la información pública: El derecho que tiene toda persona para tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados descritos en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma.

4. Hábeas data: Es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a su protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos impersonales no identificables, como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de *hábeas data* o protección de datos personales de la presente ley.

5. Información confidencial: Es toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad.

6. Información pública: Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico y que no sea confidencial ni estar clasificado como temporalmente reservado.

7. Información reservada: Es la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley.

8. Máxima publicidad: Es el principio de que toda información en posesión de cualquier sujeto obligado, es pública. No podrá ser reservada ni limitada sino por disposición constitucional o legal.

9. Seguridad nacional: Son todos aquellos asuntos que son parte de la política del Estado para preservar la integridad física de la nación y de su territorio a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes, y aquellos que se refieren a la sobrevivencia del Estado-Nación frente a otros Estados.

10. obligaciones de transparencia. Se entenderán como obligaciones de transparencia a todas aquellas instituciones jurídicas propias de la legislación de acceso a la información pública en la cual se manifiesta fehacientemente la garantía del habeas data, el principio de máxima publicidad, la transparencia, la participación ciudadana y la auditoría social en relación a la obligación de mantener exhibida, disponible y actualizada constantemente todos los datos e información pública y pública de oficio por parte de los sujetos obligados ya sea de manera directa o indirecta a través de sus respectivos portales web, ya que éstas por imperativo legal son impuestas a todos los órganos administrativos que conforman la administración pública, así como también órganos de poder, extra poder y control político.

11- infracción administrativa por incumplimiento a las obligaciones de transparencia: se entenderán como tales a todas aquellas acciones u omisiones sean dolosas o culposas, ocasionadas por los sujetos obligados en el legítimo ejercicio de sus obligaciones legales, devenidas por meras inobservancias, descuidos, abuso de autoridad, negligencia, imprudencia o impericia, que en todo momento tienda a limitar injustificadamente el régimen de transparencia y máxima publicidad, en relación a la exhibición, disposición y actualización de información pública e información pública de oficio ya sea de forma directa e indirecta, para el legítimo ejercicio de los interesados en base a los derechos de participación ciudadana y auditoría social.

Artículo 2 se reforma el artículo 10 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así:

Artículo 10 información pública de oficio. Los sujetos obligados para evitar incurrir en cualquier tipo de infracción administrativa por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberán en todo momento mantener exhibida, actualizada y disponible, para cualquier interesado, de acuerdo a sus respectivas atribuciones y competencias legales, la información considerada por disposición legal, como pública y pública de oficio ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de los respectivos portales electrónicos existentes por cada unidad de información, se entenderán por obligaciones de transparencia derivadas de la información pública de oficio, todo lo relativo a la exhibición, disposición y actualización de la siguiente información:

- 1.- la estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo.
- 2.- Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las dependencias que la conforman.
3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.

5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos.

6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos.

7. La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.

8. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad.

9. La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones.

10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.

11. La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.

12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios

públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos.

13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones.

14. Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor.

15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos.

16. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado.

17. Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas.

18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente.

19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos.

20. Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo.

21. Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

23. Los informes finales de las auditorias gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión correspondientes.

24. En caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional, que manejen o administren fondos públicos deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.

25. En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o administren fondos públicos deben hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.

26. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre; el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo.

27. El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley.

28. Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos.

29. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.

Artículo 3 se reforma el artículo 62 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así:

Artículo 62 Aplicación de sanciones. Las faltas administrativas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, cometidas por los sujetos obligados o responsables en el legítimo ejercicio de la presente Ley serán sancionados, por una queja con llamada de atención escrita y suspensión de labores por ocho días sin goce de salario, y más de dos quejas con suspensión de labores sin goce de salario por treinta días. Cuando medie reincidencia al incumplimiento de las obligaciones legales y de transparencia por parte de las unidades de información pública de conformidad con esta Ley, al mismo se le impondrá una multa de quince mil quetzales más destitución, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en las que también se pueda incurrir.

Artículo 4 se reforma el artículo 63 del Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así:

Artículo 63 Procedimiento administrativo sancionatorio. El superior jerárquico del órgano administrativo que corresponda, será el obligado a iniciar procedimiento administrativo sancionatorio en virtud de faltas administrativas, devenidas por incumplimiento de las obligaciones legales de transparencia por parte de las unidades de información pública, por lo que la formación del expediente respectivo para la correcta sustanciación, resolución y sanción, se realizarán observando siempre el derecho de defensa del infractor y bajo las normas del procedimiento administrativo.

Artículo 5 El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	EXHIBIDO	ACTUALIZADO	DISPONIBLE	LINKS	RESULTADO
1. Estructura orgánica	1	1	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/estructura-organica-y-funciones.html	2
2. Dirección y teléfonos	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/directorio-telefonico.html	1
3. Directorio de empleados y servidores públicos	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/directorio-de-empleados-y-servidores-publicos.html	1
4. Número y nombre de funcionarios	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/salarios.html	1
5. La misión y objetivos de la institución	1	0	1	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/5-mision-objetivo-y-poa-de-la-institucion.html	2
6. Manuales de procedimientos	1	0	1	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/6-manuales-de-procedimientos.html	2
7. Presupuesto de ingresos y egresos	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/7-presupuesto-de-ingresos-y-egresos.html	1
8. Informes mensuales de ejecución presupuestaria	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/8-ejecucion-presupuestaria.html	1
9. Depósitos con fondos públicos	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/9-depositos-con-fondos-publicos.html	1
10. Procesos de cotización y licitación	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/procesos-de-cotizacion-y-licitacion.html	1
11. Contrataciones bienes y servicios	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/contrataciones-de-bienes-y-servicios.html	1
12. Viajes, costos y viáticos	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/12-viajes-nacionales-e-internacionales.html	1
13. Inventario de bienes	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/inventario-de-bienes-muebles-e-inmuebles.html	1
14. Mantenimiento	1	1	1		3

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	EXHIBIDO	ACTUALIZADO	DISPONIBLE	LINKS	RESULTADO
15. Programas de subsidios	1	1	1		3
16. Contratos, licencias o concesiones	0	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/contratos-licencias-y-concesiones.html http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/contratos-licencias-y-concesiones.html	0
17. Empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas	1	0	1	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/17-empresas-precalificadas.html	2
18. Listado de las obras con fondos públicos	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/18-obras-en-ejecucion-o-ejecutadas.html	1
19. Contratos de arrendamiento de inmuebles	1	0	1	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/19-contratos-de-arrendamiento.html	2
20. Contratos de cotización y licitación	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/20-contrataciones-por-cotizacion-y-licitacion.html	1
21. Fideicomisos	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/21-fideicomisos.html	1
22. Compras directas	1	1	1		3
23. Auditorias	1	0	1	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/23-auditorias.html	2
24. Información de entidades internacionales	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/24-informacion-de-entidades-de-caracter-internacionales.html	1
25. Información de entidades no gubernativas o privadas	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/25-entidades-no-gubernamentales-o-privadas.html	1
26. Publicación en el Diario de Centro América	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/26-informe-anual-de-archivos.html	1

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	EXHIBIDO	ACTUALIZADO	DISPONIBLE	LINKS	RESULTADO
27. Índice de información	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/27-indice-de-la-informacion-clasificada.html	1
28. Pertenencia	1	0	0	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/28-pertenencia-sociolingustica.html	1
29. Temas relacionados	1	0	1	http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/29-informacion-adicional-relevante.html	2

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

UNIDAD DE ANÁLISIS: Obligaciones de transparencia contenidas en portal Web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en relación a la Exhibición, actualización y disposición de información pública de oficio en observancia y fiel cumplimiento del Habeas Data y a los principios especiales de disposición y actualización de la información en portales electrónicos, para eficiente consecución del régimen de máxima publicidad y transparencia guatemalteco.

MANIFESTACIÓN DE RESULTADOS.



CONCLUSIÓN: En relación a la **exhibición** de datos se determinó que existe un 3.45% de violación al principio de Habeas Data, ahora bien con respecto a la **Actualización** de los datos, se estableció que existe un 86.20% de violación al principio especial de Actualización de datos; y por último se verificó que existe un 68.97% de violación al principio especial de **disposición** de datos, convalidándose para el efecto en relación al MINTRABAJO, el supuesto de hecho que motivo la investigación.

FUENTE: <http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/>

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	EXHIBIDO	ACTUALIZADO	DISPONIBLE	LINKS	RESULTADO
1. Estructura orgánica	1	0	0	http://www.marn.gob.gt/	1
2. Dirección y teléfonos	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
3. Directorio de empleados y servidores públicos	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
4. Número y nombre de funcionarios	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
5. La misión y objetivos de la institución	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
6. Manuales de procedimientos	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
7. Presupuesto de ingresos y egresos	0	1	0	http://www.marn.gob.gt/	1
8. Informes mensuales de ejecución presupuestaria	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
9. Depósitos con fondos públicos	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
10. Procesos de cotización y licitación	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
11. Contrataciones bienes y servicios	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
12. Viajes, costos y viáticos	0	0	1	http://www.marn.gob.gt/	1
13. Inventario de bienes	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
14. Mantenimiento de equipo	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
15. Programas de subsidios	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	EXHIBIDO	ACTUALIZADO	DISPONIBLE	LINKS	RESULTADO
16. Contratos, licencias o concesiones	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
17. Empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
18. Listado de las obras con fondos públicos	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
19. Contratos de arrendamiento de inmuebles	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
20. Contratos de cotización y licitación	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
21. Fideicomisos	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
22. Compras directas	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
23. Auditorias	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
24. Información de entidades internacionales	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
25. Información de entidades no gubernativas o privadas	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
26. Publicación en el Diario de Centro América	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
27. Índice de información	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
28. Pertenencia	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0
29. Temas relacionados	0	0	0	http://www.marn.gob.gt/	0

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

UNIDAD DE ANÁLISIS: Obligaciones de transparencia contenidas en portal Web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en relación a la Exhibición, actualización y disposición de información pública de oficio en observancia y fiel cumplimiento del Habeas Data y a los principios especiales de disposición y actualización de la información en portales electrónicos, para eficiente consecución del régimen de máxima publicidad y transparencia guatemalteco.

MANIFESTACIÓN DE RESULTADOS.



CONCLUSIÓN: Se emitió un acuerdo ministerial 434-2009 por el Vice ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mediante este acuerdo se creó la información pública del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, no obstante a su creación existe el portal web pero sin ningún tipo de información pública de oficio, exhibida, actualizada y disponible. En relación a la **exhibición** de datos se determinó que existe un 96.55% de violación al principio de Habeas Data, ahora bien con respecto a la Actualización de los datos, se estableció que existe un 96.55% de violación al principio especial de

Actualización de datos; y por último se verificó que existe un 96.55% de violación al principio especial de disposición de datos, convalidándose para el efecto en relación al MINTRABAJO, el supuesto de hecho que motivo la investigación

FUENTE: <http://www.marn.gob.gt/>

**ENCUESTA PRACTICADA A LOS ESTUDIANTES DEL ONCEAVO SEMESTRE DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE RETALHULEU**

Instrucciones: La presente encuesta es de tipo académico, para la cual se requiere de su contribución, los datos que proporcione servirán para el estudio de campo de la tesis titulada **“Violación a la información pública de oficio y garantía Constitucional de Habeas Data, por los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales”**. Previo al haber verificado la información pública de oficio, en los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, responda a los cuestionamientos que se le irán formulando, respondiendo para el efecto de manera directa y específica.

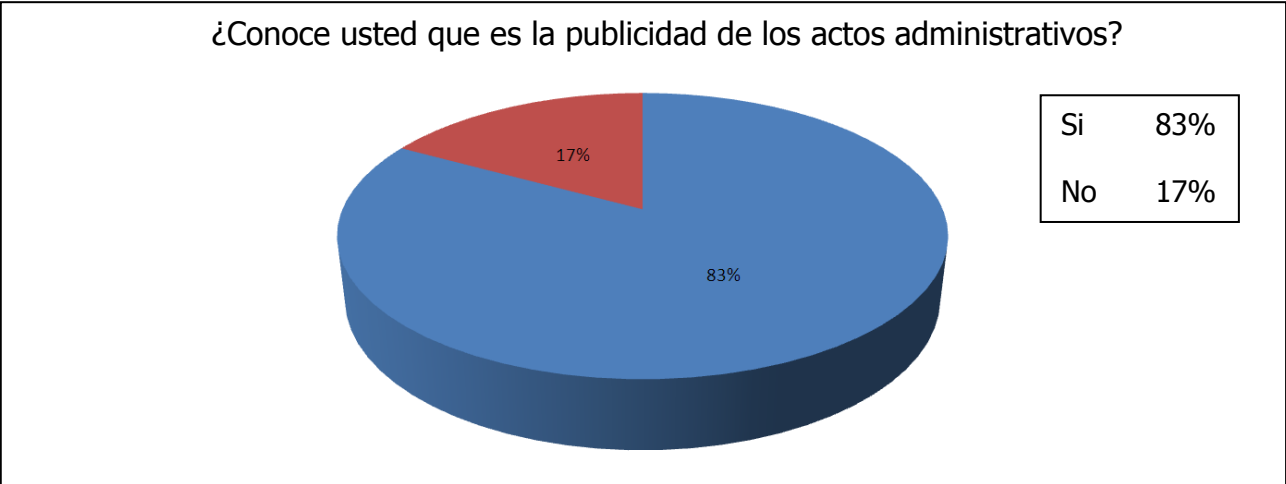
1. ¿Conoce usted que es la publicidad de los actos administrativos?
Si No
2. ¿Sabe que es la participación ciudadana y la auditoría social?
Si No
3. ¿Conoce que es el Habeas Data?
Si No
4. ¿Sabe usted que es un Sujeto obligado en materia de información pública?
Si No
5. ¿Conoce usted cual es la clasificación de información que la misma Ley de Acceso a la Información Pública desarrolla?
Si No
6. ¿Conoce en que consiste la información pública de oficio?
Si No
7. ¿Sabe usted que es un portal electrónico?
Si No
8. ¿Sabe cuales son las obligaciones de transparencia en materia de información pública?
Si No
9. ¿Sabía usted que la información pública de oficio que manejan los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales se puede verificar por sus respectivos portales electrónicos?
Si No
10. ¿En alguna oportunidad ha verificado por los portales electrónicos la información pública de oficio a la que están obligados a mostrar los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales?
Si No
11. Si respondió que si a la pregunta anterior ¿Ha encontrado la información pública de oficio que usted desea verificar debidamente actualizada, exhibida y disponible?
Si No
12. ¿Considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado?
Si No

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

UNIDAD DE ANÁLISIS

ESTUDIANTES DEL ONCEAVO SEMESTRE DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE RETALHULEU

PREGUNTA NÚMERO UNO



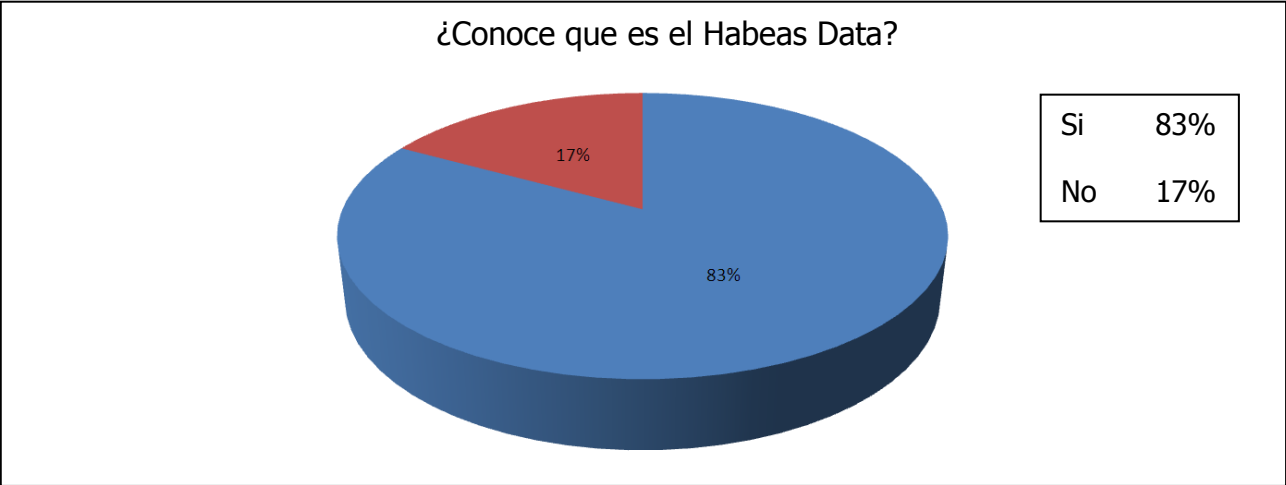
Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce la publicidad de los actos administrativos que regula la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que solo el diecisiete por ciento no lo conoce.
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO DOS



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que es la participación ciudadana y la auditoría social que regula la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que solo el diecisiete por ciento no lo sabe.
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

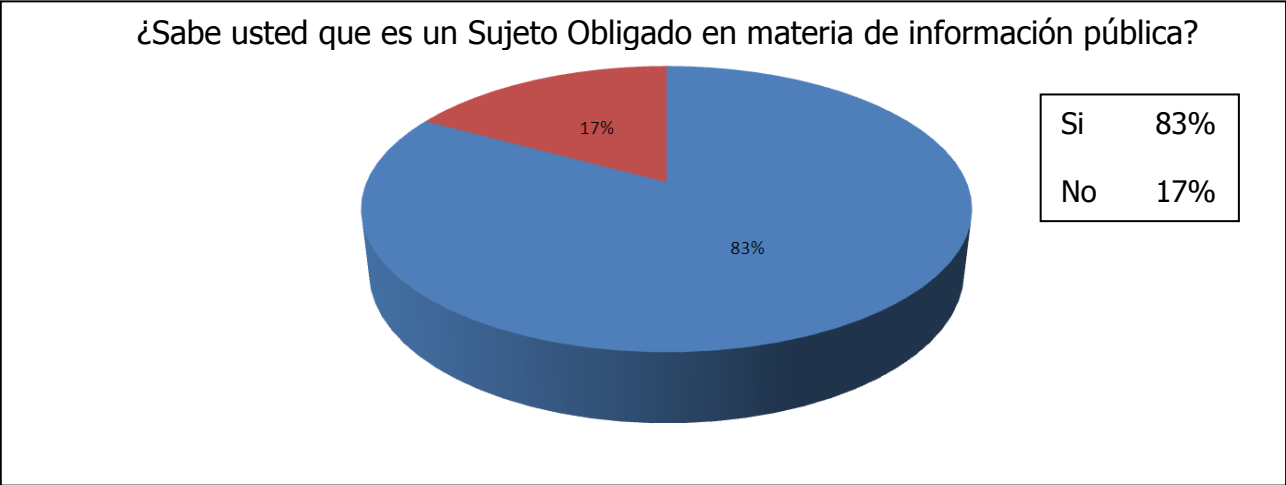
PREGUNTA NÚMERO TRES



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce que es el habeas data y tan solo el diecisiete por ciento no lo conoce.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO CUATRO



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que es un Sujeto Obligado en materia de información pública y tan solo el diecisiete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

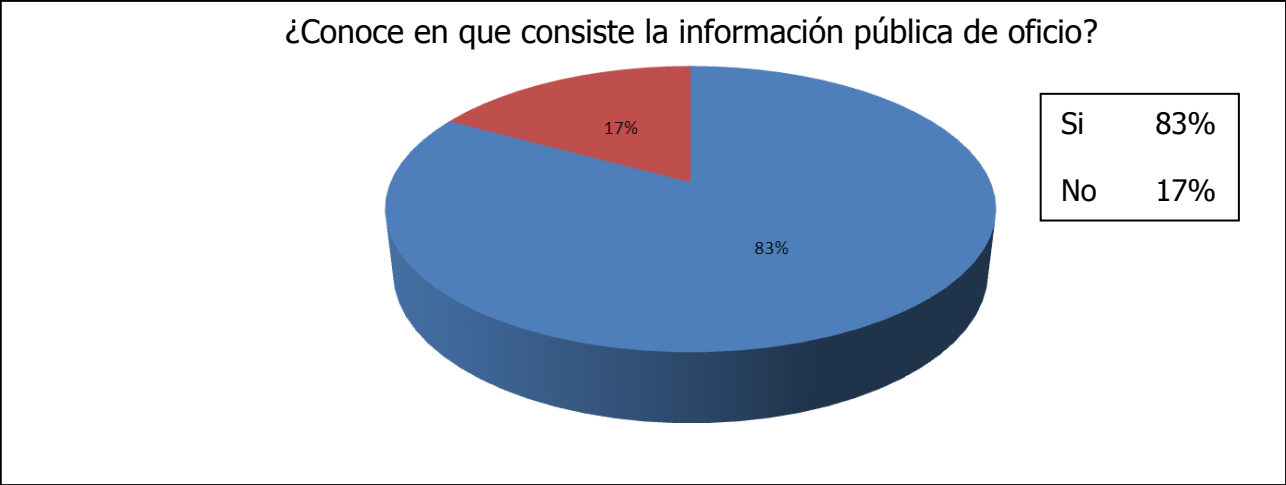
PREGUNTA NÚMERO CINCO



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce la clasificación de información que desarrolla la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que solo el diecisiete por ciento no lo conoce.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

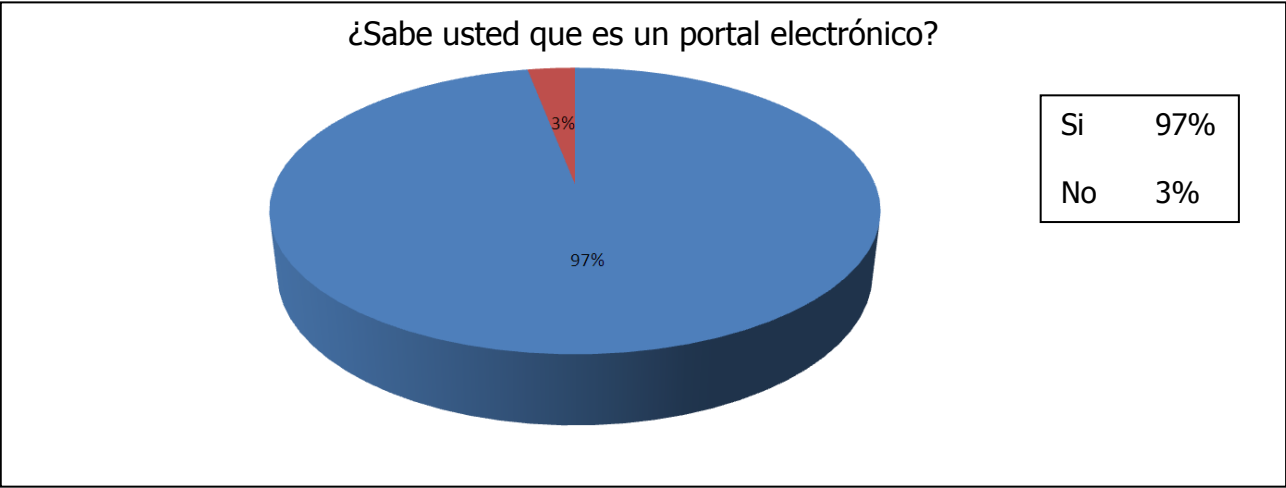
PREGUNTA NÚMERO SEIS



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce en que consiste la información pública de oficio, por lo que solo el diecisiete por ciento no lo conoce.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

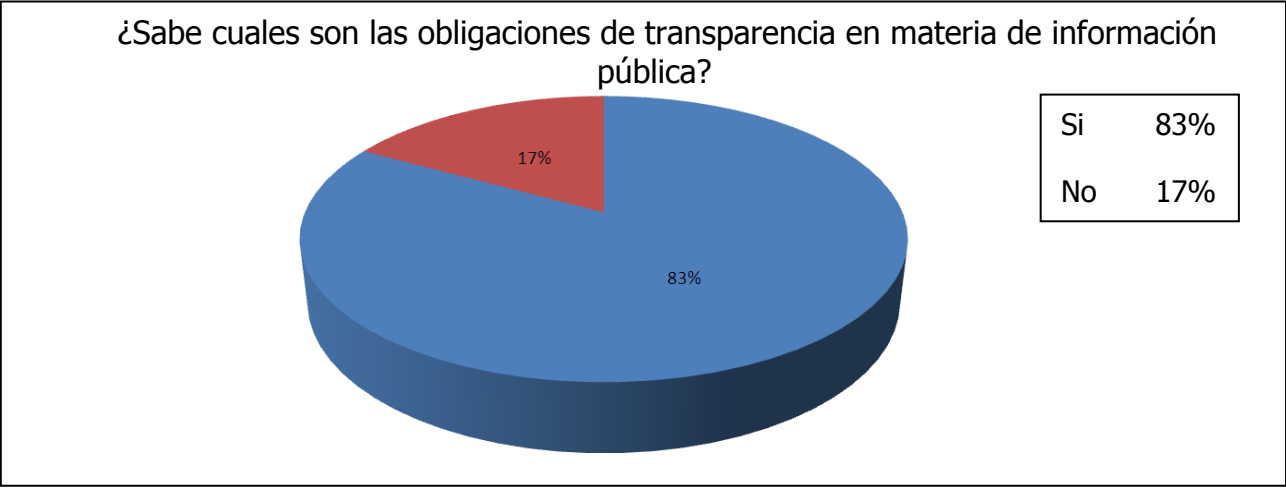
PREGUNTA NÚMERO SIETE



Conclusión: Se puede verificar que el noventa y siete por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que es un portal electrónico, por lo que solo el tres por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

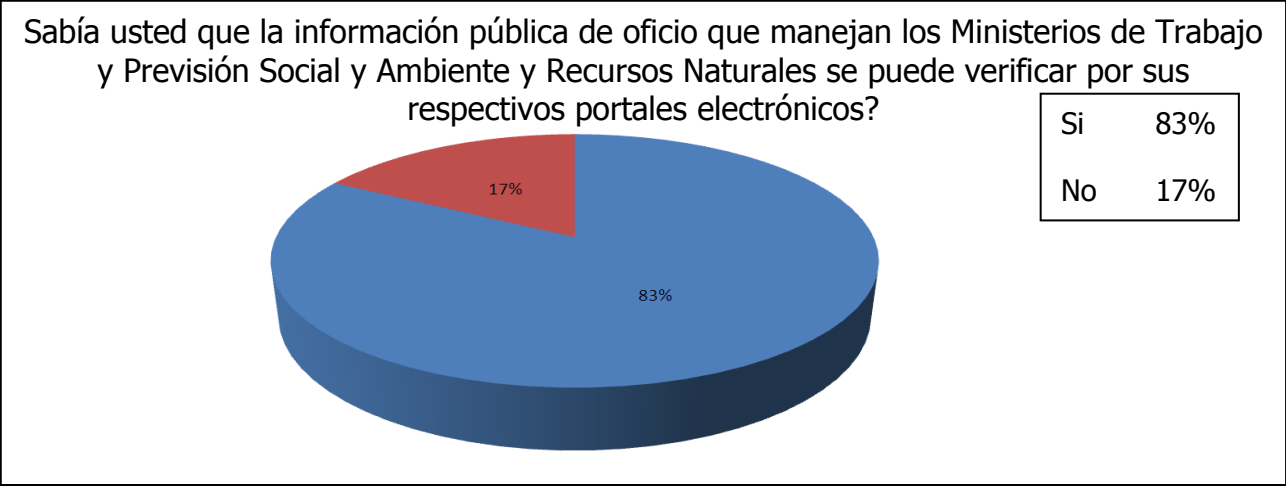
PREGUNTA NÚMERO OCHO



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe cuales son las obligaciones de transparencia en materia de información pública, por lo que solo el diecisiete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

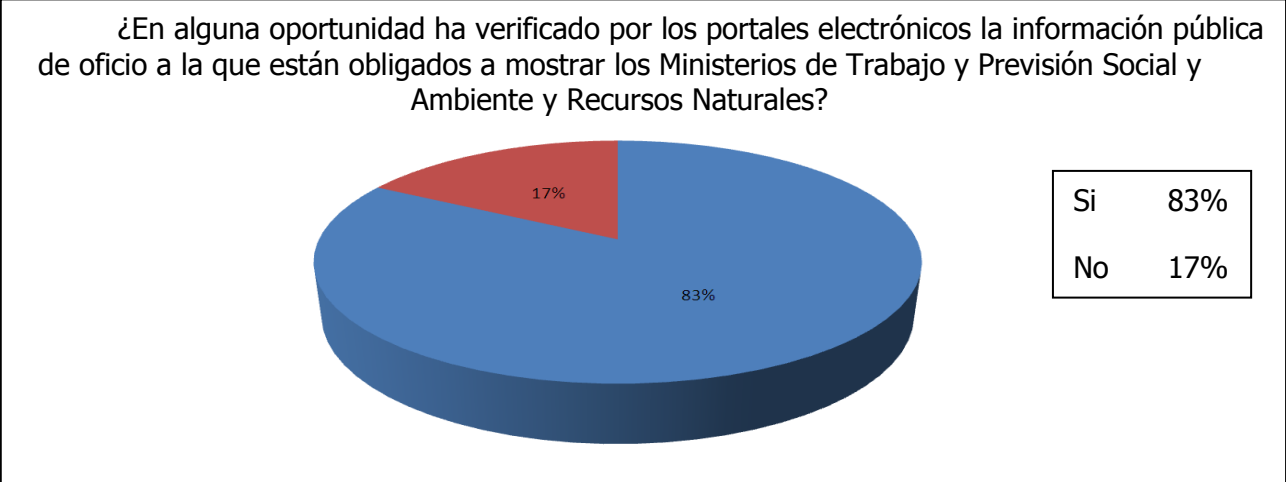
PREGUNTA NÚMERO NUEVE



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que la información pública de oficio que manejan los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales se puede verificar por sus respectivos portales electrónicos, por lo que solo el diecisiete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

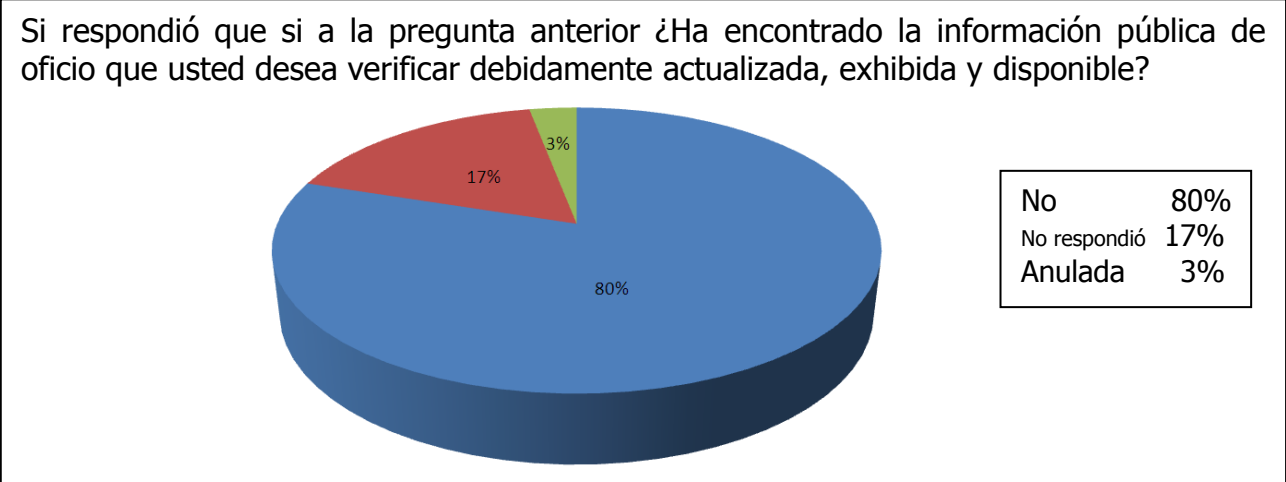
PREGUNTA NÚMERO DIEZ



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si ha verificado en alguna oportunidad por los portales electrónicos la información pública de oficio a la que están obligados a mostrar los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, por lo que solo el diecisiete por ciento no lo ha hecho.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

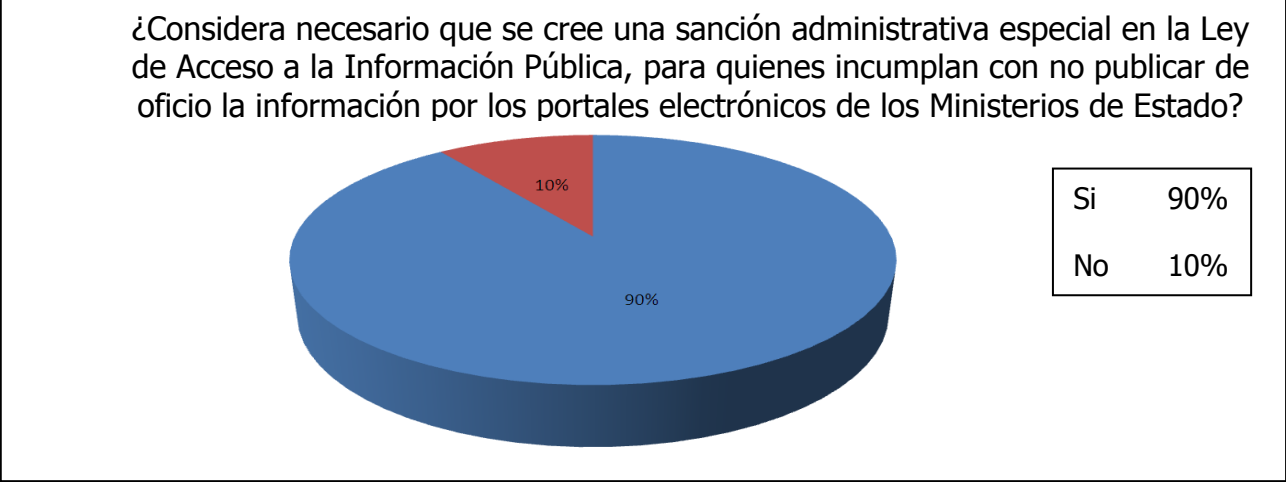
PREGUNTA NÚMERO ONCE



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta por ciento de los estudiantes encuestados no ha encontrado la información pública de oficio debidamente actualizada, exhibida y disponible, el diecisiete por ciento no respondió y el tres por ciento quedó anulado la respuesta por responder ambas preguntas.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO DOCE



Conclusión: Se puede verificar que el noventa por ciento de los estudiantes encuestados si considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado, por lo que solo el diez por ciento no lo considera necesario.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

**ENCUESTA PRACTICADA A LOS ESTUDIANTES DEL ONCEAVO SEMESTRE DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD RURAL DE RETALHULEU**

Instrucciones: La presente encuesta es de tipo académico, para la cual se requiere de su contribución, los datos que proporcione servirán para el estudio de campo de la tesis titulada **“Violación a la información pública de oficio y garantía Constitucional de Habeas Data, por los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales”**. Previo al haber verificado la información pública de oficio, en los portales electrónicos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, responda a los cuestionamientos que se le irán formulando, respondiendo para el efecto de manera directa y específica.

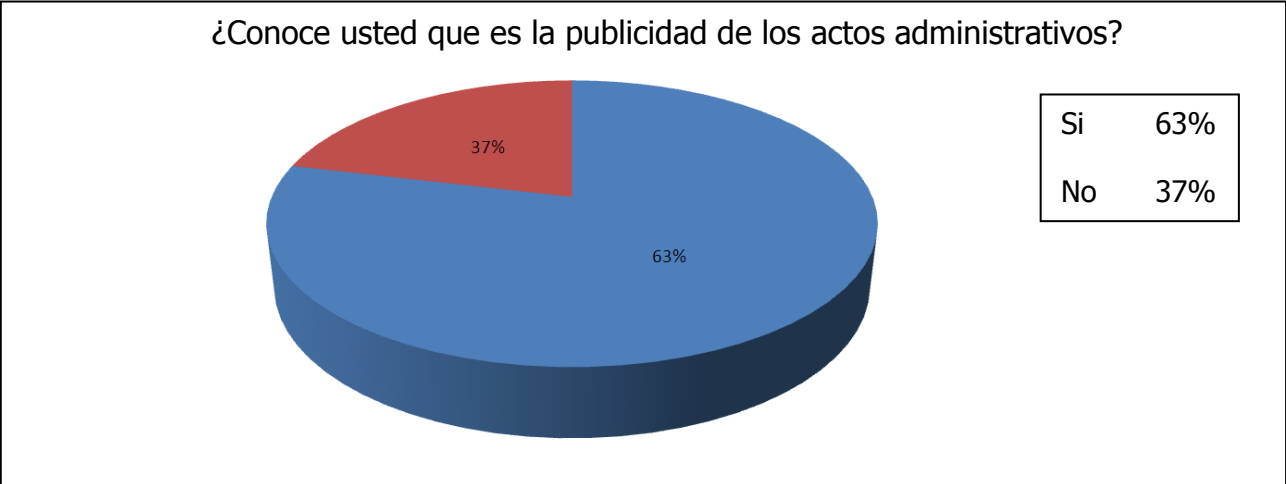
1. ¿Conoce usted que es la publicidad de los actos administrativos?
Si No
2. ¿Sabe que es la participación ciudadana y la auditoría social?
Si No
3. ¿Conoce que es el Habeas Data?
Si No
4. ¿Sabe usted que es un Sujeto obligado en materia de información pública?
Si No
5. ¿Conoce usted cual es la clasificación de información que la misma Ley de Acceso a la Información Pública desarrolla?
Si No
6. ¿Conoce en que consiste la información pública de oficio?
Si No
7. ¿Sabe usted que es un portal electrónico?
Si No
8. ¿Sabe cuales son las obligaciones de transparencia en materia de información pública?
Si No
9. ¿Sabía usted que la información pública de oficio que manejan los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales se puede verificar por sus respectivos portales electrónicos?
Si No
10. ¿En alguna oportunidad ha verificado por los portales electrónicos la información pública de oficio a la que están obligados a mostrar los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales?
Si No
11. Si respondió que si a la pregunta anterior ¿Ha encontrado la información pública de oficio que usted desea verificar debidamente actualizada, exhibida y disponible?
Si No
12. ¿Considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado?
Si No

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

UNIDAD DE ANÁLISIS

ESTUDIANTES DEL ONCEAVO SEMESTRE DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD RURAL DE RETALHULEU

PREGUNTA NÚMERO UNO



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce la publicidad de los actos administrativos que regula la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo conoce.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

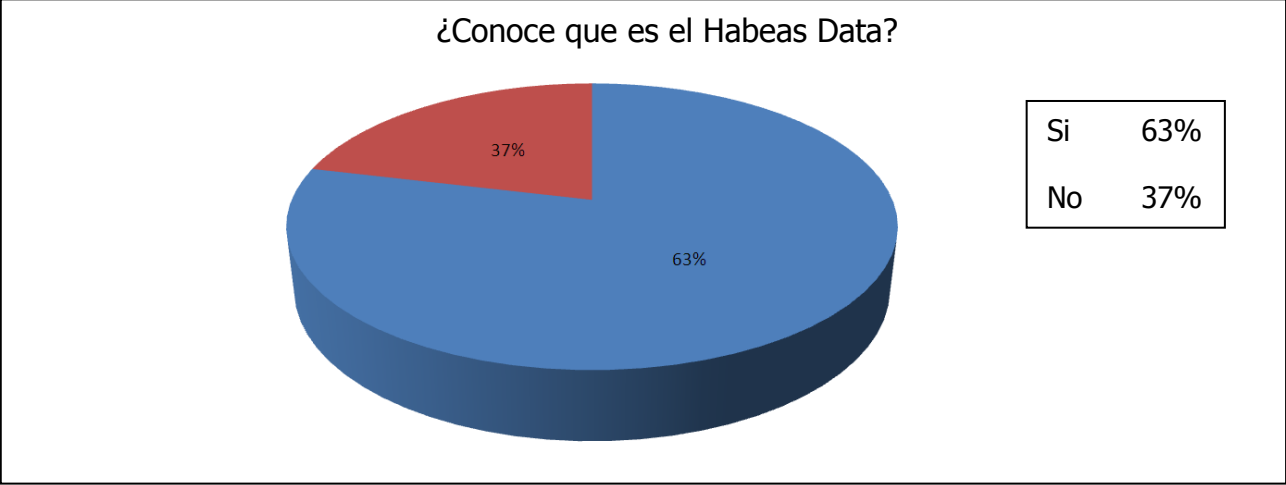
PREGUNTA NÚMERO DOS



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que es la participación ciudadana y la auditoría social, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

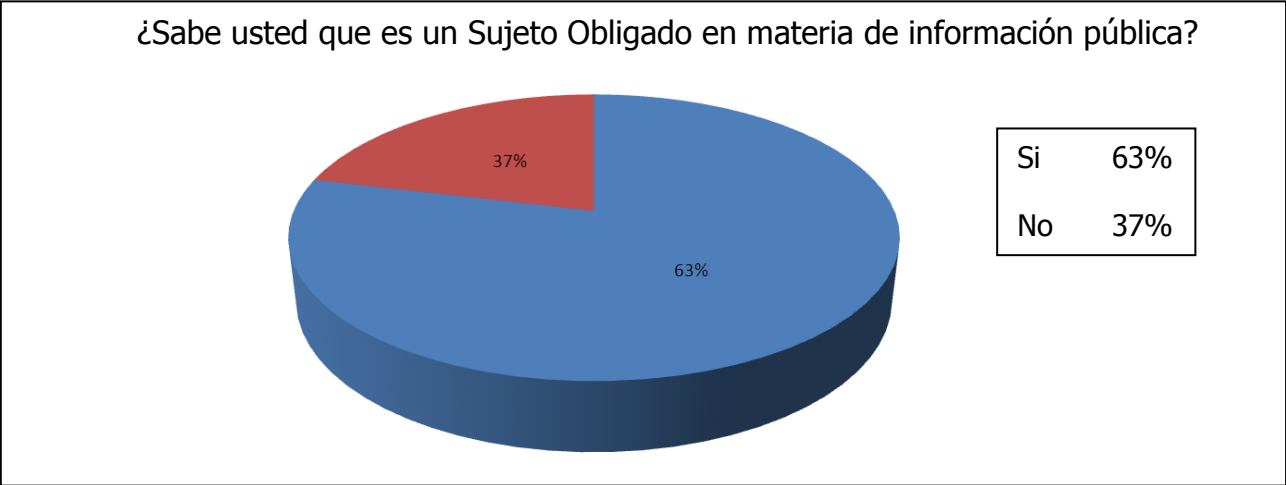
PREGUNTA NÚMERO TRES



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce que es el habeas data y tan solo el treinta y siete por ciento no lo conoce.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO CUATRO



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que es un Sujeto Obligado en materia de información pública y tan solo el treinta y siete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

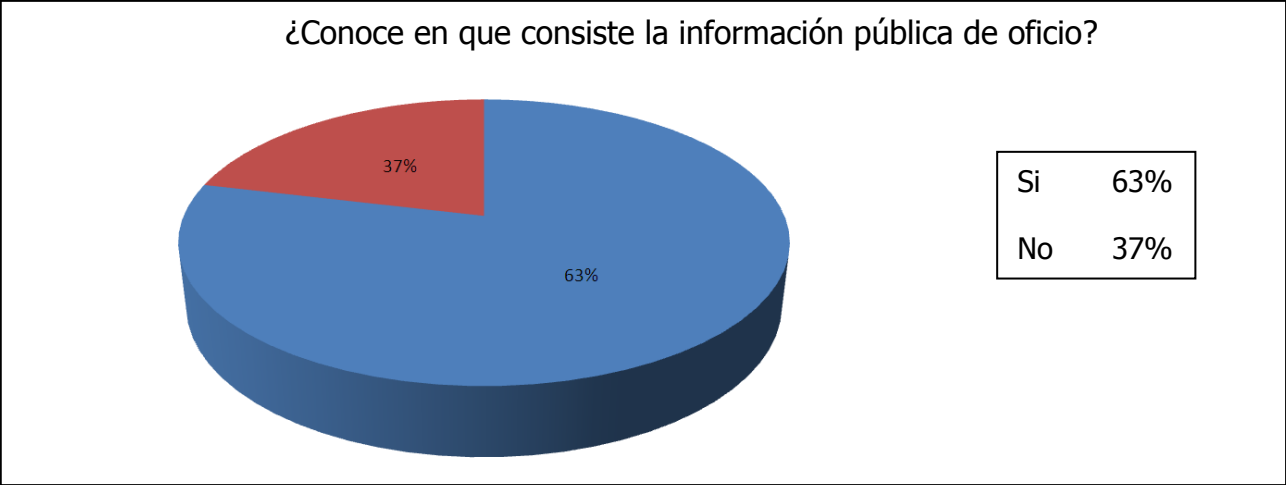
PREGUNTA NÚMERO CINCO



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce cual es la clasificación de información que desarrolla la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo conoce.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

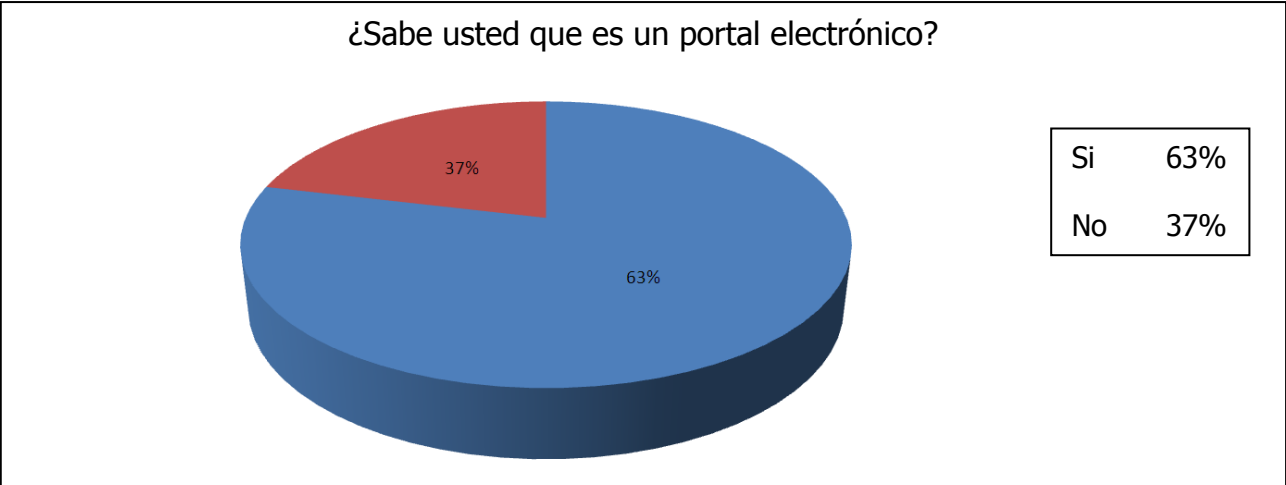
PREGUNTA NÚMERO SEIS



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si conoce en que consiste la información pública de oficio, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo conoce.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

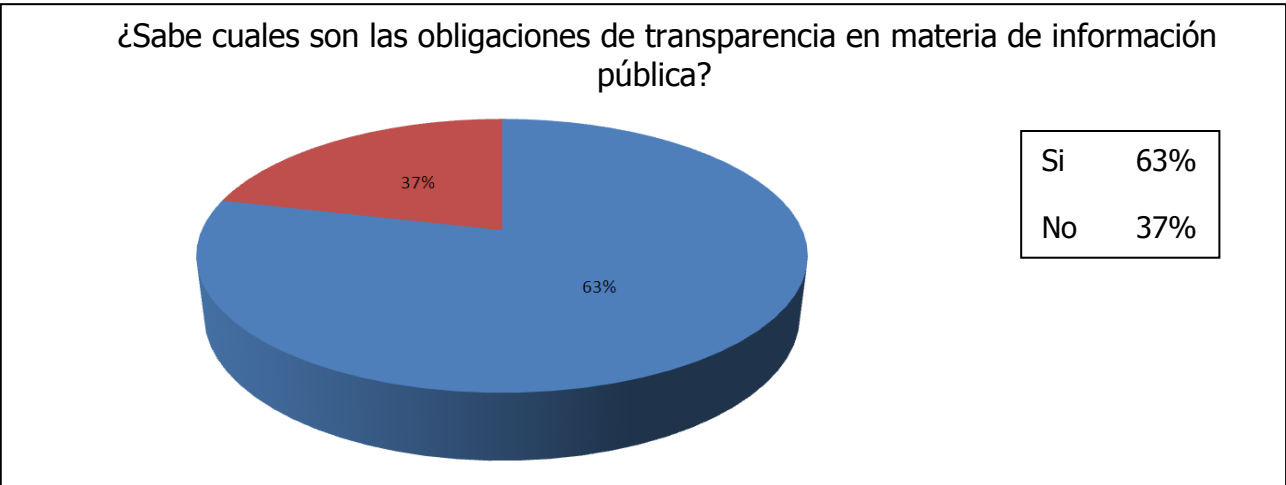
PREGUNTA NÚMERO SIETE



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que es un portal electrónico, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

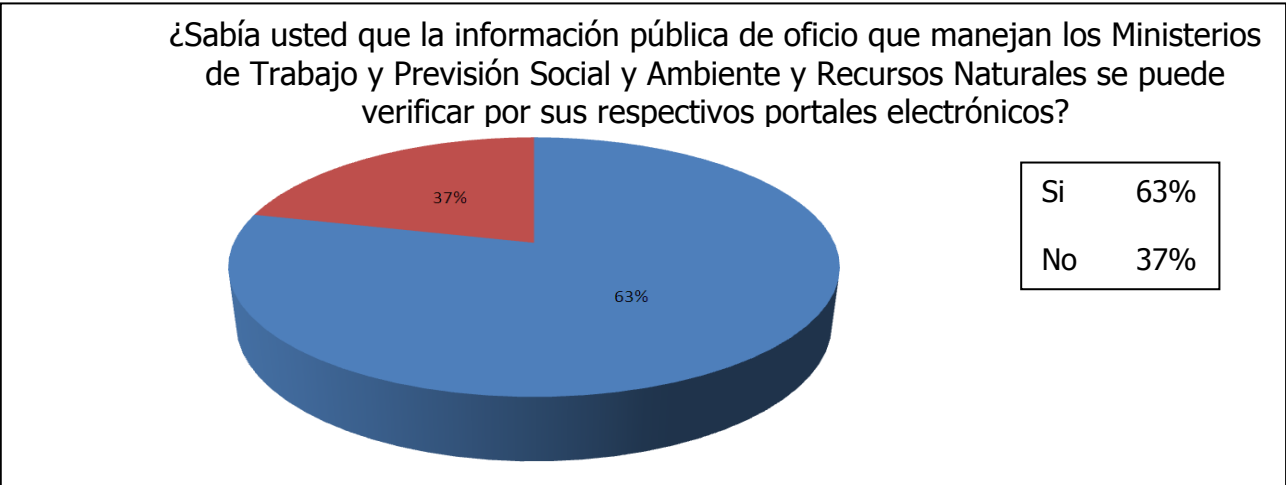
PREGUNTA NÚMERO OCHO



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe cuales son las obligaciones de transparencia en materia de información pública, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

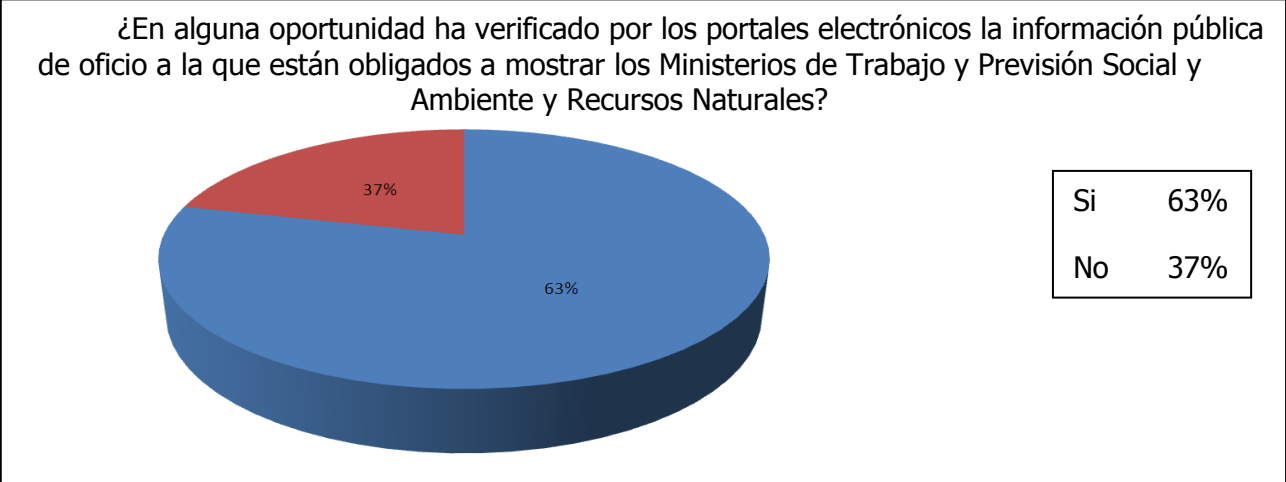
PREGUNTA NÚMERO NUEVE



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si sabe que la información pública de oficio que manejan los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales se puede verificar por sus respectivos portales electrónicos, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

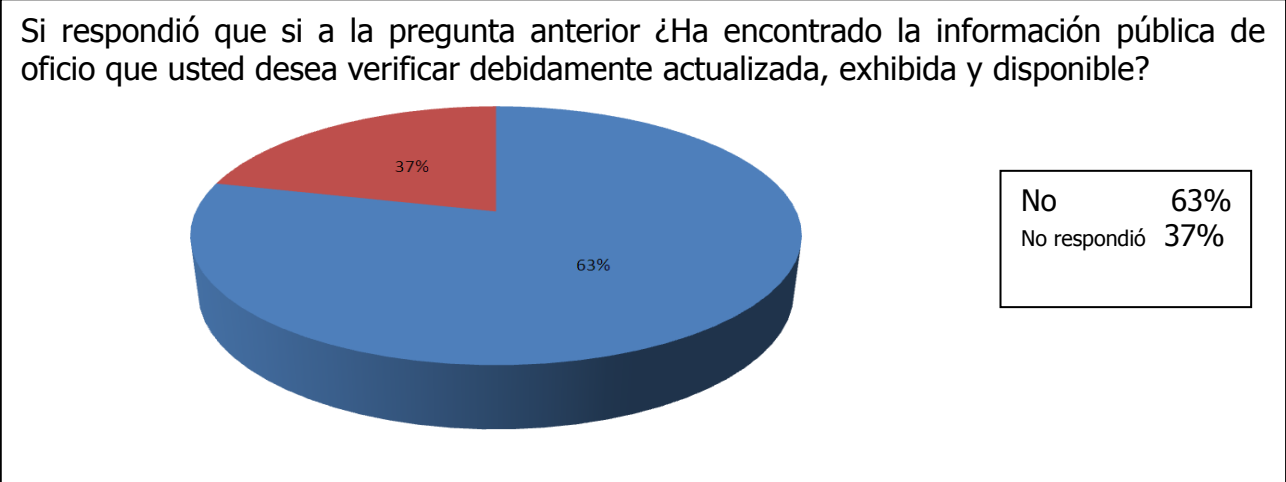
PREGUNTA NÚMERO DIEZ



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados si ha verificado en alguna oportunidad por los portales electrónicos la información pública de oficio a la que están obligados a mostrar los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Ambiente y Recursos Naturales, por lo que solo el treinta y siete por ciento no lo ha hecho.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

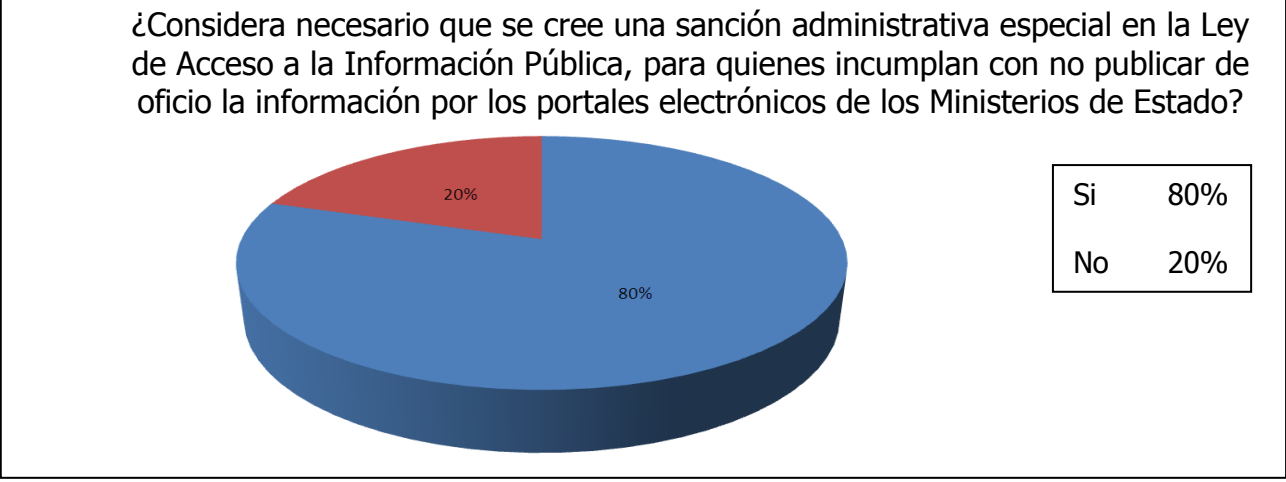
PREGUNTA NÚMERO ONCE



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados no ha encontrado la información pública de oficio debidamente actualizada, exhibida y disponible y el treinta y siete por ciento no respondió.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO DOCE



Conclusión: Se puede verificar que el ochenta por ciento de los estudiantes encuestados si considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado, por lo que solo el veinte por ciento no lo considera necesario.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

ENCUESTA PRACTICADA A LOS CIUDADANOS DE RETALHULEU

1. ¿Sabía usted que todo guatemalteco tiene derecho a que el gobierno a través de sus Ministerios rinda información de cómo manejan o administran sus bienes y actividades cotidianas?

Si

No

2. ¿Cree usted que actualmente los Ministerios de Estado han establecido algún procedimiento especial para rendirle cuentas a la población sobre todo el manejo de fondos públicos y el que hacer cotidiano de sus actividades?

Si

No

3. ¿Tiene usted acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como lo es el caso de computadoras o teléfonos inteligentes con acceso a internet?

Si

No

4. ¿Sabía usted que la información que manejan los órganos de estado se puede verificar por internet?

Si

No

5. ¿En algún momento ha ingresado a la página de un portal electrónico de algún Ministerio de estado?

Si

No

6. ¿Al momento de ingresar a los portales electrónicos de los Ministerios de Estado, ha encontrado la información que desea consultar o verificar, debidamente exhibida, actualizada y disponible?

Si

No

7. ¿Considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado?

Si

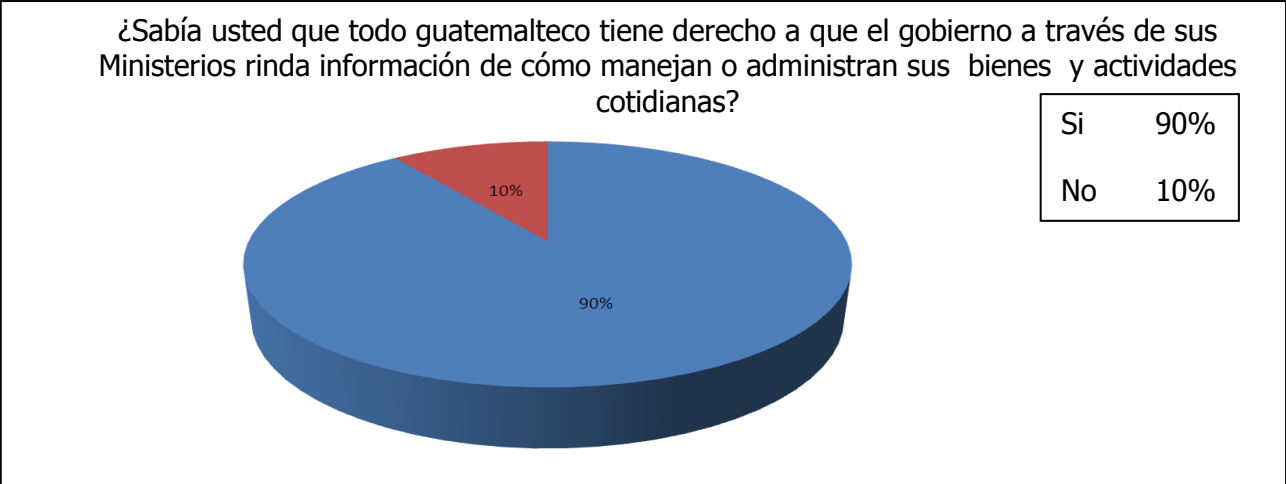
No

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

UNIDAD DE ANÁLISIS

CIUDADANOS DE RETALHULEU

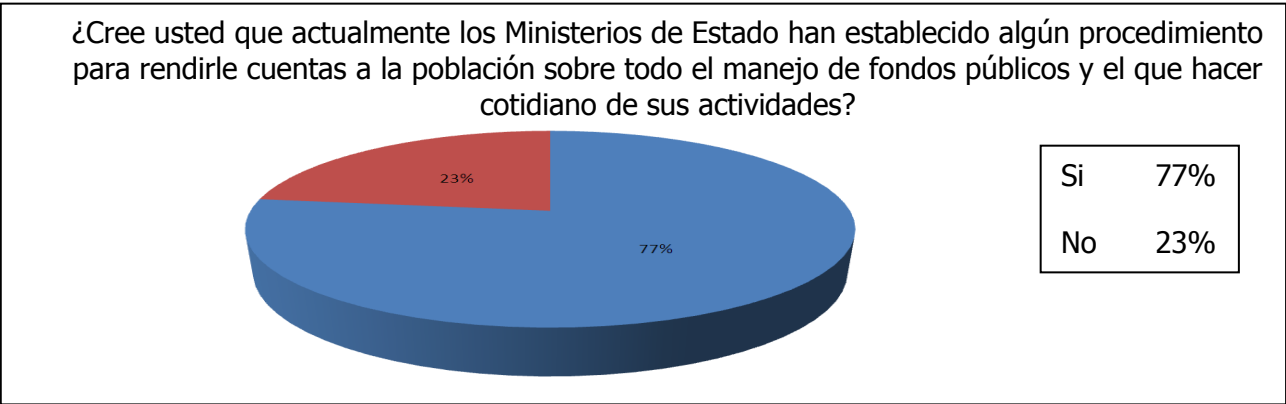
PREGUNTA NÚMERO UNO



Conclusión: Se puede verificar que el noventa por ciento de los ciudadanos retaltecos encuestados, si sabe que todo guatemalteco tiene derecho a que el gobierno a través de sus Ministerios rinda información de cómo manejan o administran sus bienes y actividades cotidianas, por lo que solo el diez por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO DOS



Conclusión: Se puede verificar que el setenta y siete por ciento de los ciudadanos retaltecos encuestados, si cree que actualmente los Ministerios de Estado han establecido algún procedimiento para rendirle cuentas a la población sobre todo en el manejo de fondos públicos y en el que hacer cotidiano de sus actividades, por lo que solo el veintitrés y tres por ciento no lo cree.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

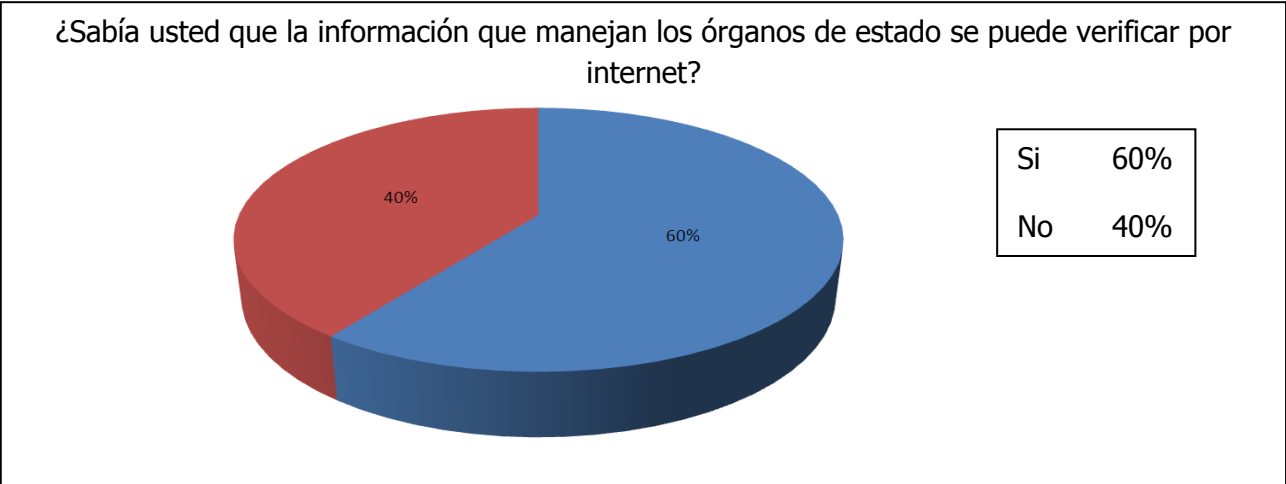
PREGUNTA NÚMERO TRES



Conclusión: Se puede verificar que el setenta y siete por ciento de los ciudadanos retaltecos encuestados, si tiene acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como lo es el caso de computadoras o teléfonos inteligentes con acceso a internet y tan solo el veintitrés por ciento no tiene el acceso a los mismos.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

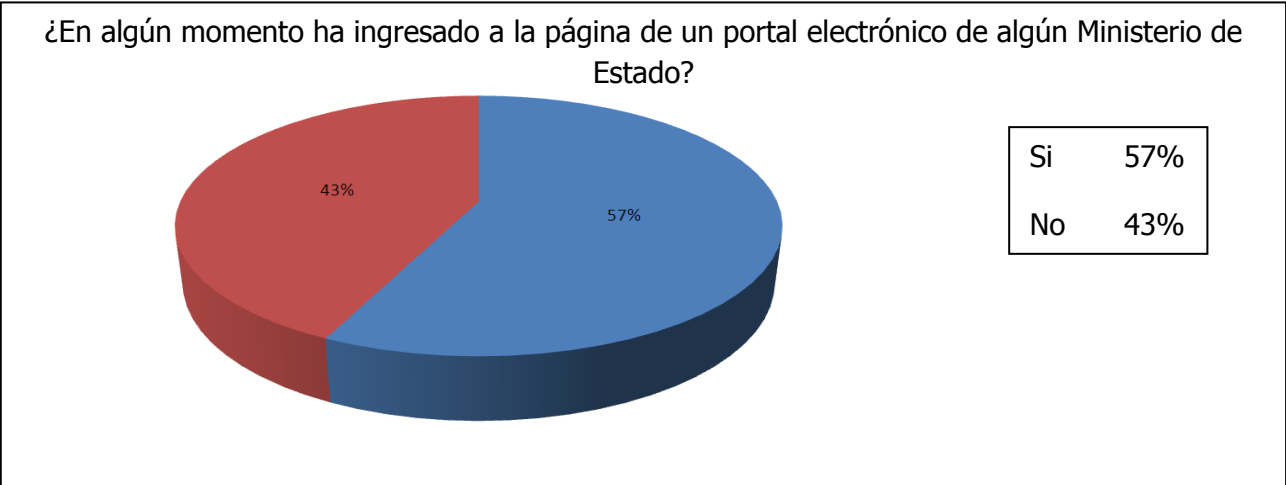
PREGUNTA NÚMERO CUATRO



Conclusión: Se puede verificar que el sesenta por ciento de los ciudadanos retaltecos encuestados, si sabe que la información que manejan los órganos de estado se puede verificar por internet y tan solo el cuarenta por ciento no lo sabe.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

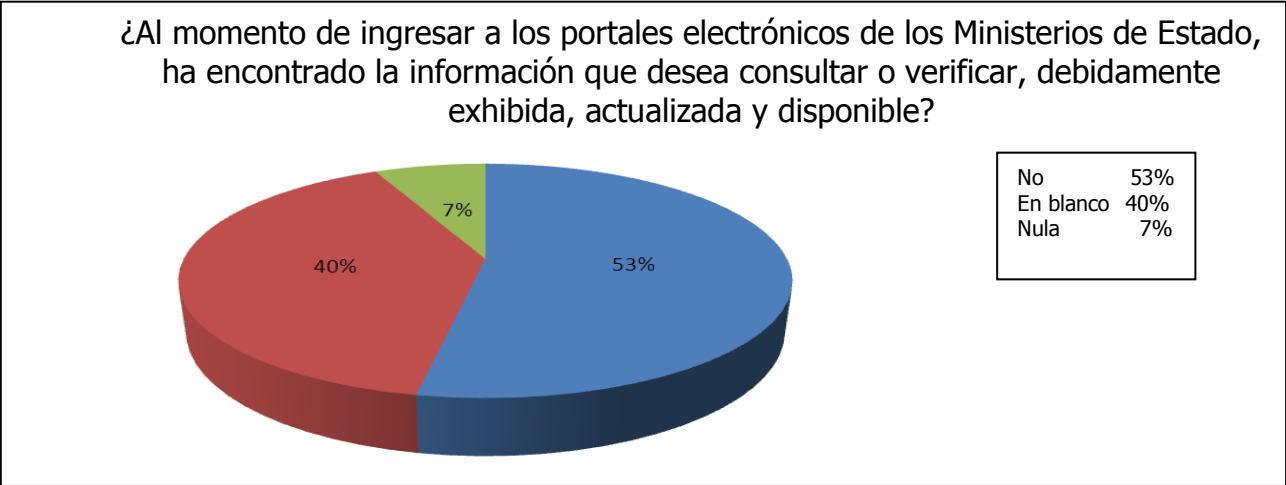
PREGUNTA NÚMERO CINCO



Conclusión: Se puede verificar que el cincuenta y siete por ciento de los ciudadanos retaltecos encuestados, si ha ingresado a la página de un portal electrónico de algún Ministerio de Estado, por lo que solo el cuarenta y tres por ciento no lo ha hecho.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO SEIS

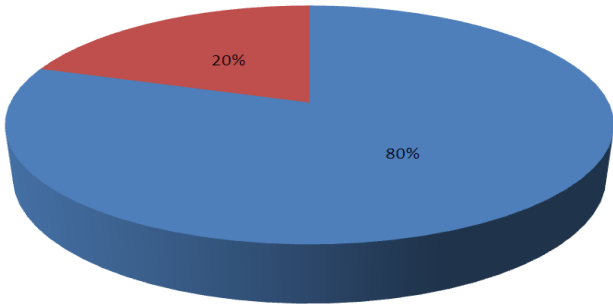


Conclusión: Se puede verificar que el cincuenta y siete por ciento de los ciudadanos retaltecos encuestados no ha encontrado la información que quiso consultar debidamente exhibida, actualizada y disponible, el cuarenta por ciento no respondió y el tres por ciento respondió que si lo encontró; aunque se consideró nula la respuesta por no ser congruente con la pregunta número cinco.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

PREGUNTA NÚMERO SIETE

¿Considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado?



Si	80%
No	20%

Conclusión: Se puede verificar que el ochenta por ciento de los ciudadanos retaltecos encuestados si considera necesario que se cree una sanción administrativa especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, para quienes incumplan con no publicar de oficio la información por los portales electrónicos de los Ministerios de Estado, por lo que solo el veinte por ciento no lo considera necesario.

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora en el mes de noviembre del dos mil trece.

BIBLIOGRAFÍA

General metodológica

➤ Textos

- Borja, R. 1991. Derecho Político y Constitucional. México, D. F. Edit. Fondo de Cultura Económica. P. 305.
- Calderón M., H. 2006. Derecho Administrativo Parte General. Guatemala, Gt. Edit. Orión. P. 59.
- Escobar Medrano, E. 2003. Antología Guatemalteca. Guatemala, Gt. Edit. Orión. P. 213.
- Gordillo, A. 2000. Tratado de Derecho Administrativo. 4 ed. Buenos Aires, Argentina. Edit. Fundación de Derecho Administrativo. P. 29 y 30.
- López Ziller, J. A. 2012. El Comercio y la Contratación Electrónica en el Marco Jurídico Guatemalteco. Guatemala, Gt. Edit. Camajá. P. 217.
- - - - - - . 2012. Manual de Preparación de Privados Fase Pública. Guatemala, Gt. Edit. Quetzal. P. 6
- Prado, G. 2005. Derecho Constitucional. 4 ed. Guatemala, Gt. Edit. Praxis. P. 174 a 175.
- - - - - - . 2006. Teoría del Estado. 2 ed. Guatemala, Gt. Edit. Praxis. P. 155 y 156.
- Quiroga Lavié, H. Sf. Derecho Constitucional. México, D. F. Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas. P. 42.
- Sierra González, J. A. 2006. Derecho Constitucional Guatemalteco. 2 ed. Guatemala, Gt. Edit. Estudiante Fenix. P. 69 a 71.

➤ Diccionarios

- Real Academia Española. Diccionario digital. 22 ed. España.

➤ **Legislación**

- Guatemala. 2007. Código Municipal. Decreto 12-2002.
- - - - - - . 2007. Constitución Política de la República de Guatemala. Edit. Cimgra.
- - - - - - . 2008. Ley de Acceso a la Información Pública. Decreto 57-2208. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2004. Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Decreto 1-86. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2001. Ley de Desarrollo Social. Decreto 42-2001. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2002. Ley de Descentralización. Decreto 14-2002. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2002. Ley de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2002. Ley de lo Contencioso Administrativo. Decreto 119-96. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2012. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto 11-2002. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2005. Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Decreto 89-2002. Edit. Arriola.
- - - - - - . 1997. Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114-97. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2002. Ley del Organismo Judicial. Decreto 2-89. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2000. Ley del Organismo Legislativo. Decreto 63-94. Edit. Arriola.
- - - - - - . 2000. Ley del Servicio Civil. Decreto 1748. Edit. Jiménez & Ayala.
- - - - - - . 2007. Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Decreto 52-2005. Edit. Cimgra.
- - - - - - . 2012. Ley Preliminar de Regionalización. Decreto 70-86. Edit. Arriola.

➤ **Otros**

- Habeas data. 2008. (En línea) Guatemala. Consultado 06/05/2013. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Habeas_data
- Unidad de información pública. 2008. (En línea) gt. Consultado 06/05/2013. Disponible en: <http://200.6.193.206/mineduc/>
- Unidad de información pública. 2008. (En línea) gt. Consultado 06/05/2013. Disponible en: <http://web.maga.gob.gt/wp-content/uploads/>

- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 06/05/2013. Disponible en: <http://www.civ.gob.gt/web/guest/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 06/05/2013. Disponible en: <http://www.dip.mindef.mil.gt/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 07/05/2013. Disponible en: <http://www.marn.gob.gt/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 07/05/2013. Disponible en: http://www.mcd.gob.gt/galerias/Transparencia/despacho_superior/articulo_10/
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 07/05/2013. Disponible en: <http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 07/05/2013. Disponible en: <http://www.mineco.gob.gt/mineco/infopublica/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 07/05/2013. Disponible en: <http://www.minex.gob.gt/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 08/05/2013. Disponible en: <http://www.minfin.gob.gt/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 08/05/2013. Disponible en: <http://www.mingob.gob.gt/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 08/05/2013. Disponible en: <http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/articulo-10/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 08/05/2013. Disponible en: <http://www.mspas.gob.gt/libreacceso/index.php/articulo-10/>
- Unidad de información publica. 2008. (En línea) gt. Consultado 08/05/2013. Disponible en: www.mides.gob.gt/transparencia


 Vo. Bo. Lcda. Ana Teresa de González.
 Bibliotecaria CUNSUROC.

